

Violencia urbana y el proceso de desmovilización, desarme y reincorporación (DDR) de las FARC-EP en Buenaventura, Valle del Cauca

Ligia Azucena Morales Polanco

María Sol Calderón

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Javeriana

Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz

Dir. Hernando Llano Ángel

Agosto del 2021

ARTICULO 23 de la Resolución
No. 13 del 6 de Julio de 1946, del
Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de Tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las Tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia”.

Agradecimientos

A nuestras virtuosas familias, que estuvieron allí, guardando silencio y resistiendo nuestras grandes ausencias; de no ser así, no hubiese sido posible forjar nuestros conocimientos y aprendizajes durante la trayectoria académica.

A nuestros hijos, que nos acompañaron e hicieron aportes técnicos en la elaboración del presente documento, además de brindarnos, como siempre, todo el amor y la comprensión. Los amamos infinitamente.

Los apartes de historias contadas en los capítulos, más otras que por respeto a las víctimas, sus memorias y actores que desearon ver una Colombia sin guerra no se escribieron. Agradecemos por confiar en nosotras sus más profundas y dolorosas experiencias que en su momento fueron envueltas en las ansias, esperanza, temor y valentía.

Finamente y no menos importante agradecemos inmensamente al CICR, por brindarnos su apoyo incondicional y económico para sí alcanzar el título de Magister en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la universidad Javeriana.

Tabla de Contenido

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	12
1.1. Presentación.....	13
1.2. Definición y planteamiento del problema.....	14
1.3. Justificación e impacto esperado	23
1.4. Objetivos	25
CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL	26
2.1.1 Marco teórico: Violencia Urbana y Proceso de Desmovilización, Desarme (DDR) de las FARC-EP	26
2.1.2 Violencia Urbana	26
2.1.3 <i>Proceso Desmovilización, Desarme y Reincorporación (DDR) de las FARC-EP</i>	40
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	48
3.1. Hipótesis	48
3.2. Tipo y diseño de investigación	48
3.3. Población y Muestra Seleccionada	50
3.4. Instrumentos de recolección de información.....	53
3.5. Técnicas de análisis de información.....	54
3.6. Procedimientos de análisis de información	55
3.7. Consideraciones éticas.....	57
CAPÍTULO IV. CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA URBANA EN BUENAVENTURA	58
4.1. La expansión portuaria.....	62
4.2. Grupos armados presentes en el área urbana.....	66

4.3.	Corrupción y narcotráfico.....	76
CAPÍTULO V. PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA: DESMOVILIZACIÓN, DESARME Y REINCORPORACIÓN –DDR- DE LAS FARC-EP, BAJO LA MIRADA DE BUENAVENTURA.....		
LA MIRADA DE BUENAVENTURA.....		
5.1.	Historia de la llegada de las FARC-EP a Buenaventura	84
5.2.	Proceso de desmovilización, dejación de armas y reincorporación a la vida civil del Frente 30 de las FARC-EP, Manuel Cepeda y la Arturo Ruiz.....	95
CAPÍTULO VI: RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN		
109		
6.1.	¿Qué pasó en las zonas de Buenaventura dejadas por las FARC-EP?	109
6.2.	Implicaciones para la población por la presencia de los grupos armados.....	118
6.3.	Desaparición forzada.....	131
6.4.	Desplazamiento forzado.....	134
6.5.	Violencia sexual	135
7.	Conclusiones	141
8.	Referencias	152
9.	Apéndices	164
9.1.	Consentimiento informado	164
9.2.	Texto, entrevistas aplicadas.....	166
9.3.	Rejilla de preguntas entrevistas semiestructuradas	166

Lista de Tablas

Tabla 1 Procesos relevantes de negociación de Paz en Colombia, desde la década de los 80	45
Tabla 2 Presencia de grupos armados en la zona rural- Buenaventura.....	110
Tabla 3 Presencia de grupos armados en la zona Urbana de Buenaventura	114
Tabla 4 Víctimas del conflicto armado en Buenaventura entre 1959 -2020.....	119
Tabla 5 Factores que inciden en el subregistro de los hechos victimizantes en Buenaventura .	139
Tabla 6: Caracterización 1	Error! Bookmark not defined.
Tabla 7: Caracterización 2	Error! Bookmark not defined.
Tabla 8: Caracterización 3	Error! Bookmark not defined.
Tabla 9: Caracterización 4	Error! Bookmark not defined.
Tabla 10: Caracterización 5	Error! Bookmark not defined.

Tabla 11: Caracterización 6**Error! Bookmark not defined.**

Tabla 12: Caracterización 7**Error! Bookmark not defined.**

Tabla 13: Rejilla de preguntas entrevistas semiestructuradas 166

Tabla de Figuras

Figura 1: Atardecer Buenaventura 12

Figura 2: Mapa Buenaventura rural y urbana 16

Figura 3: Mapa Zona Urbana de Buenaventura 58

Figura 4: Mapa de riesgo zona urbana Buenaventura 59

Figura 5: Mapa con ubicación grupos armados en el área urbana en el año 20205 72

Figura 6: Mapa de Actores Armados en Buenaventura 2012-2020 117

Figura 7: Víctimas Buenaventura 2012- 2020.....	121
Figura 8: Homicidios.....	128
Figura 9: Desaparición Forzada.....	131
Figura 10: Desplazamiento forzado.....	134

SIGLAS

AGC: Autodefensas Gaitanistas de Colombia

ARN: Agencia para la Reincorporación y la Normalización

AUC: Autodefensa Unidas de Colombia

BAO: Bandas Armadas Organizadas

BA: Banda Armada

BACRIM: Bandas Armadas Criminales

CNR: Consejo Nacional de la Reincorporación

CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

CONPA: El consejo Nacional de Paz Afrocolombiano

CNMH: Centro Nacional de Memoria Histórica

DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DDHH: Derecho Internacional de los Derechos Humanos

DET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

DIH: Derecho Internacional Humanitario

ELN: Ejército de Liberación Nacional

EPL: Ejército Popular de Liberación

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo

FONADE: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo de Colombia

FUP: Fuerzas Unidas del pacifico

INMLCF: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

MM&V: Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU

M19: Movimiento 19 de abril, fue una organización guerrillera urbana colombiana

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes

ODDR: Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración

ONU: Organización de Naciones Unidas

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PNIS: Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (punto 4 del acuerdo final para paz).

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

POT: Plan de Ordenamiento Territorial

PTN: Puntos Transitorios de Normalización

RNI: Registro Nacional de Información

SAT: sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo

UARIV: Unidad de atención y Reparación Integral para las Víctimas

ZVTN: Zonas Veredales Transitorias de Normalización

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Figura 1: Atardecer Buenaventura



Morales, Ligia. (2021). *Atardecer Buenaventura*. Tesista de la Investigación. Buenaventura, Valle del Cauca.

1.1. Presentación

La presente tesis busca determinar la relación existente entre el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción (en adelante DDR) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (en adelante FARC - EP) y las nuevas dinámicas de la violencia urbana en Buenaventura, Valle del Cauca.

Lo anterior se aborda a través de seis capítulos, el primero y el segundo contienen la parte introductoria, el marco referencial y el estado del arte; el segundo aborda contextualmente las categorías de violencia urbana y el proceso del DDR de las FARC-EP, en el marco del proceso de paz, en el tercer capítulo el marco metodológico. El capítulo cuarto desarrolla la historia de la violencia en Buenaventura desde sus diferentes causas y actores. El quinto capítulo toma el proceso de DDR desde su implementación en el año 2014 hasta el año 2020. Finalmente, el sexto capítulo presenta los resultados y conclusiones de la investigación.

Lo anterior se hizo a partir de la revisión y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2020.

Para tal fin se analizó las percepciones aportadas por diferentes actores; entre ellos, líderes sociales y comunitarios, funcionarios públicos y exintegrantes de los actores armados que conocen Buenaventura, que enfrentan en la cotidianidad y desde sus diversos escenarios una nueva dinámica marcada por el DDR.

Los entrevistados pusieron sobre la mesa sus percepciones respecto de las causas y consecuencias que inciden en la violencia urbana en Buenaventura, así como sus posibles relaciones con el DDR, como la presencia de actores armados y su actual

reacomodación, el control del territorio en el área urbana, el manejo de las rutas de narcotráfico al interior del puerto, la incidencia de los actores en conflicto a nivel político y las implicaciones en cuanto a la seguridad para los habitantes del casco urbano. También las percepciones sobre los factores que han incidido para que los excombatientes hayan continuado en el proceso de reincorporación o hayan decidido abandonarlo y retomar las armas.

Las percepciones de los entrevistados se complementaron con el análisis de datos cuantitativos de las distintas bases oficiales, como el Registro Nacional de Información (en adelante RNI), la base de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante INMLCF), y la base de datos de la Policía, las cuales van a contribuir a determinar la incidencia del DDR en la violencia urbana; pero también de causas más intrínsecas a las bandas armadas organizadas (en adelante BAO) y otros actores que entran en escena: de la Fuerza Pública, la política y de la sociedad civil, que serán producto de análisis en esta investigación.

1.2. Definición y planteamiento del problema

Colombia a lo largo de su historia ha atravesado por una violencia fundada en intereses políticos, económicos y sociales, representados en la guerra bipartidista, la guerra de guerrillas, la aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el narcotráfico entre otros, ocasionando graves consecuencias humanitarias a la población civil (Sánchez, 1987).

De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Información (RNI), a octubre del 2020, en Colombia 9.057.952 personas han sido reconocidas como víctimas de la violencia; asociadas históricamente, más a las regiones rurales. Sin embargo, es de reconocer que en el escenario de violencia entra también, de manera significativa, la violencia en el contexto urbano.

Según Sánchez, la violencia urbana es más social que política y está más enmarcada en las relaciones interpersonales, tanto en la esfera de la vida pública como de la privada, es más difusa en su gestación y en la manera de manifestarse. Pero también en la imposibilidad del gobierno de ofrecer seguridad y servicios sociales básicos, lo que da lugar a confrontaciones violentas entre los grupos que compiten por los escasos recursos disponibles (Sánchez 1987, p.56).

Sin embargo, a pesar de la diferenciación hecha por Sánchez, no puede pensarse que la violencia urbana esté dissociada de la rural, ambas se retroalimentan. Así lo revelan los grupos guerrilleros, en particular las FARC-EP, que eran tradicionalmente rurales; hicieron presencia en el contexto urbano desde 1982, a través de las milicias bolivarianas o redes urbanas, con presencia en Bogotá a través el frente Urbano Antonio Nariño. O en Cali, con el frente Manuel Cepeda Vargas, donde establecen alianzas con el crimen organizado.

Otro caso específico es el narcotráfico, pues si bien la producción de sustancias ilícitas se da principalmente en lo rural, es en la ciudad donde se expenden, donde hacen el lavado de activos, y donde los narcotraficantes llegan para encubrirse y seguir delinquir.

Buenaventura, lugar donde se desarrolló la investigación, no está exenta de la situación que vive el país y el departamento del Valle del Cauca, dada la presencia histórica de grupos armados, la dinámica del narcotráfico, aunado a la corrupción y a la pobreza estructural, los cuáles han agudizado y favorecido la violencia que aqueja a Buenaventura.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial:

Figura 2: Mapa Buenaventura rural y urbana



Mingorance (2015). *Ubicación de Buenaventura zona del Pacífico*. Colombia, Valle del Cauca

Buenaventura es el municipio más extenso del departamento del Valle del Cauca, con un área de 6.297 Km² (29.7% del área total del departamento). Al norte, limita con el departamento del Chocó; al sur, con el departamento del Cauca; al oriente, con los municipios de Cali, Calima (Darién), Dagua y Jamundí y por el occidente, con el océano Pacífico (Concejo Municipal de Buenaventura, 2001). (2018, p. 5).

El municipio se caracteriza por un clima cálido muy húmedo, con precipitaciones anuales cercanas a 6.980 mm, la red hidrográfica principal del municipio está comprendida por los ríos Naya, Yurumanguí, Cajambre, Mayorquin, Raposo, Anchicayá, Dagua, Bahía de Buenaventura, Bahía Málaga, Calima, Bajo San Juan y quebradas menores.

Es el principal puerto colombiano en el Litoral Pacífico por tener un alto movimiento de carga comparado con el resto de puertos del país, manejando el 55% de la mercancía que entra y sale de Colombia. Está constituido por 12 muelles, compartidos por la Armada Nacional y la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. En cuanto a la administración, el sector privado participa con el 83% de la actividad económica portuaria y el sector público participa con el 17%, a través de la Alcaldía municipal y el Ministerio de Transporte, (IEPRI- p. 52).

La ciudad consta de una zona insular (isla Cascajal), donde se concentra la mayoría de actividades económicas y de servicios y otra continental, esta última con una vocación principalmente residencial. Está dividida por doce (12) comunas, de las cuales la primera (1) a la cuarta (4) pertenecen a la zona insular, las demás comunas pertenecen al área continental. Su configuración se ha dado

en forma longitudinal al lado y lado de su vía principal, la Avenida Simón Bolívar. (Plan de Ordenamiento Territorial -Convivencia Pacífica desde la Diversidad).

La población total de Buenaventura, de acuerdo con las cifras del DANE para el año 2018, es de 308.000 habitantes, de los cuales el 90% son afrodescendientes, el 9% población indígena y un 1% población mestiza.

La relación entre la violencia urbana y rural en Buenaventura se puede evidenciar según Flórez y Ruiz (2018) desde la década de los 90 cuando llegan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), a través de las milicias urbanas a ubicarse en los barrios de bajamar y otras comunas cercanas al bajo Calima, donde ya vivían familias provenientes del área rural de la Costa Pacífica; desde allí perpetraban acciones violentas.

Pero la situación en el área urbana se recrudece a inicios del 2000 con la llegada del paramilitarismo, a través del Bloque Calima que entran a disputarse el control territorial y logran desplazar a las FARC-EP, que se repliegan en el área rural; sin embargo, aunque mínima y estratégicamente, la FARC-EP mantienen presencia en el área urbana para abastecerse y mantener algunas rutas del narcotráfico.

Otro momento que marca la violencia en el área urbana, continúa afirmando Flórez y Ruiz (2018), es la desmovilización paramilitar y retoma de la ciudad por grupos pos-desmovilización y delincuencia común organizada, representada en dos bandas criminales.

Una, “La Local”, nombrada así por la policía como una manera de dar a entender que su impacto es limitado, sin mayores conexiones hacia afuera, según McDermott (2014), tiene su origen en las Bandas Armadas Criminales (en adelante BACRIM), conformada por Mario Castaño, uno de los máximos cabecillas de los paramilitares, en el Urabá Antioqueño, aunque actualmente los de Buenaventura actúan de manera independiente de las otras regiones.

La otra banda armada, denominada “La Empresa”, según CNMH (2018) “fue conformada en el 2010 por Orlando Antonio Cuero, alias El Mono u Orejas, un exintegrante del Bloque Calima que no se desmovilizó. A esta organización se vincularon exintegrantes del Bloque Calima que ya hacían presencia en la zona” (p 483).

Ambos grupos entran en alianzas con las FARC-EP para asegurar las rutas del narcotráfico en lo rural. Esta etapa se caracteriza por la sevicia con la que desarrollan sus acciones violentas como la desaparición forzada, la tortura representada en las casas de pique y cementerios clandestinos.

El uso de las casas de pique hizo que los ojos del mundo se tornaron a este punto del pacífico colombiano, según Gisbert, Pinto, y Sulé (2015, p. 155). En Buenaventura entre los años el 2013 y 2014, la defensoría del pueblo a través de alertas tempranas reportó que, del total de homicidios cometidos, un porcentaje alto se llevaron a cabo en las denominadas ‘Casas de pique’ “donde las personas eran descuartizadas y asesinadas para luego arrojarlas al mar o enterrarlos en fosas clandestinas. Las personas eran torturadas con sevicia y crueldad mientras los vecinos escuchaban impotentes a las víctimas gritar e implora piedad.” (p155), barrios de la comuna 10 como Bello horizonte, Carlos Holmes, el Progreso fueron usados para tales fines.

Las casas de pique como lo expresa la CNMH (2015) hicieron parte de la herencia dejada por el paramilitarismo, en cuanto a la sevicia con las que se torturaba y se descuartizaba los cuerpos, solo que aquí se hacían en espacios cerrados bien sea, en las zonas de esteros y de baja mar, o en el corazón de la ciudad, pero buscando dejar un claro mensaje de terror al exterior, para lograr sus propósitos de dominación ante los otros actores armados y subordinación de la comunidad. Pero también para no dejar huellas que los pudieran incriminar judicialmente.

A la par se da también el desarrollo de megaproyectos portuarios, teniendo en cuenta que Buenaventura es considerado el puerto más importante de la costa del Pacífico. Según Preciado (2015), esto se debe a varios factores como su ubicación privilegiada, ya que las principales rutas marítimas mundiales pasan por allí, y es el puerto del continente americano más cercano al mercado asiático, lo que hace posible conectarse con múltiples puertos o lugares distintos en todo el mundo.

Su importancia, continúa Preciado, también radica en el volumen de carga pues en ese lugar se maneja el 55% de la carga de entrada y salida del país; además cuenta con terminales especializadas en contenedores, gráneles sólidos, gráneles líquidos, apoyada en un alto nivel de infraestructura y tecnología que le ha permitido dar rendimientos en términos de indicadores de eficiencia. Actualmente cuenta con cuatro (4) muelles que operan de manera simultánea para atender el volumen de carga proveniente del exterior como son: Cemas, Grupo Portuario, Tcbuen, siendo el principal puerto Sociedad Portuaria Regional Buenaventura. En el 2016 se construye el Puerto Industrial Aguadulce con una capacidad instalada en su terminal de contenedores de 600.000 TEUs/año y se sitúa en 128 hectáreas de las cuales 84 son concesión y 44 corresponden a zona privada.

Un terminal de contenedores de última generación que inició operaciones en noviembre de 2016, logrando altos estándares de productividad y seguridad a nivel internacional en todas sus operaciones.

Se presenta una paradoja, que, a pesar del crecimiento portuario, la calidad de vida de sus habitantes no mejora; de acuerdo con el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUD) el 80,6% viven en condiciones de pobreza; y 43,5% viven en condiciones de indigencia, con un índice estimado del 29% en desempleo, y con subempleo un 35%. Además de unos precarios índices de cobertura en educación, de servicio públicos y un déficit cualitativo en vivienda cercano a las 30.000 unidades. Lo anterior es una expresión dramática de violencia estructural, consecuencia de la exclusión económica y social, que cataliza y potencia las expresiones de la violencia directa y sus secuelas de racismo y estigmatización criminal de la población negra, como expresión de violencia cultural histórica.

Adicional a lo expresado, Ávila (2019) afirma que el puerto también se convirtió en un lugar estratégico para exportar drogas ilícitas, la disputa por el control de parte de las dos bandas armadas es sin tregua, utilizando todo tipo de medios, que pasan por las amenazas, asesinatos selectivos, desplazamientos, pero también extorsionando y/o corrompiendo a funcionarios con poder de decisión al interior de las empresas privadas, funcionarios públicos y la policía.

Finalmente, se puede observar otro periodo que transcurre desde el año 2013 hasta la actualidad, marcado por el proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla más antigua de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del

Pueblo (FARC-EP). Para el caso de Buenaventura, reflejado en la desmovilización del Frente 30, proceso esperanzador por el desescalamiento de la violencia.

De acuerdo con las cifras de fuentes oficiales de la policía, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), se logra observar que a partir del año 2014 hasta el año 2016, durante las negociaciones y posterior a la firma del acuerdo de paz, se da un descenso significativo de hechos victimizantes, como los homicidios, desplazamientos forzados, amenazas y desaparición forzada. Sin embargo, estas cifras empiezan a sufrir un cambio a partir del año 2017 cuando la curva vuelve a ascender, como se evidencia a continuación.

Respecto a los homicidios, según las cifras del INMLCF (2019), estos pasaron de 146 en el año 2014 a 76 casos en el año 2015, con un descenso del 52%, pero, a partir del año 2018 se vuelve a presentar un repunte con 89 casos; en el año 2019, 90 casos y en el año 2020 111. Igual sucede con el desplazamiento forzado, según las cifras del Registro Nacional de Información (RNI, 2019), si bien, decrece aproximadamente en un 65% del año 2014 al año 2016, en el año 2017 la curva empieza ascender con 6.290 familias y en el año 2018 con 7.694, en el 2019 se da de nuevo repunte con 14.622 familias y para el 2020 se presentó de nuevo un descenso de 3.742 familias. este último se podría adjudicar a la pandemia del COVID-19.

Lo anterior conduce a la pregunta de investigación *¿Qué incidencia ha tenido el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- EP) en la violencia urbana que se vive en Buenaventura, Valle del Cauca en los periodos comprendidos año 2012 al año 2020?*

La anterior pregunta, será objeto de estudio en la presente investigación. Se pretende hacer un análisis detallado de la violencia urbana en este periodo frente al Proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) y la emergencia de los grupos disidentes, más la reconfiguración de las bandas armadas o emergentes ya presentes en el puerto de Buenaventura.

1.3. Justificación e impacto esperado

En esta investigación se presentan situaciones contemporáneas que giran en torno a los Derechos Humanos y los procesos de construcción de paz en Colombia, haciendo énfasis en el último proceso de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP. En este punto se propone el análisis de un momento específico del proceso paz, relacionado con desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC-EP ubicado en Buenaventura, y su incidencia en la violencia urbana.

Aspectos que no se han profundizado aún a nivel de investigaciones, toda vez que son hechos recientes y sus actores están en proceso de reacomodo y definición; cobrando un enorme sentido de analizar y evaluar la forma como se ha venido cumpliendo o no el punto tercero del Acuerdo de Paz en lo relativo al proceso de DDR, para el caso de Buenaventura.

Como investigadoras del proyecto, se cuenta con un valor agregado al tener un acceso directo y privilegiado por razones laborales en comunas como la 10, 11 y 12, y a barrios como el Progreso, Caldas, Bello Horizonte, Carlos Holmes, Antonio Nariño entre otros, donde las consecuencias de la violencia son más altas, al igual que la presencia de los actores armados, logrando una mirada desde las entrañas del problema, y obteniendo así información más fiable, precisa y oportuna.

Este trabajo abre un espacio que hace visibles las percepciones de primera mano, por un lado, de quienes son partícipes activos del proceso; entre ellos las y los excombatientes como sus actores principales, además de los actores institucionales que tienen bajo su responsabilidad monitorear y atender las nuevas dinámicas que involucran a la población civil y por ende afectan los Derechos Humanos. Por último, los líderes y personas de la comunidad, quienes en la cotidianidad son testigos y víctimas de las nuevas dinámicas violentas en su territorio.

Así mismo, se analizarán las percepciones dadas por los entrevistados en torno a las causas de la violencia urbana en Buenaventura y sus posibles relaciones con el proceso del DDR, de las FARC-EP, asociadas a la reacomodación de los actores armados, el control territorial y su asociación con el narcotráfico, la influencia de los actores en el campo político y las implicaciones y afectaciones económicas, sociales y de orden público para la comunidad.

En ese orden de ideas, con los resultados de esta investigación se pretende aportar elementos de análisis que pongan de manifiesto y alerten sobre las nuevas dinámicas que emergen cuando actores que buscan salidas diferentes a las implementadas históricamente, se enfrentan a una realidad política, económica y social que se les impone frente a sus expectativas y les induce a replantear sus ideales primarios. Y en ese sentido confrontar las respuestas institucionales con la situación actual, buscando que puedan en consecuencia y oportunamente contextualizarse y ajustar sus políticas, programas y proyectos a las nuevas realidades, que estén más enmarcadas a construir una cultura de paz.

Finalmente, el estudio es relevante para los propósitos de la maestría y de la universidad, en la medida que se asienta en el andar crítico que caracteriza los análisis sobre Derechos Humanos y de las problemáticas sociales que esta ha abanderado, y que ha logrado promover a través de los grupos de investigación, en particular la de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

1.4.Objetivos

Objetivo general:

Determinar la relación existente entre el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- EP y las nuevas dinámicas de la violencia urbana en Buenaventura, Valle del Cauca.

Objetivos específicos:

1. Describir el comportamiento de la violencia urbana posterior al DDR- FARC-EP entre los años 2012 al 2020 en la ciudad de Buenaventura.
2. Caracterizar los factores asociados al DDR - FARC-EP y su incidencia en la violencia urbana de Buenaventura.
3. Analizar las percepciones dadas por los entrevistados en torno a la incidencia del proceso de desmovilización, desarme y reincorporación, así como su relación con la violencia urbana en Buenaventura.

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL

2.1.1 Marco teórico: Violencia Urbana y Proceso de Desmovilización, Desarme (DDR) de las FARC-EP

2.1.2 Violencia Urbana

El presente marco teórico ha sido elaborado con referentes teóricos que han analizado la violencia desde su concepto, sus formas de expresión, escenarios donde se desarrollan, sus causas y consecuencias. También aborda formas de resolución de conflictos en particular procesos de desarme, desmovilización y reinserción de grupos armados como las FARC-EP.

En lo referente a la violencia, Johan Galtung citado por Calderón (2009), plantea que si bien la violencia es vista como el fracaso en la transformación de conflictos, también puede ser interpretada como el motor de las reservas de energía que pueden ser utilizadas para fines constructivos, no solo para fines destructivos. (p.74)

Lo anterior implica que la violencia no solo puede ser vista desde lo negativo, lo disfuncional o fracaso, dependiendo del contexto en el que se presente, también puede ser una oportunidad de cambio, de transformación a otras expresiones de solución de los conflictos.

Calderón (2009) retoma a Galtung cuando plantea que el tratamiento del conflicto por medios no violentos y creativos es crucial para lograr la paz y eso requiere profundizar en la cultura y estructura social, donde se origina el conflicto, como mejor forma de prevenir y en su caso resolver los brotes de violencia. En este orden de ideas para Galtung el conflicto se mueve en varias dimensiones, puede llevar a una crisis, pero también generar una oportunidad, el conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano, que está en constante transformación, e implica una experiencia vital holística.

Galtung invita a reconocer el conflictos no solo desde la dualidad de bueno o malo; si no a entenderlos lógicamente, utilizando criterios científicos para analizarlos, y metodologías para transformarlos.

Galtung citado por Calderon (2009) afirma reiteradamente que las teorías de los conflictos son para la eternidad. “Esta constatación realista, en medio de un mundo en constante cambio, tiene que empujar a una redención de las categorías mentales y por ende de las concepciones científicas que son los medios para acercamos a conocer y comprender la realidad” (p.67)

Para Galtung la violencia tiene una triple dimensión: directa, estructural y cultural. La violencia directa es visible toda vez que se refleja en el cuerpo del individuo, su manifestación puede ser por lo general física, verbal o psicológica. La violencia estructural se trata de la violencia que atañe a los sistemas sociales, políticos y económicos mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el mundo. Mientras que la cultural concierne a aquellos aspectos de la cultura, materializados por medio de la religión y la ideología, el lenguaje y el arte, y las ciencias en sus diferentes manifestaciones, que justifican o legitiman la violencia

Para efectos de la presente investigación se profundizará en uno de los escenarios donde se desarrolla la violencia, las urbes, denominada “violencia urbana”, representado de manera particular por la violencia directa, de acuerdo con Calderón (2018, p. 101), toda vez que hace uso de acciones como la amenaza o la fuerza para alcanzar un determinado propósito u objetivo. Esta violencia también está asociada, de manera más o menos explícita, a la tasa de homicidios y de otras formas de criminalidad presentes dentro de una ciudad. Sin embargo, no se puede desconocer que en estos espacios la violencia también está marcada por problemas estructurales, que se han gestado en el largo plazo, que son de naturaleza pública, y donde su existencia condiciona otros problemas, favoreciendo un proceso de crecimiento de la desigualdad por la persistencia de una práctica centralista del desarrollo, una economía

dual y mayoritariamente informal y porque las urbes no garantizan a sus ciudadanos , trayectorias escolares totales, oportunas y plenas, ni un acceso efectivo a la salud, a al pleno desarrollo cultural.

El concepto de violencia urbana, de acuerdo con la revisión hecha a través de diferentes autores se identificó que, si bien no hay aún un concepto unificado, cada uno aporta a la construcción y definición de lo que esta puede significar.

Para Silva (2008), la violencia urbana es una categoría colectivamente construida que opera como “una categoría de entendimiento de sentido común que consolida y confiere sentido a la experiencia vivida en las ciudades, bien como orienta instrumental y moralmente los cursos de acción” (p.35). Lo anterior lleva a interrogarse acerca de las desigualdades que atraviesan a los diversos sectores sociales y organizaciones colectivas para participar de la construcción simbólica de la sociedad.

Carrión (2008, p. 114), plantea que se tienen tres acepciones diferentes de violencia urbana “una, que le endilga a lo urbano la cualidad causal; otra, que le asigna la condición de un tipo particular de violencia; y la tercera, que la presenta como si fuera símil de violencia”. En el mismo sentido Sánchez (1987), plantea que la violencia urbana tiene como escenario principal el interior de las ciudades, reflejando crudas realidades de ciudades segregadas, en donde la concentración de la riqueza se acumula en ciertas zonas en detrimento de otras, generando una desigualdad socio-espacial.

Por su parte, Briceño (2002), esta desigualdad y falta de oportunidad para la juventud, se identifica como causa transversal de la violencia urbana y son producidas por las ambiguas relaciones de poderes e intereses de algunos sectores, además de las consecuencias del rápido proceso urbanístico que se viene dando aproximadamente desde el siglo XX. Con esto, viene la aparición de nuevos actores sociales con nuevas reivindicaciones, lo cual contrasta con la incapacidad del Estado para responder favorablemente,

sin embargo, este no puede ser catalogadas como factor preponderante para el desarrollo de la violencia en las ciudades, dado que es multicausal.

En conclusión, la violencia urbana de acuerdo con los autores mencionados, se ve alimentada por factores como el rápido proceso urbanístico, la concentración de la riqueza en unos sectores y el detrimento de otros, las limitaciones del Estado para enfrentar los retos del crecimiento poblacional en términos de garantizar las necesidades básicas como salud, educación, servicios domiciliarios y seguridad, aunado a la falta de cohesión social y las malas relaciones dentro de la comunidad, convirtiendo estos espacios en un caldo de cultivo propicio para que los cordones de pobreza se instalaran y emergiera la violencia.

En este sentido, para Briceño (2002 p. 34), entre los factores que suman para que la violencia urbana se consolide y perpetúe en las urbes, obedece a factores como la pobreza y el empobrecimiento, la exclusión laboral y educativa, la disponibilidad de armas de fuego y la construcción de la masculinidad.

Respecto a la pobreza y el empobrecimiento Briceño sostiene la tesis, que la violencia urbana ocurre primordialmente entre los pobres de las grandes ciudades, donde estos pasan a ser víctimas y victimarios; sin embargo, a pesar de lo aparente la pobreza no es la causa principal de la violencia. Países como Haití o Bolivia no registran altas tasas de homicidios mientras que, en Brasil, con ciudades cosmopolitas como Sao paulo y Río de Janeiro, la tasa de homicidios es alarmante, por lo cual el autor concluye que “es el empobrecimiento y la desigualdad, y no la pobreza, lo que origina la violencia urbana que estamos presenciando” Briceño (2002, P.36).

La hiperconcentración de la riqueza se convierte en otro factor determinante en la violencia urbana en América Latina, porque genera mayor división social ante las crecientes desigualdades y por ende sublevación de las clases populares, quienes exteriorizan e decepción y la animadversión con los políticos, las élites y grupos de poder dominantes. Países como Colombia y Chile son ejemplo de ellos.

La elevada concentración de riqueza no sólo pone en peligro la sostenibilidad del modelo económico actual, sino que también puede provocar la ruptura de la cohesión social, incluso poniendo en peligro la democracia.

Según el informe de OXFAM (2019) sobre las desigualdades alertó sobre la brecha de desigualdad entre ricos y pobres y la desigualdad entre mujeres y hombres. Durante el último año, la riqueza del 50% de la población más pobre se redujo en un 11%.

En el lado contrario, “la riqueza de los millonarios se ha incrementado en 900.000 millones de dólares en el último año. Esto equivale a un incremento diario de 2.500 millones de dólares” (p.30). Las razones son varias, dentro de las principales está la vinculada con los sistemas de tributos y de prestación de los servicios básicos. El Informe alerta sobre que las personas y empresas más ricas tributan sistemática y estructuralmente por debajo de lo que les correspondería.

Adicionalmente, las grandes fortunas se ocultan a las autoridades fiscales, eludiendo de esta forma el pago de unos 200.000 millones de dólares en concepto de impuestos.

La carrera por las rebajas fiscales ha provocado que, en algunos países, se relaciona directamente con la desaceleración de la reducción de la pobreza y el incremento de la brecha entre los más ricos y los pobres.

El informe hace énfasis que a pesar del panorama desolador los gobiernos si cuentan con herramientas para para cerrar la brecha de desigualdad y pone a la provisión universal de servicios públicos y a la tributación de las rentas altas y a la riqueza, como las principales herramientas de lucha contra las desigualdades.

El racismo estructural ha sido otro factor influyente en el desarrollo de la violencia urbana, visto este desde la normalización y legitimación de políticas públicas, ejercicio de prácticas en la cotidianidad las cuales se incorporan produciendo resultados adversos en la diferenciación de las población o grupos específicos debido a su color, origen, cultura, vestimenta u otras características, segregando a la sociedad. Espinosa (2014), sostiene que el racismo es estructural ha sido un instrumento mediante el cual convergen el establecimiento o la ausencia de sistemas de justicia, de educación y de salud que benefician o excluyen a un grupo de la sociedad en detrimento de otro.

Wade citado por Espinosa (2014), menciona como el racismo estructural se ha incorporado de manera significativa a la población afrocolombiana quienes, de manera histórica se han visto inmersos en dos procesos:

Por un lado, se han adaptado a la cultura de la mayoría dominante, proceso mediante el cual se han dispersado geográficamente y han participado del proceso de mestizaje. Por otro lado, en ciertas regiones como el Chocó y la costa Pacífica, los negros se han concentrado geográficamente y en cierta forma, se han aislado, permitiéndoles mantener formas culturales que se reconocen como cultura negra. (p. 309).

Espinosa (2014 p. 312-313), sustenta como las Frames y prácticas discursivas entre Estado y poblaciones negras en Colombia han permitido camuflar un sin número de responsabilidades estatales, como resultado de ello desde la década de 1980 empezaron a surgir

organizaciones que reivindicaban la presencia negra en la historia del país, realizando múltiples acciones de resistencia que arrojaron avances para la población afro como la ley 70 de 1993.

Finalmente, Espinosa retoma el proceso de injerencia de los grupos armados en el Pacífico colombiano, y las consecuencias humanitarias que generaron con sus acciones, especialmente por la usencia estatal. Resalta el Auto No. 005 de 2009, la Corte Constitucional de Colombia emitió el fallo a través del cual ordena al Estado a atender de manera urgente la situación humanitaria de la población afrocolombiana en condición de desplazamiento. Al respecto, la sentencia de la Corte frente a este fenómeno menciona: La pérdida de control social y cultural de sus territorios por parte de las comunidades negras ha estado asociada a fenómenos de reemplazamiento y cambio de la composición étnica.

Briceño (2002), continúa planteando otro factor asociado a la violencia urbana, *la exclusión escolar y laboral*, lo anterior sustentado en datos de la CEPAL (1999); en ellos se advierte que quienes informan que, en la década de los noventa, periodo durante el cual la violencia cobró mayor auge, “la demanda laboral en América Latina creció a un ritmo del 2.2% anual, inferior al de la oferta laboral del 2.6% por año. Por ello, la tasa de desocupación aumentó de menos del 6% a cerca del 9%”. Adicional a esto la CEPAL informa que la calidad del empleo disminuyó, pues siete de cada diez nuevos puestos de trabajo en las ciudades se dieron en la informalidad.

Respecto al acceso al sistema educativo la situación no difiere de lo laboral, pues de los nueve (9) años de referencia que deben ser los mínimos que estudia una persona en América Latina, según el BID, “se calcula que de cada 100 niños que ingresan al primer

grado de la escuela en Bolivia, Brasil, Colombia o Perú, sólo 15 llegan al noveno grado de estudios, y en países como Guatemala, Haití o República Dominicana, los mismos 100 alumnos sólo 6 alcanzan los nueve años de estudio” (Briceño 2002, p.37).

Es así como la exclusión laboral y educativa es un factor de gran relevancia para el crecimiento de la violencia en las ciudades latinoamericanas. La no educación hace que los jóvenes incrementen su condición de vulnerabilidad al no lograr ingresar al trabajo formal, siendo propensos a participar de acciones violentas como medio de conseguir su sustento. Por ello la violencia prospera más entre quienes nacieron en la ciudad y alimentaron sus sueños con el progreso urbano.

El uso de las armas y la construcción de la masculinidad para Briceño están relacionadas, toda vez que la apropiación y uso de armas de fuego ligeras entre la población de América Latina ha crecido de manera exponencial, se estima que en 2017 había alrededor de 60 millones de armas de fuego en manos de civiles en América Latina y el Caribe, excluyendo aquellas en posesión de militares y otras fuerzas de seguridad, con un libre mercado o con restricciones dependiendo del país del que se hable. Parte de estas armas que estuvieron en manos de las antiguas guerrillas pasaron a los grupos emergentes y a la delincuencia común. Por otra parte, ciudadanos que sintieron la necesidad de protegerse dada la inseguridad representada en el incremento de homicidios, extorsiones, robos y amenazas decidieron adquirirlas por su cuenta, también los grupos dedicados a las economías ilegales entregaron armas a sus distribuidores especialmente para la defensa de sus territorios y mercancías.

Pero el arma continúa planteando Briceño, además de su función utilitaria cumple una función simbólica importante. “El arma representa la masculinidad, el valor y la capacidad de defenderse y demostrar su hombría y su coraje entre los jóvenes” (p.34). En

Colombia en el año 2019 el Instituto de Medicina Legal y ciencias Forenses (INML-CF) informó que el 92% de las víctimas fueron hombres y el 93% de los victimarios también fueron del género masculino, bajo estas cifras se puede denotar que a los hombres les sigue correspondiendo el rol de osados y valientes, y donde comportamientos contrarios son asociados a la cobardía y a lo femenino, aún a costa del riesgo de morir o matar.

Otros factores fundamentales en el fenómeno de la violencia urbana son la criminalidad y el crecimiento de las economías ilegales, en particular el narcotráfico, los cuales se complementan.

Hernández (2008) argumenta que este “en América Latina y el Caribe se aproxima mucho a una economía moderna, con relaciones múltiples y complejas, con una alta exigencia de racionalidad, previsión, coordinación y control” (p.11). Para alcanzar plenamente sus objetivos, esto es, obtener la mayor ganancia económica posible requiere quebrantar el marco legal, social y moral en la sociedad donde se ha insertado, para ello han recurrido a métodos poco ortodoxos, como la corrupción, extorsión y la impunidad, implicando a diversos sectores de la sociedad incluyendo a personajes de los ámbitos políticos, militares, artísticos, económicos, de tal suerte que quien ingrese al negocio difícilmente logra salvar bien librado.

La CEPAL (2000) por su parte plantea que el narcotráfico se puede analizar desde tres enfoques, la producción, seguido por el tráfico de drogas en la región y por el consumo.

la Producción de la materia prima se dan en entornos rurales, y donde la principal consecuencia es la expansión o el desplazamiento continuo de áreas rurales agrícolas dedicadas ahora a la producción de esta, adicionalmente el involucramiento del

sector campesino e indígena, quienes poco a poco van abandonando la agricultura tradicional para dedicarse a los cultivos ilícitos, toda vez que les genera mayores ganancias, y cuentan con la garantía de la comercialización. Países como Colombia, Perú y Bolivia son los principales productores de hoja de coca, marihuana y amapola, dada sus problemas económicos y la dificultad de posicionar sus productos en el mercado.

En el tráfico de drogas las urbes entran a jugar un papel fundamental. La CEPAL (2000 p.17) refiere que la economía de las drogas ilícitas en Latinoamérica resulta muy lucrativa, genera empleo directo e indirecto en sus diversas actividades, aunado a que logran pagar muy por encima del mercado local volviéndolo irresistible.

Los actores involucrados son diversos, siguiendo a la CEPAL (2000 p.18-19) van desde los grandes narcotraficantes transnacionales hasta los microtraficantes instalados en las ciudades latinoamericanas, estos últimos están al servicio de los primeros. Las pandillas juveniles o maras son las que a menudo controlan la actividad del microtráfico, se dedican a la venta callejera de clorhidrato de cocaína y crack, siguen planteando problemas en los países de la región, entre ellos El Salvador, Guatemala y Honduras. Las mujeres de bajos recursos y los menores e incluso los adultos mayores también entran a participar en el negocio como una estrategia de sobrevivencia toda vez que obtienen remuneración mayor y en algunos casos la única manera de obtenerlos. Los consumidores también entran al negocio como un medio de proveerse.

Por último, el consumo en los países de la región afecta de manera espacial a la población juvenil de los diferentes sectores socio económicos de la sociedad; sin embargo, en los sectores más vulnerables es donde los daños generados por el consumo son mayores,

afectando el desempeño, laboral, educativo y el relacionamiento familiar y social, debido entre otros factores a la falta de acompañamiento institucional que les permita salir de dicha situación.

Adicionalmente Carrión (2008), plantea otros factores que complejizan el fenómeno de la violencia urbana, entre estos, la falla de la gestión de los estados el desarrollo urbanístico y la falta de planificación de las ciudades pueden conllevar a conflictos de territorio, económicos y sociales que desemboquen en violencia, aunado a este la corrupción institucional

Para el caso colombiano, la violencia urbana, de acuerdo con Camacho y Guzmán (1990), fue categorizada inicialmente como eventos internos de “menor” envergadura como la guerra de pandillas, la delincuencia por necesidad, las diferencias de clases sociales humanas expresadas en actitudes de personalidad, las estrategias invisibles o las nuevas metodologías usadas por muchos sujetos herederos del fenómeno “la mafia”, que actualmente perduran inmersos en este tipo de actores, usando diferentes técnicas de corrupción y violencia reflejadas muchas veces por los efectos de la polarización del país.

La violencia urbana en Colombia, contrario a lo que sucede en lo rural, y de acuerdo con la Comisión de Estudios sobre Violencia (1987), “es más social que política y está más enmarcada en las relaciones interpersonales, tanto en la esfera de la vida pública como de la privada, es más difusa en su gestación y en la manera de manifestarse, expresa intereses, formas de organización y objetivos altamente diferenciados y donde las gestiones del estado tienen que abarcar algo más que la voluntad de negociación, e incluir acciones tendientes a lograr un fortalecimiento de las relaciones sociales pacíficas de los ciudadanos (p. 56).”

En conexión a sus formas de expresión, la violencia urbana en Colombia siguiendo a Camacho y Guzmán (1990. P.64), está asociada a factores como el económico y el crimen organizado, donde el primero tiene como finalidad la apropiación de bienes materiales, dinero, objetos comerciales, bienes de consumo, materializado en hurtos, extorsiones, atracos, invasiones de propiedades como viviendas y tierra. Ahora si bien la mayoría de dichas acciones son atribuibles a personas marginadas y sin recursos económicos, al otro lado en los estratos altos están las estafas, emisión o transferencia ilegal de cheques y abusos de confianza.

Respecto al crimen organizado, el cual no solo puede explicarse por una situación de pobreza dentro de la sociedad, constituye una verdadera forma de vida y de actividad profesional, más que un recurso de los pobres para la obtención de ingresos, en este se involucra a diferentes estratos sociales, donde en los estratos con hiperconcentración de la riqueza financian o contratan clandestinamente los servicios de bandas criminales para defender sus intereses.

Camacho y Guzmán, enfatizan que no existe una relación directa entre la pobreza y la violencia en Colombia, pues regiones, en efecto, que han soportado durante ya mucho tiempo la más absoluta pobreza no ha recurrido a la violencia; inversamente, otras regiones económica y técnicamente mucho más avanzadas se han visto envueltas en interminables conflictos violentos.

Soportando en cifras lo expresado por los autores, ciudades como Quibdó, Popayán y Leticia presentan tasas de homicidio bajas, en relación con ciudades de mayor crecimiento industrial y económico a saber: Bogotá, Medellín y Cali. Según cifras del INML y la Policía Nacional (2019) se observa que, de las tres ciudades mencionadas, Cali ha presentado el número mayor de homicidios, en el año 2019 se presentaron 1216 y para el 2020 se registraron 1071.

En complemento Guzmán (2018 p. 14) describe que la violencia en las ciudades colombianas es más vista desde la perspectiva de la inseguridad especialmente la patrimonial, se desconoce en parte la clara interconexión entre las dinámicas del crimen organizado, el conflicto armado, y el consecuente interés de múltiples actores de convertirlos en su objetivo militar.

Frente a lo anterior continúa planteando Guzmán que es preciso analizar la violencia urbana desde dos miradas, “urbanizar la conciencia pública del conflicto y politizar la mirada sobre la ciudad” (pag.14) en la primera invita a evidenciar la interrelación entre la violencia urbana, asociada a la criminalidad y el conflicto armado expresado a través de actos excepcionales como la explosión de bombas, o ataques a dirigentes visibles en el campo político, militar, entre otras expresiones.

El segundo politizar la mirada sobre la ciudad, es reconocer que ambas violencias la urbana y el conflicto armado en el país cuentan con trayectorias que la relacionan, como “la permeabilización de la violencia guerrillera o paramilitar en los extramuros de la ciudad” Guzmán (2018. P.15), también comprender la instrumentalización de las bandas armadas organizadas urbanas por los actores armados o por grupos dedicados a la economía ilegal exacerbaban la violencia. Finalmente, el reconocer la naturalización de la violencia urbana, como ésta se divide en la ciudad en barrios y comunas con necesidades básicas insatisfechas proliferando la violencia, y aquellos lugares que pulula el bienestar.

Buenaventura, escenario donde se desarrolló la presente investigación, es una de las ciudades en donde Flórez y Ruiz (2018), ahondaron en el fenómeno de la violencia generalizada, dado que en repetidos momentos de las dos últimas décadas ha sido la ciudad más violenta del país y con altos indicadores de hechos victimizantes, que ha traído consigo las disputas territoriales por el control y la circulación de economías ilegales criminales, dejando la población inmersa en dicha problemática social.

Resultando paradójico como uno de los puertos más importantes y ejemplarizantes del país y gestor de jugosas ganancias económicas que traen al sector privado y al gobierno central, ha generado diferentes tipos de violencia contra la población civil. Situación que ha sido visibilizada y analizada por investigadores, medios de comunicación internacionales, nacionales y locales.

Flórez y Ruiz (2018), argumentan que la violencia urbana en Buenaventura obedece a tres escenarios principalmente

Escenario de violencia pública que implica las acciones de omisión Estatal que violan los derechos de las comunidades ancestrales, la poca inversión en el desarrollo social, la complicidad y permisividad en la implementación de megaproyectos y la nula respuesta ante la situación humanitaria de las víctimas de la violencia, definen este escenario. (p. 533)

La violencia política, como segundo escenario dice Flórez y Ruiz se alinea con la llegada a Buenaventura del conflicto armado en particular a la urbe, con presencia de actores legales e ilegales por el dominio del territorio con énfasis en las rutas de las economías ilegales, generando afectaciones altamente graves y sistemáticas, representadas en desplazamientos, desapariciones, homicidios entre otras consecuencias humanitarias.

Un tercer escenario es la violencia del crimen organizado producto de la herencia dejada por grupos paramilitares, guerrilleros y grupos dedicados a la economía ilegal, favoreciendo el surgimiento de nuevos actores que actúan con sevicia afectando la vida y seguridad ciudadana de todos los sectores de la ciudad. Es de precisar que este escenario se da también el marco de la implementación de megaproyectos y ampliación de la zona portuaria.

En conclusión, la violencia urbana se abordó desde dos componentes, su concepto y los factores que la consolidan. Respecto a estos, si bien, cada autor aporta distintos elementos en su construcción, tienen en común que los escenarios principales generadores de

violencia son las ciudades, alimentadas por la incapacidad del Estado de enfrentar los retos del crecimiento poblacional, la corrupción, las economías ilegales, la proliferación de actores armados, el arraigo de un tipo de cultura basado en la solución no pacífica de conflictos, entre otros factores.

2.1.3 Proceso Desmovilización, Desarme y Reincorporación (DDR) de las FARC-EP

De acuerdo con Gutiérrez (2012), el conflicto armado interno en Colombia es de larga data¹. Durante más de 50 años de confrontación entre guerrillas, Estado y paramilitares el país sigue desangrándose lentamente, sin embargo, para el objeto de estudio será centrado el acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano cuyo objetivo era dar fin al conflicto armado de medio siglo y, en donde ambas partes decidieron asumir el reto de dar inicio a los diálogos y la negociación para el alcance de una paz estable y duradera².

El documento final para la paz, además de voluntades entre las FARC-EP y el Gobierno Colombiano, estableció su marco legal basado en que la paz es un derecho de todo ciudadano, inmerso en la Constitución Política colombiana (1991) donde menciona:

¹ Gutiérrez Loaiza (2012), en su investigación utiliza estado del arte como instrumento de análisis en *Las Negociaciones de paz en Colombia* en el periodo comprendido 1982-2009. Gutiérrez Loaiza p.187-188 de su investigación hace referencia a los detonantes o dificultades en los procesos, primera tiene que ver con el paso de grupo ilegal a partido político; es así como, el M-19, el PRT, el EPL, la CRS, el FFG y las FARC-EP, tuvieron serios aprietos en ese sentido, es decir, todos los que intentaron conformarse como alternativa de poder, no lo lograron esta investigación sostenida en autores como (Villarraga, 2008b).

² La implementación de Proceso de Paz comenzó formalmente el 1 de diciembre del año 2016, luego de la refrendación por parte del Congreso de Colombia del Acuerdo Final para una Paz Estable y Duradera firmado entre la guerrilla y el gobierno Colombia.

Teniendo presente que el Artículo 22 de la Constitución Política de la República de Colombia impone la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; en el Artículo 95 afirma que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz; destacando que la paz ha venido siendo calificada universalmente como un derecho humano superior, y requisito necesario para el ejercicio de todos los demás derechos y deberes de las personas y del ciudadano (p. 2).

Por su parte, el investigador González (2018) plantea que, en Colombia el marco jurídico para la paz se aplicó mediante el establecimiento de mecanismos de verdad, de justicia y de reparación que reemplazan los clásicos instrumentos punitivos del derecho penal. Son la característica de este nuevo marco de negociación, en el cual, a partir de imputaciones graduadas, que comienzan por el establecimiento de penas más altas a los más responsables y continúan con una graduación penal en los niveles medios y bajos de las escalas de los grupos armados. Este acuerdo para la paz fue ratificado también por la Organización de Estados Americanos y monitoreado por la misión de apoyo al proceso de paz de la ONU en Colombia.

Según Steenken (2006), la Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU, ha sido pionera en la construcción y formulación de los estándares integrados para la realización de los procesos de paz³, basados en procesos de negociaciones de paz

³ El manual básico de DDR publicado en 2006, Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (NIDDR), presenta una serie de condiciones previas necesarias para que se produzca el DDR. (Centro de Recursos de DDR de la ONU, <http://www.unddr.org/iddrs/>).

exitosos y a la vez ha sido de permanente adaptabilidad convirtiéndolo en un documento vivo⁴ concentrado en el Centro de Recursos de DDR de la ONU.

Al respecto, la ONU estableció los estándares del DDR en cuatro componentes teóricos fundamentales y aplicables, valga la pena resaltar que el éxito depende del nivel de compromiso y respaldo de cada estado en el proceso de negociación. Según Rosales (2017), están plasmados en la Desmovilización, el Desarme y la Reincorporación.

Desmovilización: es el momento específico del proceso en donde los combatientes demuestran su voluntad y real compromiso de dejar de combatir, este se hace de manera controlada y supervisada por la comisión de verificación de la ONU y el Estado.

Desarme: es la recolección, documentación, control y finalmente la disposición de todas las armas, municiones, explosivos y para el caso Colombia entrega de caletas tanto de armamento como grandes cantidades de dinero Rosales (2017, p 14) (ver capítulo V de la presente investigación.

Reinserción: Fase intermedia entre la desmovilización y la reintegración, es una forma de asistencia transitoria para ayudar a cubrir las necesidades básicas de los excombatientes y sus familias, y puede incluir subsidios transitorios de seguridad, alimentación, vestimenta, vivienda, servicios médicos, educación a corto plazo, formación, empleo y herramientas, inserción de material a corto plazo y/o asistencia financiera para cubrir las necesidades inmediatas, la reinserción es material a corto plazo y/o asistencia financiera para

⁴ En el período 2003-2006, Naciones Unidas elaboró las Normas Integradas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (IDDRS). Las IDDRS brindan una herramienta útil y un marco de referencia para el DDR, (Cornelis Steenken 2017, p.17).

cubrir las necesidades inmediatas y pueden durar más de un año. Rosales (2017, p. 15). Mientras que la reintegración es a largo plazo, dirigida a continuos procesos de desarrollos sociales y económicos.

Reintegración: El Secretario General de la ONU Kofi Annan, como se citó en Rosales, (2017) argumentó que la reintegración es el proceso mediante el cual los excombatientes adquieren estatus civil, favoreciendo prebendas socioeconómicas que garanticen su proceso de integración civil.

También plantea que el DDR es aplicable a procesos de negociaciones de paz en conflictos armados internos, internacionales o guerras civiles. El DDR suele poner en jaque a las instituciones, entorpecen y alteran los procesos políticos; bien sea por la inclusión de los excombatientes hacia la reconciliación política, económica y social o por las voluntades estatales para la aplicabilidad de lo pactado, el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional, además de la apertura e inclusión de los ciudadanos.

Los investigadores Caramés, Fisas y Luz (2006), en su análisis sobre los programas de desarme, desmovilización y reintegración- DDR de los excombatientes en el mundo, amplían la mirada en la ejecución de dichos programas y ponen en primer plano la dignificación de los excombatientes.

Conforme con la expresión de Caramés et,al (2006), “ha de ser un proceso de dignificación de las personas que intervienen en él, pues han dejado las armas de manera voluntaria y como resultado de una negociación y un acuerdo (...) constituye una oportunidad para la construcción de la seguridad y, por lo tanto, es uno de los ingredientes más importantes para lograr la estabilidad y la construcción de la paz (...)” (p.7).

El proceso de desarme, desmovilización y reincorporación en Colombia ha tenido una evolución paulatina con el paso de los años, que dan cuenta de una permanente transformación de cara a los intereses políticos del gobierno de turno, lo cual trae consigo una fragmentación del proceso mismo y, podría llevar al fracaso, pero también depende del perfil de la contraparte en negociación, y de la acogida de la sociedad civil al mismo.

La fundación Pares, en su investigación Procesos de Paz en Colombia (2019), hace un análisis de los procesos de paz que se forjaron entre 1984 hasta el año 2017, algunos fueron exitosos como los firmados entre los años 1990-1993, otros que, a pesar de los esfuerzos no se han logrado culminar, como sucede con el ELN, agrupación con la que por más de cuarenta (40) años han intentado negociar la paz, pero por razones como la no renuncia a la práctica del secuestro, como mecanismo de sostenimiento económico, los resultados han sido fallidos con esta guerrilla.

Tabla 1 *Procesos relevantes de negociación de Paz en Colombia, desde la década de los 80*

AÑO	GOBIERNO	GRUPO ARMADO	OBSERVACIÓN
1984 - 1987	Belisario Betancur	Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo. FARC-EP	El acuerdo de la Uribe, no exitoso
1990	Virgilio Barco	M-19	Caloto –Cauca, exitoso
1991	César Gaviria	Ejército Popular de Liberación EPL. Grupo indigenista Quintín Lame. Partido Revolucionario de los Trabajadores –PRT.	Procesos exitosos
1993		Corriente de Renovación Socialista – CRS.	Disidencia del ELN, exitoso.
1998 - 2002	Andrés Pastrana	Inicio de Dialogo de Paz con las FARC-EP	El gobierno retira las Fuerzas Militares y Policía de un área de 42.000 kilómetros cuadrados, para las negociaciones. Los diálogos se realizaron en medio de la confrontación y se rompieron en febrero del 2002.
2002 - 2004	Álvaro Uribe	Autodefensas Unidas de Colombia	Proceso de Justicia y Paz

1991 1999	Cesar Gaviria		
-2002 –	Andrés Pastrana		
2005	Álvaro Uribe	Diálogos exploratorios de paz con el ELN.	No exitoso
2013 –	Juan Manuel Santos		
2014 -			
2017	Iván Duque		
2012 -2016	Juan Manuel Santos	FARC-EP	Diálogos y firma del acuerdo final para la paz.

Nota. Información tomada CNMH (2015). PARES (2019). IETI (2019). Elaboración propia 2021.

A partir de los procesos de negociación que terminaron con la firma del acuerdo de Paz el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional de Colombia (2012), hace una aproximación a las situaciones complejas que implica el DDR para quienes se han desmovilizado de organizaciones guerrilleras y de autodefensa. Dentro de sus hallazgos menciona que los procesos de DDR están inscritos en tensiones sociales que en ocasiones expresan desinterés, pero también prevenciones, prejuicios y estigmatizaciones, las cuales operan como obstáculo para dar curso a las iniciativas.

También en el ODDR, plantea que dichas tensiones se ven divididas entre la capacidad de regular y formalizar iniciativas específicas y la capacidad de ofrecerles autonomía, entre presentarles un plan estructurado o construirlo con ellos, entre el apoyo a los

excombatientes y la atención a las víctimas. “Entre el intento de vincular a las comunidades en la reintegración y la generación de políticas sociales de amplia cobertura” (p. 15).

Para continuar con la ilustración del DDR Colombia, la Comisión de Paz (1984), presentó un balance sobre las problemáticas que atraviesan los excombatientes. Los amnistiados denunciaron ser víctimas de allanamientos, seguimientos, desapariciones forzadas y asesinatos, así como la demora en el otorgamiento de créditos y en el reintegro laboral ante instancias oficiales y en las universidades, situaciones que rememoran lo dicho por Caramés et al (2006), para que el DDR sea exitoso se requiere compromiso y cumplimiento de las políticas del Estado, ajustadas a los contextos en procesos de negociaciones de paz.

A manera de conclusión teórica sobre el posconflicto, en particular el DDR, las investigaciones han demostrado que algunos de los procesos han terminado en fracaso, ocasionando el rearme de los excombatientes, quienes argumentan que no contaron con garantías de seguridad dados los múltiples asesinatos de los reincorporados. Apelando al pensamiento de Fisas, (2011), refiere que la retoma de armas ha sido motivo de nuevas hostilidades, y ello por haber partido de un concepto falso, a saber, pensar que las siglas significaban Derrota, Desprecio y Rendición. Sin embargo, para tener éxito, el DDR en ningún caso ha de significar claudicación, despolitización, demonización, marginación, soborno, o, especialmente, humillación. Por esta razón es indispensable que el DDR sea pensado, preparado, planificado y pactado en el proceso de negociación de una paz estable y duradera.

Por último, Fisas (2020) presenta una investigación exhaustiva, llamando la atención sobre los conflictos, derechos humanos y construcción de paz. En ella ilustra: “en el mundo en 2019, hubo 94 Escenarios de tensión, 50 Contextos de procesos de paz o

exploración, 14 de los 34 conflictos armados se produjeron en países con graves desigualdades de género” (p.180). Colombia no se escapa de esta radiografía mundial, es evidente que registra conflicto armado y tensión.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Hipótesis

En los años 2012-2016 Colombia dio inicio al proceso de negociación y firma del acuerdo final para la Paz, con el actor armado de mayor relevancia en el país, las FARC-EP. Dado el proceso de implementación del DDR, los actores armados dieron inicio al restablecimiento de su vida civil, sin embargo, en algunas partes del país como Buenaventura la violencia armada se incrementó, comparada con la última década. Es así como desde la percepción de los actores presentes en el desarrollo de la investigación, se pretende dar cuenta del porqué el incremento de la violencia urbana en el Distrito de Buenaventura y su posible relación con el DDR.

Pregunta rectora:

¿Qué incidencia ha tenido el proceso de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC- EP), en la violencia urbana que se vive en la ciudad Buenaventura en el periodo 2012-2020?

3.2. Tipo y diseño de investigación

La presente investigación se realizó a través de un enfoque teórico fenomenológico hermenéutico, dado que se ajusta a la propuesta metodológica de la investigación. Según Husserl, esta se fundamenta en:

El estudio de las experiencias de vida, respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto, que asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable. (Husserl 1998, P. 221).

Por su parte, Guillen (2019) plantea que “es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos” (2019, p. 221).

Este enfoque permitirá un acercamiento a las capas y estructuras que conforman el sentido común, y su manifestación, por medio de patrones y comportamientos característicos en relación con la violencia urbana en Buenaventura, los cuales, a raíz de sus niveles de impacto, ya son una alteración del orden social ante la vista de las autoridades y la sociedad como algo natural. El objetivo será comprender los niveles de incidencia de las FARC-EP en el marco del DDR dadas la convergencia de nuevas y antiguas dinámicas de la violencia urbana en el municipio.

A nivel del método se privilegió el descriptivo, al ser este parte de la naturaleza de la investigación cualitativa, puesto que el objeto de estudio es determinar la relación existente entre el DDR y la incidencia de la violencia urbana en Buenaventura. Adicionalmente se realizó una documentación con alto rigor cuantitativo, bajo la revisión de bases de datos oficiales. Ambos aspectos permitieron el acopio, análisis y procesamiento de la información.

3.3. Población y Muestra Seleccionada

Población

Para el proceso de confrontación de la información se tomó como base tres tipos de población, (i) funcionario público que hace parte del Ministerio Público y quien aborda la temática de violencia urbana y estuvo en seguimiento del DDR de manera directa. (ii) representantes de organizaciones sociales como presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), Organización de mujeres. Finalmente (iii) actores armados: exintegrantes de las FARC-EP y de una Banda Armada Organizada (BAO).

Muestra seleccionada

Seleccionado un grupo de siete personas, quienes, por sus posiciones y trayectorias, son conocedoras del contexto histórico de Buenaventura, relacionado con la violencia urbana, y los dos últimos procesos de paz con el Bloque Calima (2004) y las FARC-EP (2016).

Respecto de los datos cuantitativos, se seleccionaron las entidades que cuentan con bases de datos oficiales, alimentadas frecuentemente y que dan cuenta de las cifras de hechos victimizante como homicidios, desplazamientos, desapariciones y amenazas.

Según procedencia, la escogencia de las siete personas, se desarrolló en dos fases:

Fase 1: Selección de representantes de organizaciones de base comunitaria, excombatientes, líderes comunitarios y funcionarios públicos que viven o tienen relación directa con Buenaventura.

Fase 2. La selección se realizó de acuerdo con disposición y accesibilidad de los entrevistados, para lograr de manera exitosa la obtención de información a través de sus percepciones sobre el proceso, las causas y las motivaciones que tuvieron los actores durante la implementación del DDR, la relación con la violencia urbana en Buenaventura y si hubo o no incremento a partir de la desmovilización de las FARC-EP.

Según las características de la investigación:

Fuentes principales para el análisis de la información cualitativa:

Se hizo uso de dos herramientas: las entrevistas semiestructuradas se eligió esta herramienta porque permitió ahondar más temas, mejor comprensión de las percepciones de los entrevistados, pueden producirse respuestas inesperadas que alimenten el análisis y hacer preguntas de mayor impacto. Se proyectó aplicarlas a siete (7) personas oriundas de Buenaventura.

La observación directa realizada de manera continua y permanente, acción posible toda vez que las tesis laboran con el Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], lo que permitió tener condiciones de acceso y confianza con la población, obteniendo las percepciones de las comunidades de manera sincera. También el [CICR] desarrolla un proyecto de prevención en el marco de la violencia urbana y otras situaciones de violencia en el casco urbano de Buenaventura.

Fuentes principales para el análisis de información cuantitativa:

Las cifras de las bases de datos, usadas en el análisis cuantitativo fueron: el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Policía Nacional, la Unidad de Atención y Reparación para las víctimas (UARIV) en la base denominada Registro Único de Víctimas (RUV) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Se escogen estas en primera instancia por tratarse de fuentes oficiales, que ofrecen información detallada en temporalidad (meses y años), también datos desagregados por edad, género, generación y por hecho victimizante de acuerdo con las necesidades de la investigación; adicionalmente, al ser de consulta pública, permite ubicarlas con facilidad en las páginas web y dan la posibilidad de combinar las variables.

La base de datos del INMLCF cuenta con informes cualitativos denominados “Forensis” que acompañan las cifras año tras año, lo que da una mayor claridad y contenido a los datos cuantitativos. La base de datos de la policía, básicamente, permite comparar cifras con las que ofrece INMLCF respecto a homicidios, y con el RUV permite comparar los hechos relacionados con amenazas y desplazamientos.

El registro nacional de información (RNI) de la UARIV tiene como valor agregado que permite identificar los actores armados involucrados, ayudando a analizar la segunda variable de análisis del proceso de DDR de las FARC. Por otra parte, la base de datos de la UARIV frente a las cifras de homicidios y desapariciones forzadas tiene como ventaja que allí están reportadas únicamente las que tienen que ver con actores armados.

Pero a su vez, tiene como limitantes (i) que solo aparecen reflejadas las cifras de los que fueron reconocidos como víctimas, dejándose de visibilizar todos los demás que, aunque no serán reconocidas, si realizaron un proceso de declaración de sus hechos victimizante, (ii) sumado a esto también hay un subregistro de un número importante de víctimas que por temor o amenazas de los victimarios no colocaron en conocimiento de las autoridades su situación, (iii). La UARIV en los últimos años presenta cifras bajas, lo que puede obedecer a: dificultades en el proceso de valoración en relación con posibles definiciones en el marco del acuerdo para la paz con las FARC, y que los Grupos Armados Organizados - GAO no eran reconocidos por el Estado como partes en el conflicto armado, inicialmente eran conocidos con Bandas Armadas Organizadas -BAO o delincuencia común.

3.4. Instrumentos de recolección de información

Se aplicaron siete (7) entrevistas individuales de carácter semiestructurado de final abierto, bajo la mirada de Hammer y Wildavsky quienes mencionan que:

La entrevista de historia oral es un cambio, un "monólogo guiado", a partir de preguntas y respuestas bien planeadas y pensadas, donde el entrevistado es el más importante en este acto comunicativo; el entrevistador deja al otro hablar todo lo que desea, no lo interrumpe ni lo acosa con preguntas molestas, aunque al final se puede arriesgar el todo por el todo con una pregunta desafiante (Hammer y Wildavsky 1990, pp. 40-42).

Durante el desarrollo de las entrevistas no se perdió de vista estas historias narrativas, sus percepciones y análisis, las cuales permitieron ahondar en el contexto de Buenaventura; además de la comprensión de varios acontecimientos y causas relacionadas con la violencia urbana y los actores armados.

3.5. Técnicas de análisis de información

De acuerdo con lo ya expresado en la presente investigación, se utilizó el método hermenéutico interpretativo de las ciencias sociales. Al respecto Max Weber (1864-1920) citado en Cuenya y Ruetti (2010), dado que para las ciencias sociales deben considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre un fenómeno, como es la violencia urbana en Buenaventura y la incidencia del proceso del DDR de las FARC-EP. Se logró una aproximación de carácter científico mediante la comprensión, el significado y la acción en las entrevistas realizadas tomando como eje principal la percepción de los entrevistados sobre el proceso de DDR y la violencia urbana en Buenaventura; adicionalmente la autora Guillen (2019), agrega que éste es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos.

Para el análisis de la presente investigación también se hizo uso de herramientas cuantitativas en la recolección de la información de las fuentes oficiales, las cuales permitieron comprobar la hipótesis mediante la corroboración de las estadísticas basadas en la medición numérica de los hechos victimizante durante el periodo estudiado 2012-2020, como son las muertes violentas, la desaparición forzada y el desplazamiento, permitiendo a las investigadoras retomar los conceptos de Hernández 2010 y proponer patrones de comportamiento y probando los diversos fundamentos teóricos que explicarían dichos patrones.

3.6. Procedimientos de análisis de información

Con el propósito de procesar las percepciones de los actores entrevistados, acerca del proceso de DDR y la relación con la violencia urbana en Buenaventura, se desarrollaron categorías de análisis, las cuales sirvieron como contenedores de datos y posteriormente fueron procesadas arrojando aportes significativos a la investigación.

Para efectos metodológicos se construyó una matriz con las siguientes categorías:

Categoría 1. Violencia urbana en Buenaventura:

- Conceptualización teórica de la violencia y la violencia urbana a nivel latinoamericano y colombiano. El comportamiento de la violencia antes del DDR en Buenaventura respecto a:
 - Actores armados que hacían presencia y sus modos de operar (ubicación territorial, prácticas militares, estrategias para mantener el control.
 - Relación de las FARC EP con los demás actores armados presentes en el lugar.
 - Factores que inciden en la violencia urbana (corrupción, narcotráfico, control territorial al interior de la ciudad y del puerto).
 - Hechos victimizante por grupos armados (datos cuantitativos).

El comportamiento de la violencia después del DDR:

- Reconfiguración en el territorio de los actores armados, posibles alianzas.
- Consecuencias humanitarias.

- Cambios en su forma de operar (corrupción política, sobornos, y el control del poder económico a través de dineros ilegales, uso de la crueldad y sevicia en sus acciones violentas).

Categoría 2. Desarme Desmovilización y Reinserción de las FARC.

- Conceptualización teórica de procesos de paz y de DDR en Latinoamérica y Colombia.

Antes del DDR:

- Presencia de las FARC-EP en Buenaventura relacionados con control del territorio, narcotráfico y alianzas políticas y con otros actores armados.
- DDR del Frente 30 de las FARC-EP y del frente Urbano Manuel Cepeda Vargas y cuál fue la influencia en las dinámicas sociales, territoriales y políticas.

Después del DDR:

- Que paso con los exintegrantes del Frente 30 de las FARC.
- Qué actores armados han copado el territorio dejado por las FARC.
- Las formas híbridas de relación entre exintegrantes de las FARC y otros actores armados.
- Cómo la reconfiguración de los actores armados está incidiendo en los niveles de violencia urbana.

Percepciones de los entrevistados:

Las causas y consecuencias que inciden en la violencia urbana en Buenaventura, y sus posibles relaciones con el DDR. La

reacomodación de los actores armados, el manejo de las rutas del narcotráfico al interior del puerto, la incidencia a nivel político de los nuevos actores, consecuencias humanitarias, y las implicaciones en cuanto a la seguridad para los habitantes del casco urbano. También las percepciones sobre los factores que han incidido para que los excombatientes hayan continuado en el proceso de reincorporación o hayan decidido abandonarlo y retomar las armas.

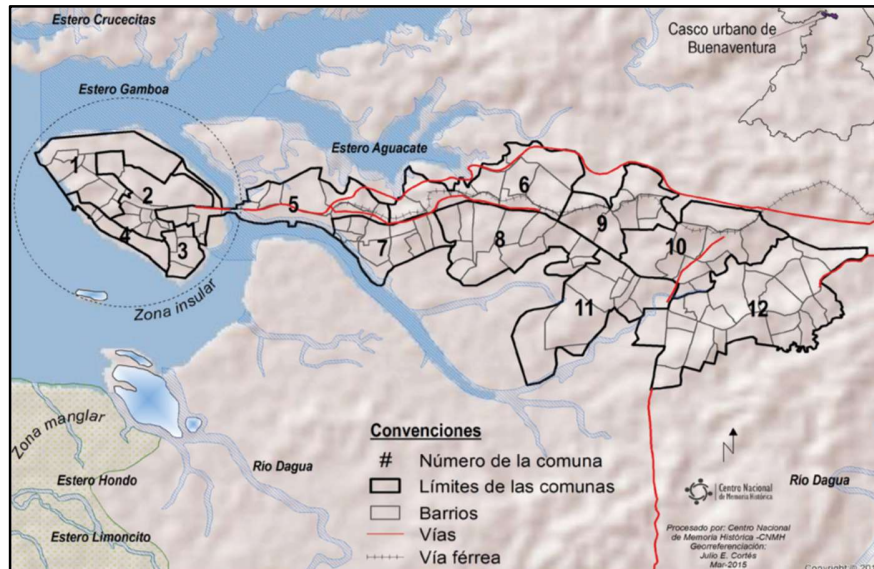
3.7. Consideraciones éticas

Durante todo el proceso a los entrevistados se les aseguró que la información sería de uso exclusivo en lo académico; se les clarificó el propósito y objetivo de la investigación. (apéndice N° 1 consentimiento informado) y por solicitud de ellos se omitió su identidad, haciendo alusión únicamente a la entidad, organización ONG a la que pertenecen.

Con los resultados de la investigación se espera tener un documento de referencia que permita abordar de manera asertiva a la institucionalidad, organizaciones humanitarias y ONGs que traen consigo políticas públicas, programas y proyectos a la población, los cuales podrían ser ajustados a nuevas realidades del contexto en Buenaventura aportando a la construcción conjunta de una cultura de paz.

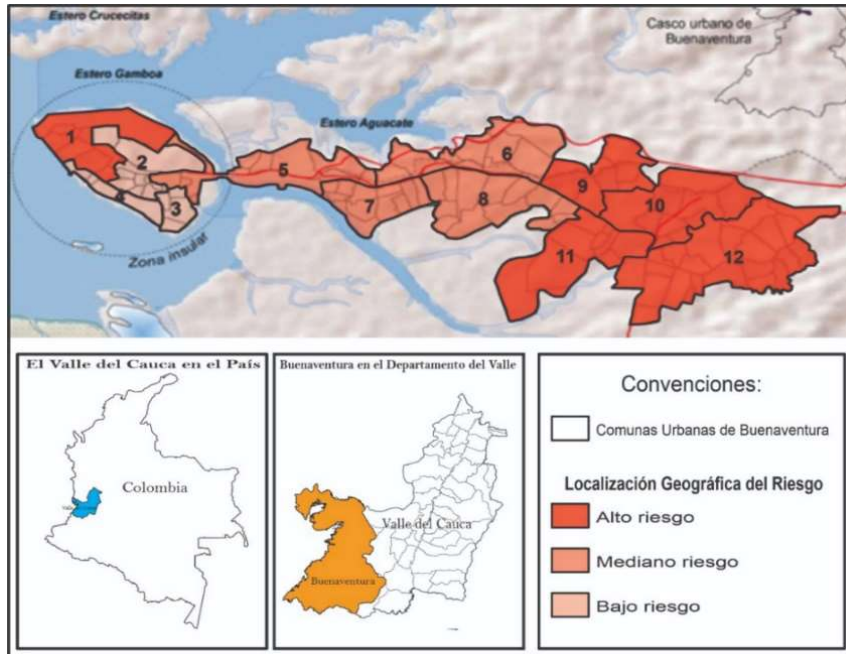
CAPÍTULO IV. CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA URBANA EN BUENAVENTURA

Figura 3: Mapa Zona Urbana de Buenaventura



Nota. Adaptada del Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH. (2015).

Figura 4: Mapa de riesgo zona urbana Buenaventura



Nota. Morales, Calderón. (2021). *Mapa de Análisis de riesgos.* Buenaventura, Valle del Cauca. Elaboración propia.

El Casco urbano de Buenaventura se encuentra dividido en 12 comunas, distribuidas en una la zona insular y una zona continental, ambas zonas están unidas por el puente del El Piñal. La Zona insular o Isla Cascajal se encuentran las comunas 1, 2, 3, y 4; La zona continental está compuesta por las comunas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ver figura 3.

El municipio de Buenaventura, según proyecciones del DANE con corte al 2019, cuenta con 310.194 habitantes, de los cuales el 76.4% viven en el área urbana y el restante en el sector rural, de mayoría afrocolombiana, en donde el índice de necesidades básicas insatisfechas es de 36%, tres veces mayor que en de Cali, de los cuales el 64% de la población urbana son considerados pobres y el 9.1% viven en condiciones de miseria.

Esta es la misma Ciudad-Puerto donde se refleja la cruel paradoja de un modelo económico en el que la riqueza no se traduce en prosperidad para sus habitantes, como consecuencia de esa paradoja, el municipio de Buenaventura ha presentado oleadas de violencia armada a lo largo de su historia; como se observa en la figura 3, las comunas que históricamente han estado en alto riesgo son la comuna 1 de la zona insular y las comunas 9, 10, 11 y 12 de la zona continental, mientras que las comunas de la 5 a la 8 están clasificadas en un riesgo medio y comunas 2, 3 y 4 muestran un riesgo bajo, es de precisar que en estas últimas están concentradas las operaciones portuarias. Para el análisis de este riesgo se tomaron las variables de homicidios, desplazamientos y enfrentamientos. Razones que se van describiendo a lo largo del presente capítulo.

Flórez y Ruiz (2018, p. 575) señalan que dentro de las oleadas de violencia que ha vivido Buenaventura una se dio entre los años 1990-2004, con la llegada del paramilitarismo al Distrito, se dio la disputa territorial y el crecimiento de los hechos de violencia; en este periodo las modalidades de violencia se expresaron en masacres, homicidios, asesinatos selectivos, secuestros y desplazamientos forzados masivos e individuales. Esto se da porque hacia los 90 las FARC, mantenían el control total tanto en la zona urbana como en

la rural, pero hacia el 2000 hacen la entrada los paramilitares con el bloque Calima, quienes logran sacar a las FARC de la zona urbana y tomar el control.

Otra oleada de violencia fue entre los años 2005-2014 continúan planteando Flórez y Ruiz, este periodo estuvo enmarcado por el desarrollo de megaproyectos portuarios, desmovilización paramilitar y retoma de la ciudad por grupos pos desmovilización paramilitar y delincuencia común organizada, trayendo como consecuencia la desaparición forzada, asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado, sobre todo de carácter individual.

Es de resaltar aquí, que, la crueldad y la sevicia se consolidaron como prácticas regulares del conflicto, representadas en desmembramientos realizados en las llamadas casas de pique y la aparición de los cementerios clandestinos. En este periodo, tras la desmovilización de los paramilitares, entran en escena grupos pos negociación como Los Rastrojos, La Empresa y La Local. quienes se ubicaron en las comunas 10 y 12, y las zonas de bajamar, lugares donde antes tenían presencia las FARC-EP.

Un último periodo está marcado de manera especial por el acuerdo de paz entre las FARC - EP y el Estado colombiano; pero también con el incremento del negocio del narcotráfico, que busca ganar las rutas por el mar y la zona portuaria para consolidarse, acompañado de la corrupción política y militar. Aunque es de precisar que la corrupción ha estado presente durante las dos últimas décadas, toda vez que desde el 2004 hacia adelante cuatro alcaldes, incluido el alcalde del periodo inmediatamente anterior 2015-2019, fueron judicializados por manejos irregulares del presupuesto municipal.

En cifras oficiales del Registro Nacional de Información, en adelante (RNI) al año 2020, 296.750 personas fueron víctimas directas e indirectas (familiares de las víctimas) del conflicto armado en Buenaventura, siendo el desplazamiento forzado el principal hecho victimizante con un 95% del total, las amenazas ocupan el segundo lugar con un 5.4%, seguidas de los homicidios con un 4.2%, la pérdida de muebles e inmuebles y la desaparición forzada, cuenta con 1%.

Tomando en cuenta que dentro de cada periodo los aspectos que marcan la violencia están relacionados con la expansión del puerto, la presencia de actores armados (desmovilización e ingresos de nuevos actores), el narcotráfico, y la corrupción en el campo político, se hace necesario hacer una aproximación a ellas para entender el impacto que tuvieron en la situación actual y la relación de estos con las FARC- EP.

4.1. La expansión portuaria

En 1961, la dinámica económica del puerto de Buenaventura se ve marcada por la creación de la empresa pública Puertos de Colombia, (en adelante Colpuertos), influyendo en las relaciones políticas, económicas y sociales de los bonaverenses, toda vez que permitió a una parte de los pobladores acceder a empleo formal.

Urrea (2012), menciona que Colpuertos favoreció a pobladores nativos de origen rural con poco estudio, para tener trabajo con buenos salarios y con grandes garantías laborales y de educación para su descendencia, logradas vía la sindicalización, “la estabilidad laboral permitió ubicarse en la clase media, y no sólo destacarse del resto de la población, sino una distinta relación con el tiempo,

representado en una posibilidad de futuro para el grupo familiar y de proyectos a mediano plazo” (p.37). También les permitió participar de los espacios político y administrativos del municipio.

En este contexto, se expone unas de las entrevistas por parte de los participantes:

La líder comunitaria declaró: “que trabajaba en Colpuertos, ese sí era afortunado, podía mandar a estudiar a sus hijos fuera de Buenaventura, lograba hacer su buena casa. Hay un barrio que lo construyeron los pensionados de Colpuertos, esas son casas bonitas. Ellos podían heredar el trabajo a sus hijos, que como eran más estudiados podían ocupar cargos más altos. Pero cuando lo privatizaron nos mataron la ilusión a los que éramos más jóvenes, porque la empresa privada contrata por horas, no da seguridad laboral y solo contratan a los bonaverenses para los trabajos más bajos, como tajadores, bulteros, para descargar y cargar los barcos, y si están de buenas a las mujeres las contratan de secretarias y recepcionistas”. (Líder comunitaria, organización de mujeres, comunicación personal, entrevista N° 6, 08 de octubre 2020).

Este período de bonanza para la clase trabajadora terminó con la llegada de la Sociedad Portuaria, fue en 1993 cuando se liquidó a Colpuertos y se da la creación de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que conlleva la privatización total de la actividad portuaria; proceso liderado por el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente César Gaviria Trujillo en su periodo de gobierno comprendido entre 1990-1994. Según IEI (2019) esto trajo consecuencias como el aumento de la tasa de desempleo, desmejora en las condiciones de trabajo reflejadas en las remuneraciones más bajas, el promedio salarial disminuyó 3,5 veces y las contrataciones se volvieron temporales para trabajos esenciales de la actividad portuaria por ende en las condiciones de pobreza, exclusión y marginalidad, y como efecto colateral el crecimiento de la violencia como lo expone la CNMH (2015), el deterioro de las condiciones

laborales facilito el ingreso de grupos insurgentes a las comunas del casco urbano para ofrecer oportunidades de trabajo y responder a las demandas sociales con la propuesta de unirse a la lucha armada.

Actualmente la operación portuaria de Buenaventura está liderada por la Sociedad Portuaria, que maneja el 70% de la carga que llega y sale de esta zona del país y el Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen), que cuenta con inversión internacional. También está el terminal de Agua Dulce especializado en el manejo de contenedores, cuenta con inversión extranjera.

La relación existente entre estas grandes empresas portuarias y la población de Buenaventura está dada por lo laboral, aquí es necesario precisar, de acuerdo con Giraldo (2013) que los cargos directivos de la mayoría de las empresas están a cargo de extranjeros y nacionales del interior del país. Por su parte, la labor desarrollada por los lugareños está especialmente dada a trabajos operativos y asistenciales, pero lo más preocupante es la informalidad de la contratación pues se les incorpora precariamente por medio de trabajos de baja remuneración o estabilidad, abriendo aún más la brecha de exclusión y desigualdad.

Adicionalmente, según la CNMH (2015), la economía local se debilitó con la entrada de las empresas privadas. La entrada de las empresas privadas al puerto afectó la actividad económica local, basada en la pesca artesanal, la extracción de madera y la producción de bebidas tradicionales, actividades que, si bien se continúan haciendo cada vez a menor escala, la tecnología que se importa para el puerto, poco y nada favorecen a la economía local, dando lugar al fenómeno de las bandas delincuenciales. “Grupos que posteriormente anularon las dinámicas armadas de los actores armados ilegales que arribaran al puerto” (p. 59).

El puerto de Buenaventura no es la excepción; así lo refleja uno de los escándalos más mediáticos, el de la familia Ambuila, como lo publicó la revista semana, (2020) uno de sus miembros funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). Con un salario modesto, es señalado de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, y su hija mientras tanto presumía en las redes sociales un Lamborghini.

Además de la corrupción, la presencia de las BAO al interior del Puerto, ha facilitado economías ilegales asociadas al narcotráfico y contrabando. Uno de los entrevistados se refiere a este fenómeno en los siguientes términos.

“Que actualmente la BAO La Local tiene el control al interior del puerto, y han logrado poner hombres de confianza a trabajar, para desde allí pasar la droga, hay integrantes del grupo en cargos medios y bajos, pero cada uno realiza un papel que permite que la droga pueda ser puesta en los grandes buques de carga. Claro que ellos no se mueven solos, también han logrado alianzas con personas de rangos más altos al interior de la DIAN, la policía, y directivos de las empresas, La Local también se mueven en el negocio del contrabando, ellos la ofrecen en la zona comercial, diciendo que es una mercancía que se cayó de los barcos, por eso es más barata.

En lo que respecta a la otra banda armada, “La Empresa”, está más disminuida porque le han dado muy duro, y no tiene tanto poder al interior del puerto, estos ahora se dedican más al microtráfico y la extorsión”. (Líder comunitario, comunicación personal, entrevista N°1, 11 de diciembre de 2019).

La fuerza pública es otro actor que entra en escena por su participación y complicidad en las actividades ilícitas al interior del puerto; así lo confirma la destitución de oficiales, como lo manifiesta el siguiente entrevistado:

El líder comunitario del barrio El Progreso de la comuna 10, declaró: “Aunque hay cosas que no salen en los medios de comunicación, nosotros sí sabemos que los equipos de buceo de la policía a cargo de inspeccionar los cascos de los barcos, buscando el contrabando y droga, ejercían una función contraria, consistente en instalar la droga en las embarcaciones”. (Líder comunitario del barrio El Progreso de la comuna 10, comunicación personal, entrevistado N° 3, 03 de octubre de 2019).

4.2. Grupos armados presentes en el área urbana

Como lo exponen Flórez y Ruiz (2018, p. 541), en Buenaventura la presencia de actores armados ha sido histórica, pero cobran relevancia hacia la década de los 80, cuando empiezan a llegar grupos asociados al contrabando, con el objetivo de tener el control de los principales centros de dicha actividad; también aparecieron actores ligados a los carteles del narcotráfico, sus ejércitos privados y actores armados ilegales que se disputaban el control económico y social. Por su parte las FARC-EP hacían presencia en Buenaventura en las zonas rurales únicamente para buscar un lugar de refugio y descanso

Un excombatiente del Bloque Calima de las AUC entrevistado, recuerda la entrada de las FARC-EP a la zona rural de la siguiente manera:

“Yo vivía en el Bajo Calima, allí a mediados de los años 80 llegaron unos hombres que nosotros veíamos haciendo ejercicio, corrían desde la orilla del río hasta el cementerio; ellos nos invitaron, a los niños y jóvenes eso nos parecía divertido. Después nos pasaron unos palos para practicar, nosotros nos creíamos rambos y así, poco a poco nos fueron vinculando a su grupo, además vincularon a nuestros papás pues les pagaban para que les transportaran los alimentos y otras cosas, y como éramos tan pobres pues ese dinero servía para completar para la comida. Además, nos daban alimentos y ropa, ahí nosotros estábamos muy contentos. Después fue que caímos en cuenta que estábamos era de cabeza metidos con las FARC, por otro lado, nos decían que el gobierno nos tenía abandonados y que la policía no tenía por qué

molestarnos. Pero se dio una incursión de la Policía en el Calima y se dio un gran desplazamiento y nosotros tuvimos que salir a Buenaventura a la ciudad”. (Excombatiente del Bloque Calima de las AUC, entrevista N°7, 15 de diciembre 2020).

En la década de los noventa, las FARC-EP logran ingresar en el área urbana con el Frente Manuel Cepeda Vargas, la columna Arturo Ruiz y el Frente 30; hacen sus primeras acciones relacionadas con ataques a la policía. Estos se posicionaron en la zona de Bajamar. La comunidad recuerda esta época con positivismo, pues consideran que las FARC-EP estaba del lado de ellos y de la defensa de sus derechos.

La líder de mujeres entrevistada menciona la entrada de las FARC-EP a los barrios de la siguiente forma:

“Yo recuerdo que la guerrilla salía a la vía y cogía los camiones que transportaban leche, arroz y se los daba a las comunidades, yo los veía a ellos como unas personas que compartían con el pueblo, que luchaban por nuestros derechos; pero también recuerdo que empezaron a escucharse bombas, disparos que antes no habíamos escuchado. Ellos (las FARC) nos decían que les tocaba defenderse porque los estaban acosando mucho, se referían a la fuerza pública. Sé que en lo rural era igual, en particular sé que en Naya ellos ayudaban a la comunidad con alimentos, medicinas, eran los que sacaban a los enfermos, ellos tenían humanidad, no se veían casos de violencia sexual; antes, por el contrario, nos defendían de los agresores”. (Lideresa organización de mujeres, comunicación personal, entrevista N° 6, 08 de octubre de 2020).

Los paramilitares, otro actor armado que entra en escena hacia el año 2000, representados inicialmente por el Bloque Pacífico; pero que después pasa a llamarse Bloque Calima, de acuerdo con el informe 2 de la CNMH (2018). Los paramilitares inicialmente estuvieron cobijados con la bandera antisubversiva, en ese sentido entraron en confrontación directa con las milicias de las FARC-EP,

en el área urbana, pero también con fuertes confrontaciones en lo rural, configurándose un escenario de guerra sin precedentes en Buenaventura. Sin embargo es de precisar que su llegada tuvo “una serie de intereses económicos –control de fuentes de financiación (en especial el narcotráfico) y captación de rentas legales e ilegales– y político-militares –expansión de las AUC, control territorial y poblacional” (p.148); algunos de los cuales coinciden con la implementación de megaproyectos en tierras de comunidades negras, campesinas e indígenas, que aparecían como desocupadas, pero que realmente fueron abandonadas por la población de manera forzada. En el fondo la violencia contra las organizaciones campesinas se explica porque eran un obstáculo para la concentración de la propiedad de la tierra y el dominio regional que querían instaurar los actores legales e ilegales para satisfacer sus intereses económicos y políticos (CNMH, 2018, p. 171)

Durante todo el periodo que los paramilitares hicieron presencia desde el año 2000 a 2004, de acuerdo con la IEI de la Universidad Javeriana (2019), “la tasa de víctimas ha sido la más elevada del conflicto en Buenaventura en un 20.97% por cada 10.000 habitantes. De la misma manera este período presentó un promedio de 245 víctimas por año y los grupos paramilitares fueron los presuntos responsables del 52.82% del total.

Una lideresa entrevistada recuerda de manera impactante la entrada de los paramilitares así.

“En el año 2000, una mañana me levanté y encontré letreros del Bloque Pacífico, pensamos que era algo bueno, pero realmente ahí empezó el calvario, yo vi a una familia que cogieron, amarraron al esposo y al hijo y entre varios hombres violaron a la mujer delante de ellos. Subyugaban a las mujeres a través de la violencia sexual, empezaron a extorsionarnos nos cobraban 2.000 pesos a los

que teníamos casas de madera y más dinero a los que tenían casa de material. Realmente nos quitaban lo de comprar la comida de los hijos.

También aumentaron los enfrentamientos, estos eran muy fuertes, nosotros teníamos que escondernos debajo de las camas, en una ocasión estando allí escondidos escuchábamos que decían maten a todos esos que son unos alcahuetes de la guerrilla, quemémoslo y efectivamente con una pipa de gas encendieron a tres casas, afortunadamente el incendio no continuó.

Todos tuvimos que desplazarnos, allí nos tocó salir a cuatro barrios que son cercanos, pero lo que más nos dolía era ver la complicidad con la fuerza pública, eso sí dolía...”. (Lideresa de la organización de mujeres, comunicación personal, entrevista N° 6, 08 de octubre de 2020).

Los integrantes del Bloque Calima, siguiendo el informe de la CNMH, (2018, informe 2) se ubicaron en las zonas de Bajamar, donde ya hacía presencia las FARC-EP, logrando por un lado reclutar a integrantes de bandas armadas, pero también de milicianos de las FARC-EP; por otro lado, limitaron el acceso a las provisiones de las FARC-EP en lo rural, hasta lograr que estos últimos abandonaran su presencia en el área urbana. Sin embargo, en una entrevista con un excombatiente de las FARC-EP, manifestó que su salida se debió a no lograr consolidar una base social fuerte, que representara sus ideales revolucionarios.

El excomandante guerrillero del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC-EP, declaró: “En el área urbana contábamos con milicias, pero debido a la comunicación limitada entre los que estábamos en lo rural con estas milicias, hizo que las cosas no funcionaran bien, en el área urbana no teníamos trabajo con la base social. Y los milicianos iniciaron a tomar acciones por su cuenta que no corresponden a los principios que promulgaban las FARC, tomando entonces la decisión de abandonar este espacio y fortalecer la presencia en lo rural”. (Excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC-EP comunicación personal, entrevista N° 4, 09 de septiembre de 2020).

Posterior a la desmovilización de los paramilitares y que el Bloque Calima sale oficialmente de Buenaventura, entran en escena nuevos actores armados, esta vez conformados por disidentes de los paramilitares. Se conformó la banda armada (BA) denominada “La Empresa” y por otro lado el Clan del Golfo. Este grupo, según un McDermott (2014), tiene su origen en las BACRIM, conformado por Mario Castaño, uno de los máximos cabecillas de los paramilitares en el Urabá Antioqueño, aunque actualmente los de Buenaventura actúan de manera independiente de las otras regiones.

Según el informe de Pares (2019) y lo dicho por los entrevistados, el Clan del Golfo, actualmente tiene una alianza con la BAO “La Local” denominada así por la policía, como una manera de minimizar su impacto. A la fecha, despliegan su accionar en la mayor parte de la ciudad, desde la comuna 1 hasta la comuna 9 se evidencia un control indisputado, en la comuna 10 tienen incidencia sobre algunos barrios, en la comuna 11 tienen el control total y en la comuna 12 en unos pocos barrios.

Dicho contexto también fue avizorado por la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana N° 007-19 donde hace referencia al intento de “La Local” por obtener un control hegemónico vulnerando los derechos de la población civil. Reflejado en el incremento en las cifras de homicidios y en la sevicia para cometerlos; en ese mismo sentido los grupos armados ilegales instrumentalizan a los jóvenes para la comisión de conductas contra la vida ofreciéndoles dádivas y adoptando tácticas de dominación social, económica y territorial, que varían constantemente.

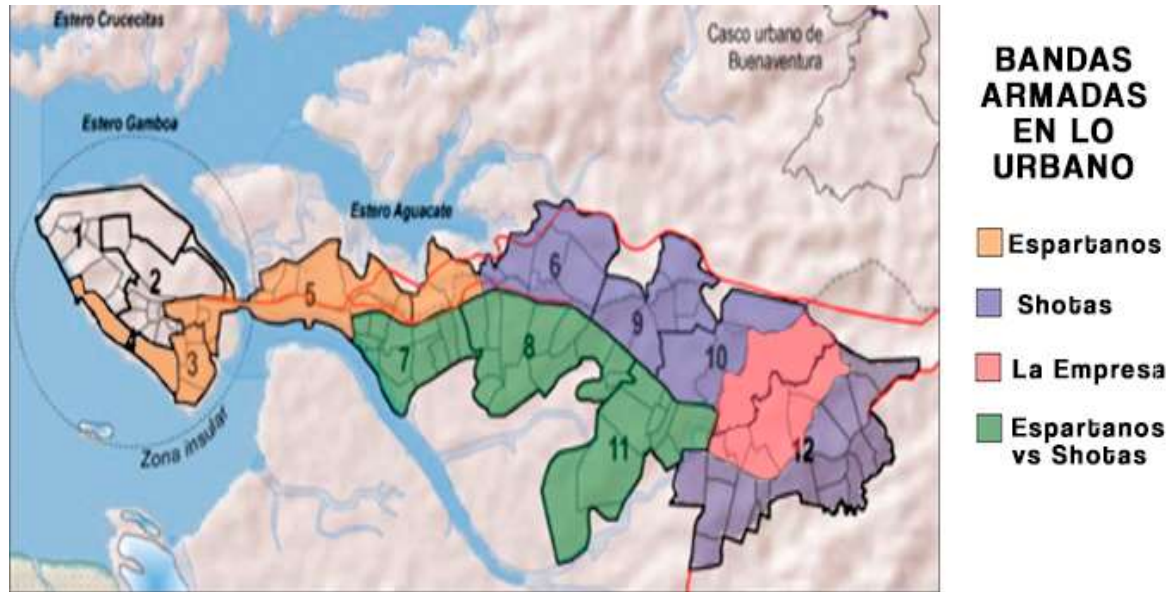
El control de “La Local” generó aumento de homicidios, amenazas, intimidaciones y desplazamientos a líderes y lideresas de las comunas, a personas que supuestamente no respetan las normas impuestas, también contra personas señaladas como “perjudiciales para la sociedad” (la mal llamada “limpieza social”).

Desde el año 2019, los entrevistados rememoran que a la BAO “La Local” le sobreviene un nuevo fraccionamiento, en particular en los barrios Antonio Nariño y Cristóbal Colón, al parecer auspiciado por la disidencia de las FARC, columna Jaime Martínez que opera en la zona, que busca el control de los barrios de bajamar con el objetivo de trasladar las drogas ilícitas, las armas, las provisiones, y poder desde ahí extorsionar a los empresarios que quieren construir en las zonas de expansión portuaria. Lo que ha generado una confrontación armada, reflejada en el aumento de enfrentamientos (23), según los reportes de la policía en los medios de comunicación local, en lo que lleva del año, además de asesinatos y desapariciones forzadas.

Para el año 2020, de acuerdo con el informe de Indepaz, (agosto 2020) también apareció un panfleto de la Columna Móvil Jaime Martínez, que tiene presencia en las cuencas de los ríos de Buenaventura, amenazando con disputarle el control territorial al Clan del Golfo/La Local y la organización delincriminal “La Empresa” y anunciando su llegada al área urbana de la ciudad.

A finales del año 2020 la BAO “La Local” sufre una nueva división, producto de una disputa interna de reacomodamiento. Que terminó en la conformación de dos grupos, Los Chotas y Los Espartanos, dejando de existir “La Local”, BAO Estas dos aún están en disputa por el territorio urbano, como se evidencia en la figura 5, donde las comunas 7, 8 y 11 siguen siendo objeto de confrontación para su control y dominio; por otro lado, la banda armada La Empresa continúa haciendo presencia muy reducida en la comuna 12. Información que también es argumentada por La Defensoría del Pueblo en la alerta temprana N° 003-2021.

Figura 5: Mapa con ubicación grupos armados en el área urbana en el año 20205



Nota. Elaboración propia. Morales, Calderón. (2021). *Bandas Armadas por comuna.* Zona Urbana. Buenaventura, Valle del Cauca

“Meses antes de concluir el año 2020, cabecillas de “La Local” llevaron a cabo una reunión interna en un barrio de la comuna 11, en la cual establecieron acuerdos de no agresión entre ellos, sobre los barrios donde cada cual tendría su área de operaciones. Sin embargo, el pacto de no agresión entre los mandos se quebrantó. Esto se vio reflejado en la división de “La Local” y la conformación de dos estructuras ilegales que se separaron de ésta, a saber, los autodenominados Los Chotas y Los Espartanos, la comisión de un atentado contra el jefe de una de las bandas a finales de diciembre de 2020 y la pérdida de un cargamento de estupefacientes.” (p. 5).

Retomando lo enunciado, otra de las Bandas Armadas Organizadas-BAO que hacen presencia en Buenaventura es la denominada “La Empresa”, esta se conformó con el objetivo de evitar que las FARC-EP retornara al área urbana, esta se mostró ante la comunidad como una empresa que impediría a las FARC-EP extorsionar a los bonaverenses (FIP, 2014).

Según CNMH (2018), “La Empresa fue conformada en el 2010 por Orlando Antonio Cuero, alias El Mono u Orejas, un exintegrante del Bloque Calima que no se desmovilizó. A esta organización se vincularon exintegrantes del Bloque Calima que ya hacían presencia en la zona” (p. 483).

Según la fundación Pares (agosto,2019. p. 96) “La Empresa” estableció alianzas con la Gente del Orden, un grupo armado proveniente de la costa pacífica nariñense hasta la fecha de la investigación se evidenció que actualmente hay reductos que siguen trabajando de la mano con “La Empresa”.

En el mes de noviembre de 2017, de acuerdo con los entrevistados, “La Empresa” sufrió unas bajas importantes, pues la BAO “La Local” logró incursionar en el centro de sus operaciones, es decir los barrios Progreso, Carlos Holmes y Bello Horizonte de la comuna 10; allí llegaron hombres fuertemente armados dando de baja a 8 de sus hombres y haciendo huir temporalmente a casi la totalidad de sus integrantes, otros por temor se entregaron a la policía o se presentaron al ejército para prestar el servicio militar. A pesar de la fuerza que ha ido perdiendo “La Empresa”, continúa activa y dedicada al microtráfico, la extorsión y como gatillera de los narcotraficantes antes mencionados, alias el Mono y alias Julito.

Ante el anterior comentario, el líder social del barrio El Progreso de la comuna 10 declaró:

“La Empresa estaba comandada por el Mono a él todos lo respetaban, porque sabía comportarse con la comunidad, por eso tenía un poder amplio en la ciudad, eran los más fuertes en Buenaventura; pero cuando al Mono se lo llevan a la cárcel las cosas cambian y los otros empiezan apoderarse de casi toda la ciudad, a ellos los financiaron otros manes que tenían más poder, y se desató una guerra donde perseguían a todos los muchachos de “La Empresa”, hasta quedar reducidos a una parte de la comuna 10 y 12, aunque desde la cárcel el Mono sigue mandando y apoyando a los muchachos «hay muchos que se han volteado, porque los otros paras les ofrecen pagar más, dicen que entre 700,000 y un millón de pesos, el problema es que los volteados son los que dan la información de quiénes son y dónde viven los muchachos de La Empresa y por eso es que no pueden salir de los barrios porque los matan”. (Líder social del barrio El Progreso de la comuna 10, comunicación personal, entrevista N° 3, 03 de octubre de 2019).

Las tres BAO operan hoy en día de manera descentralizada. En el marco de la mayoría de las acciones emprendidas día a día (control social del barrio, disciplina de los integrantes, práctica de extorsión, etc.), las BAO funcionan más como un conjunto de sub-bandas, que como una jerarquía estructurada. Se componen de integrantes reclutados voluntariamente o no, con una participación fuerte de menores de edad. La vinculación, el reclutamiento forzado y la utilización de menores y mujeres constituyen un propio *modus operandi* de las bandas para la transmisión de informaciones, el transporte de armas y drogas y para la ejecución de delitos cotidianos como extorsiones y amenazas.

Una vez las FARC-EP salen de la zona rural, donde hacían presencia para asegurar las rutas del narcotráfico, las BAO intentan por sus propios medios transportar la droga; pero dada su inexperiencia y las confrontaciones entre ellas, han aumentado los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas mientras cargamentos de droga ilícita se pierdan o son decomisada por la fuerza pública; otros actores armados al parecer estarían intentando hacer presencia en la parte urbana según la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana

Nº 007-19 (p.2), donde afirma que el Ejército de Liberación Nacional -ELN- ha venido entrenando de a poco con un grupo pequeño de integrantes⁵.

Sin embargo, en las entrevistas se mencionó que la BAO “La Local”, estaría usando el nombre del ELN, para generar pánico entre la población e incertidumbre a los integrantes de la BAO Empresa, además los entrevistados consideran que no estarían con la capacidad operativa para enfrentarse en el área urbana, toda vez que en lo rural están tratando de copar las zonas dejadas por las FARC-EP, presión que están recibiendo por un lado de la fuerza pública y por otro lado los enfrentamientos con las disidencias de las FARC-EP han hecho que limiten sus acciones y mantengan un bajo perfil.

Un último actor que ha entrado en escena en el área urbana es el cartel de narcotraficantes de México, al parecer “Jalisco Nueva Generación”, que hace presencia en el pacífico colombiano de acuerdo con el informe de la Fundación Pares (2020).

La presencia histórica de múltiples actores en el casco urbano de Buenaventura, ha incidido en los altos índices de violencia urbana en la degradación de las prácticas violentas al hacer uso de las barreras invisibles, las casas de pique, los descuartizamientos, la violencia sexual como medio para tomar ventaja sobre el enemigo, el uso de menores y la vinculación de un número importante de jóvenes en sus filas.

⁵ “En la alerta Nº 007-19 mencionan que el 24 de agosto de 2017 en el barrio Nueva Frontera fue hallada una pañoleta roja y negra con las iniciales ELN, sin embargo, según la versión conocida, no informaron a la Policía, por temor ya que en el barrio opera el “Clan del Golfo” o AGC. Una persona de la comunidad que fue conminada a raíz de ese hecho manifestó “el 26 me encontraba en mi casa y en la noche golpearon fuerte la puerta, eran tres hombres con armas cortas quienes me dijeron necesitaban información sobre la pañoleta, les dije que la había entregado y uno de ellos me dijo que si se enteraban los del ELN estaban entrando al barrio por información mía, lo iba a pagar muy caro; tenga en cuenta que en ese barrio este año se han presentado 4 enfrentamientos donde no ha participado la Fuerza Pública, se rumora que son milicias del ELN que quieren entrar a buenaventura y enfrentarse con el clan del golfo”. (p.4)

4.3. Corrupción y narcotráfico

Corrupción.

Buenaventura ha estado impregnada por los escándalos de corrupción que han logrado ser descubiertos y que están asociados a los procesos electorales, ligados al narcotráfico y los grupos armados, a la contratación de la educación por cobertura y a la contratación de la infraestructura en salud.

En lo relacionado con los procesos electorales, de acuerdo al informe Especial de Riesgo Electoral - Elecciones regionales 2011, de la Defensoría del Pueblo mostró que Buenaventura se encontraba en riesgo alto por incidencia de los actores armados en los comicios electorales, tanto por la presión ejercida por los Nuevos Grupos Armados Ilegales surgidos con posterioridad a la desmovilización de las AUC, como por la guerrilla de las FARC, que ejercían presión en lo rural.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo (2011) en el informe manifiesta:

“ Los grupos armados ilegales buscarán injerir en la configuración política ejerciendo presión sobre los pobladores urbanos para que depositen sus votos por los aspirantes afines a sus intereses, e intimidando por medio de amenazas verbales y panfletos a los candidatos, principalmente, a las alcaldías, quienes en algunos municipios son citados de manera forzosa a reuniones para realizar acuerdos de cooperación y someterse a las condiciones del grupo ilegal porque de lo contrario pueden ser víctima de retaliaciones” (p. 161).

Por lo anterior, un excombatiente del Bloque Calima declaró:

“No es que en Buenaventura la gente sea tan boba de seguir eligiendo a los que sabemos son corruptos, lo que sucede es que no nos dan opciones, los grupos armados han decidido por nosotros, ellos dicen aquí en este barrio todos los votos deben ser para tal candidato. En el 2019, a los mototaxistas les pagaron hasta 50.000 mil pesos y les daban el almuerzo para acompañar caravanas en favor de ese candidato, e igual les pagaban para obstaculizar otras caravanas. A pesar de eso, por primera vez en muchos años, se dio una desobediencia y se eligió a conciencia, con miedo, pero lo hicimos”. (Excombatiente Bloque Calima, comunicación personal, entrevista N° 7, 10 de octubre de 2020).

En Buenaventura, los últimos siete (7) alcaldes se han visto implicados en delitos contra la administración pública, cuatro de ellos no terminaron sus mandatos por escándalos de corrupción y fueron puestos en prisión, entre ellos Saulo Quiñones, José Félix Ocoró, Bartolo Valencia y Jorge Eliécer Arboleda.

El primero fue Saulo Quiñones en el año 2007, en momentos en que el puerto se agitaba por la violencia, fue investigado por contratación indebida y prevaricato por unos \$11,600 millones en obras de colegios, además del programa de educación subsidiada o de cobertura educativa.

El segundo, José Félix Ocoró Minotta, quien fue dos veces alcalde de Buenaventura y en ambas oportunidades fue cuestionado e investigado por anomalías en la contratación pública, según los informes de fiscalía.

De acuerdo con lo establecido en la investigación por la Fiscalía de la Nación, en el año 2010 habría permutado dos bienes inmuebles administrados por la Corporación Regional del Valle del Cauca, CVC, por otros dos de propiedad de la empresa privada

Ecofertil. En la transacción esa compañía debía cancelarle al municipio de Buenaventura la suma adicional de \$3.500.000.000; dinero que supuestamente no ingresó a las arcas de la administración local. (p)

El tercer alcalde cuestionado fue Bartolo Valencia, según la fiscalía El burgomaestre fue investigado en el 2012 por contratos relacionados con cupos escolares por 3.076 millones de pesos, para atender a 3.845 niños, a través del Sistema General de Participaciones, donde contrató a 97 operadores bajo la modalidad de contratación directa.

La fiscalía halló que, en seis de los contratos, cada uno de los 3.845 menores favorecidos le costaba un millón de pesos al municipio, mientras ellos pagaban al operador la mitad de esta cifra, poniendo en riesgo la calidad del servicio prestado.

Adicionalmente algunos de los contratistas eran empresas recién creadas que no tenían al menos los tres años de experiencia que la ley exige. Asimismo, aparecieron niños clonados. Los mismos menores fueron hallados en varias listas y en diferentes colegios; además, surgieron nombres de servicios prestados para menores de edad que nunca nacieron. (Nación F. G., A la cárcel Alcalde Buenaventura por supuestas irregularidades en contratación para cobertura educativa, 7 de septiembre de 2015).

El cuarto alcalde implicado es el señor Eliecer Arboleda, quien llegó al mandato para el periodo 2015 al 2019, no logró terminar su mandato y fue privado de la libertad, implicado por presunta malversación de 5.000 millones de pesos de los 10.000 millones de pesos que iban a ser destinados para la operación del hospital distrital Luis Ablanque de la Plata.

La fiscalía, en su boletín 25938 (2019), anuncia que “El exalcalde Eliécer Arboleda de la mano de su hijo también de nombre Eliecer Arboleda Riascos y un funcionario del hospital habrían participado en hechos de “concusión y falsedades ideológicas pues supuestamente le habrían hecho firmar letras y cartas de renuncia al exgerente del hospital de esa localidad, Luis Ablanque De La

Plata, a cambio de nombrarlo en dicho cargo”. De igual forma, le habrían exigido contratos y pagos de cuentas a altos costos, así como nombrar a personas en el hospital; al respecto, el hospital tiene contratado más de 520 empleados, una nómina muy alta para el presupuesto que manejan, convirtiéndolo así en el segundo fortín burocrático después de la alcaldía.

En suma, dichos alcaldes han desangrado económicamente a Buenaventura, dejando de hacer inversión social, afectando la calidad de vida de los ciudadanos, y negándoles derechos fundamentales como la salud y la educación, incidiendo negativamente para que crezcan de manera escandalosa las cifras de pobreza y los escalofriantes datos de la violencia, como se verá en el presente capítulo.

Por otra parte, los escándalos por corrupción electoral en Buenaventura, como lo plantean Flórez y Ruiz (2018), “son un fiel espejo de la debilidad del sistema electoral nacional y de la capacidad de manipulación de las “élites” locales y de la debilidad del Estado central para garantizar la transparencia de las elecciones en el puerto más importante de la nación”. (p.548).

En respuesta a dichos abusos los bonaverenses salieron a marchar a las calles el 16 de marzo del 2017, exponiendo las carencias en servicios básicos como el agua o en derechos como el acceso a la educación y la salud. Las manifestaciones se extendieron por 22 días, hasta que el Gobierno nacional y la comunidad de Buenaventura representada por el comité ejecutivo del Paro Cívico “*Para Vivir con Dignidad y Paz en el Territorio*”, firmaron unos acuerdos para mejorar la educación, reabrir el hospital público del municipio, dar solución al abastecimiento permanente de agua a todos los habitantes no solo a la zona de presencia de las empresas portuaria, brindar más oportunidades de empleo, entre otros asuntos.

Respecto a este paro, según el informe presentado por el Comité del Paro Cívico (2019), entre los logros más sobresalientes están en primer lugar unir a los bonaverenses; a pesar del miedo, salieron a reclamar sus derechos, posteriormente y como lo manifiesta uno de los dirigentes del paro, el señor Víctor Vidal, actual Alcalde, se logró incorporar un marco normativo, con la creación de la ley 1872, y la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el artículo 265 que reitera y establece que el Gobierno nacional va a financiar el fondo de patrimonio autónomo de Buenaventura. Otro aspecto positivo es la realización de la consulta previa del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En términos de educación, salud y agua potable, dos años después se han alcanzado unos logros representados en la asignación presupuestal para la construcción y mejoramiento de las sedes educativas, recursos para mejorar la conectividad y nuevas plazas para mejorar la cobertura, en términos de la educación superior se logró la asignación presupuestal para la adecuación de infraestructura en la sede de la Universidad del Pacífico y la implementación de la estampilla pro universidad.

En el tema de salud, continúan el informe (2019) dado por la mesa del paro cívico, los avances están en asignaciones presupuestales para la construcción, adecuación y dotación al hospital Luis Ablanque de La Plata, para la apertura de servicios de nivel dos, ampliación de camas pediátricas y para la unidad de cuidados intensivos, además de la asignación de presupuesto para el estudio de prefactibilidad de la ciudadela hospitalaria, además de la adecuación, remodelación y construcción de puestos de salud urbanos y rurales. Sin embargo, se requiere de mayor celeridad en los proyectos para que el hospital deje de funcionar de manera paquidérmica como hasta ahora.

En lo que respecta al acceso del agua potable, tras los dos años todavía no se ven progresos significativos toda vez que ni siquiera el 50 por ciento de la población recibe agua potable a través del acueducto las 24 horas; de esta manera donde más llega el líquido, dura un promedio de 5 – 6 horas y en otros lugares dura 2 horas aproximadamente, hay muchos lugares a los que aún no llega. En consecuencia, se requiere como lo plantean los líderes de la mesa, un plan moderno diseñado por expertos que ofrezca soluciones integrales, que no contamine el medio ambiente marino.

El Narcotráfico.

Otro factor que ha incidido en el desarrollo de la violencia en la ciudad y que se extiende hasta nuestros días es el narcotráfico. Las condiciones geográficas y de ubicación de la ciudad le conceden una ventaja, no solo para la economía lícita, sino para que se genere una economía ilegal en el tráfico de drogas ilícitas.

El narcotráfico juega un papel fundamental en la economía del puerto convirtiéndolo en un centro de producción, mercadeo y exportación de la droga, favorecido y amparado en lo rural porque facilita las rutas del narcotráfico y las salidas al mar y en el área urbana porque el puerto facilita las exportaciones fuera del país, a través de los buques mercantes.

Los narcotraficantes actualmente optan por hacer uso de los medios que les sean más efectivos de bajo perfil; en ese sentido, como bien los menciona Insight Crime (2018). Esto se debe a que, si se puede subir un contenedor a un buque, en términos generales, el mismo puede enviarse a casi cualquier lugar del mundo con un mínimo riesgo de que sea abierto. En consecuencia, un cargamento

de cocaína dentro de uno de esos contenedores pasa por el menor número posible de manos, lo que reduce costos y riesgos de decomiso y traición.

En la zona rural las FARC-EP y el ELN, anteriormente tenían el control del narcotráfico, en la actualidad son las disidencias de las FARC-EP, quien mantiene el control de las rutas del narcotráfico, cobrando impuestos a los narcotraficantes. Por último, una investigación realizada por Insight Crime (2018), halló que algunos oficiales habían sido destituidos de sus cargos por acusaciones de corrupción y nunca se presentaron cargos. Existían acusaciones, que los equipos de buceo de la policía a cargo de inspeccionar los cascos de los barcos depositaban cocaína en lugar de retirarla⁶.

En conclusión la violencia urbana en Buenaventura no es reciente, remonta su origen a la década de los noventa, donde confluyeron varios factores, como el cierre en 1991 de la empresa pública más importante para los bonaverenses, la empresa Puertos de Colombia, y la creación paulatina de las empresas portuarias de carácter mixto y privado, las cuales con anuencia de las normas estatales expandieron la operación portuaria en Buenaventura, relegando otras fuentes económicas como la pesca y la explotación de madera.

También, para esta década entran los actores armados que encuentran un espacio propicio para instalarse, toda vez que encontraron una comunidad con muchas necesidades y sin fuentes de ingreso; pero su mayor pico se presentó en el año 2000 con la

⁶ Examinamos el sistema que vigila los contenedores que ingresan al puerto: tiene la capacidad de inspeccionar un contenedor cada siete minutos. Cualquier narcotraficante asumiría con gusto un 8 % de riesgo de decomiso. Sin embargo, apenas el 3 % de los contenedores son inspeccionados realmente. Y esto es solo remotamente efectivo si asumimos que las autoridades portuarias no están en la nómina de la mafia y simplemente dejan pasar contenedores ya “contaminados” con cocaína”.

entrada de los paramilitares representados en el Bloque Calima, quienes entraron con una consigna antisubversiva, pero de fondo movida por intereses económicos relacionados al narcotráfico y captación de rentas legales e ilegales– y político-militar. Con la sevicia que realizaron sus acciones aportaron el mayor número de víctimas que se han presentado en Buenaventura. Según la CNMH (2015), “Buenaventura pasó de contar con 58 homicidios en 1990 a 440 en el 2000, año con el mayor número de homicidios dentro del periodo del arribo paramilitar 2000-2004” (p. 222).

Después de la desmovilización del Bloque Calima, los bonaverenses se vieron enfrentados a una disidencia de los paramilitares que no abandonó la ciudad, y por el contrario continuó delinquiendo, dedicados al narco y microtráfico. Todo lo anterior aunado al rápido proceso urbanístico, la concentración de la riqueza en unos sectores y el detrimento de otras, las limitaciones del Estado para enfrentar los retos del crecimiento poblacional, en términos de garantizar las necesidades básicas como salud, educación, servicios domiciliarios entre otros. Y para complejizar la situación se da el fenómeno de la corrupción de sus gobernantes y fuerzas militares mientras el narcotráfico encontró en el puerto el espacio propicio para su comercialización hacia muchos lugares del mundo.

CAPÍTULO V. PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA: DESMOVILIZACIÓN, DESARME Y REINCORPORACIÓN –DDR- DE LAS FARC-EP, BAJO LA MIRADA DE BUENAVENTURA

5.1. Historia de la llegada de las FARC-EP a Buenaventura

Según un informe de la Comisión de la Verdad (2019), habría registros de la presencia de las FARC-EP en el área rural de Buenaventura desde el año 1980; un factor clave que favoreció la incursión armada. Fue la ausencia de políticas de desarrollo económico del Estado; otro factor influyente, en 1991, como ya se mencionó en el capítulo anterior, fue la desaparición de Colpuertos, que dio con la privatización del Puerto. Como efecto colateral se presentó una expansión de la operación portuaria en Buenaventura, afectando otras actividades económicas tales como la pesca y la explotación de madera. Lo anterior propició las condiciones para que los grupos armados se posesionaron del territorio.

En palabras textuales, la Comisión de la Verdad (2019,) agregó: “Buenaventura cuenta con uno de los puertos más sofisticados de Latinoamérica, pero el 81% de sus habitantes vive en pobreza extrema, más 100 mil personas han sido víctimas del conflicto armado” (párr. 4)

Dentro de las estructuras de las FARC-EP, el Frente 30 siempre fue responsable de esta parte del territorio nacional, reportes de la Defensoría del Pueblo mencionan que en 1991 y 1992 aumentaron su accionar, en especial sobre la carretera que une a Buenaventura con Cali, donde demostró su poderío militar. En 1998 los grupos de las FARC-EP presenta un aumento de su actividad armada. El Frente 30 de las FARC-EP protagonizó el ataque a los municipios de la margen oriental de la cordillera y proyectándose hacia la zona

urbana de Buenaventura, con el propósito de copar el Pacífico y garantizar los corredores hacia esa zona. (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 20).

Lo expuesto por la Defensoría del Pueblo es reforzado en la entrevista hecha a un excombatiente de las FARC-EP del frente urbano Manuel Cepeda:

“Aproximadamente hacia el año 95, empezando entre los 90, 93, se define que el Frente 30 de las FARC-EP debía ubicarse en Buenaventura, desde ahí comienza la etapa de desplazamiento inicialmente en la parte alta del Naya hacia la zona de Buenaventura, ese digamos pueden ser los inicios donde ellos arrancan inicialmente en el Bajo Calima, luego ya pasan la carretera y se ubican en la zona rural de Buenaventura, lo que tiene que ver con la carretera vieja al mar y con la bahía de Buenaventura hacia el sur todos esos ríos, digamos Anchicayá , Raposo Cajambre, Yurumanguí, Naya, todo eso digamos, eran áreas de ese frente que se les destinó digamos como misión de este frente en esa zona del país en la década de los 90”. (Excomandante de las FARC-EP del frente urbano Manuel Cepeda, comunicación personal, entrevista N° 4, 09 de septiembre 2020).

En esa época, no solo hacía presencia el Frente 30, también lo hacían la columna móvil Arturo Ruiz y el frente Urbano Manuel Cepeda Vargas. En el año de 1998 el Frente urbano Manuel Cepeda, habría llegado a la región de Buenaventura a raíz de los operativos militares desarrollados en áreas urbanas especialmente en Cali y también en aras de ayudar a posicionar al Frente 30.

El excomandante del Frente Manuel Cepeda Vargas, declaró: “Producto de lo que les comentaba antes, desde Cali nos tocaba desplazarnos a un sitio para irnos para el monte, pues vimos con más facilidad ubicarnos en la zona rural de Buenaventura para ayudarle al Frente 30 en esa labor de asentamiento, entonces desde el año 98 empezamos nuestra actividad con una acción armada en el casco urbano de Buenaventura en el marco de varias operaciones nacionales hechas por las FARC-EP. Para la despedida del gobierno de Samper, entonces es la primera incursión que hacemos como FARC-EP grande, la hacemos el 4 de agosto del año 98,

entramos a Buenaventura en una acción conjunta del Frente 30 y de la Manuel Cepeda, eso digamos como accionar armado, pero como actividad propiamente urbana en Buenaventura, con guerrillas urbanas no hubo, lo que hubo fue en el área urbana, fueron amigos conocidos, gente que de una u otra forma les gustaba colaborar o vincularse a actividades de FARC-EP para combatir contra el paramilitarismo que estaba muy fuerte para esa época en la zona de Buenaventura, para pelear con grupos, de narcotráfico porque también hacían mucho daño a la población”. (Excomandante del Frente Manuel Cepeda Vargas, comunicación personal, entrevistado N° 4, 09 septiembre de 2020).

Durante la década de los 90 las FARC-EP, logra consolidar su presencia en el área rural y en el área urbana, aunque es de precisar que su fortaleza estuvo en lo rural debido a que lograron consolidar una base social de los ríos Naya, Yurumanguí, Cajambre, Raposo, Anchicayá y San Juan. Al respecto, dos de los entrevistados declaran:

El excombatiente del Frente 60 de las FARC declaró: “Nosotros hacíamos presencia en toda la costa pacífica del Cauca, Valle y Nariño con diferentes frentes 30, 29, 60, Manuel Cepeda Vargas y Arturo Ruiz. Para Buenaventura, estábamos en el Naya, en el Yurumanguí, en el Cajambre, en el río Raposo, también teníamos presencia en el río San Juan, allí teníamos trabajo con la comunidad y podíamos llevar a cabo nuestro proyecto político, con las comunidades indígenas y afros, contábamos con el visto bueno de la comunidad, igual el Estado no hacía presencia en ese lugar. (Excomandante frente 60 de las FARC, comunicación personal, Entrevistado N° 5, 05 de octubre de 2020).

El segundo entrevistado hace mención a la consolidación de las FARC-EP en lo rural, convirtiéndose estos en los reguladores del orden social y la convivencia, al fungir como el gobierno y autoridad única en la zona con sus propias reglas, las cuales se cumplían mediante la presión e intimidación, ejercidos a través de las armas.

El excombatiente del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC-EP declaró: “Las Unidades de las FARC-EP tenían un trabajo muy grande con las comunidades en las diferentes regiones, unos nos aceptaban, otros nos toleraban, pues un poco porque éramos el actor armado de la zona que tenía el poder, y evidentemente ante un fusil, era muy difícil que la gente diga que no, pero así hubo un gran apoyo de la comunidad. Tomamos unas medidas de control como evitar robos, mediar en los conflictos, apoyar el trabajo comunitario y defender sus derechos, por lo que en el territorio se sentían mucho más a gusto con nosotros que con otras estructuras de poder en la zona, si se les pregunta a las comunidades de los actores armados en su territorio quiénes tuvieron una actividad menos mala definitivamente somos nosotros, éramos los más tolerables”. (Excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC, comunicación personal, entrevistado N° 4, 09 de septiembre de 2020).

En el casco urbano de Buenaventura la presencia de las FARC-EP, se dio especialmente en las zonas de bajamar, en donde mantuvieron su interés tanto logístico para su aprovisionamiento en lo rural, el control en el impuesto por el movimiento o acopio de droga, el reclutamiento de jóvenes para sus filas, y el interés de consolidar una base social, similar a la rural. Enfrentándose a nuevos retos y dificultades, como el entrar a competir con otros actores armados, las limitaciones en la comunicación y débil formación política a sus milicias.

Para la CNMH (2015), “las células de los milicianos de las FARC-EP se ubicaron en las comunas donde había bandas delincuenciales o se había incrementado el desempleo juvenil por la privatización de Colpuertos, desde allí profundizaron las estrategias de búsqueda de legitimación social y del reclutamiento de jóvenes” (p.159).

El líder social de la comuna 11 declaró: “Las FARC hacían presencia en todos los barrios de bajamar, también hacían presencia en Bella Vista, en el Continente y en la Isla, porque los manes estaban por todos los lados en lanchas, ya no había otro actor armado

aquí; ellos veían a los muchachos en la calle, no los obligaban a irse con ellos, antes los regañaban por estar a determinadas horas en la calle, sin embargo sí nos hablaban de cómo ayudar al pueblo y luchar por mejorar las condiciones de los más pobres, así que muchos jóvenes se dejaron convencer, y empezaron a unirse”. (Líder social comuna 11, comunicación personal, entrevista N°1, 11 de diciembre de 2019).

Desde la mirada de las FARC-EP, la incursión en área urbana de Buenaventura tenía varios objetivos, por una parte, solucionar aspectos logísticos, que les permitiera provisionarse y, por otro lado, iniciar un trabajo de construcción con una base social que les permitiera tener incidencia en sus principios revolucionarios.

Por su parte el excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, recuerda:

“La gente de las milicias urbanas cumplía diversos papeles, diversas misionalidades, entonces una de ellas era el tema del aprovisionamiento logístico, lo que tiene que ver con temas de la remesa, la comida, productos alimenticios, para consecución de botas y cosas que se necesitaban, la gente debía buscar contactos para comprar armas, munición, otras tenían la misión era fundamentalmente de orden público, donde vieran fuerza pública, donde vieran paramilitares, cada quien tenía una misión determinada, nunca tuvimos fue la actividad, que dígame a diferencia de otros actores del país, en donde hubiese una implicación con gente que tuviera trabajo popular, nunca tuvimos gente que tuviera que ver con trabajo comunal, juntas de acción comunal, administración municipal, desde lo urbano, siempre es del campo, se mandaba un mensaje o un mensajero, se buscaba a alguien cercano para que llevara una razón, en Buenaventura nunca pudimos encontrar gente para este tipo de labor, porque algunas veces les costaba la vida”. (Excomandante del Frente Manuel Cepeda, comunicación personal, entrevistado N° 4, 09 de septiembre de 2020).

Su presencia en el área urbana si bien fue importante para las FARC-EP, también presentó dificultades al interior de esta organización, porque las milicias no lograron consolidarse bajo los principios de las FARC-EP, la comunicación no era fluida, y la falta de formación política hizo que abusaran de su poder en contra de la comunidad, o que prestaran servicios y establecieran alianzas con otros actores armados.

Al respecto, el excomandante del frente 60 de las FARC-EP declaró:

“En relación con lo urbano las cosas eran un poco diferentes, no se logró consolidar esa base social, porque los milicianos que se quedaron en el área urbana, se dedicaron a actividades delincuenciales, más interesados en cosas individuales que en el proyecto político. A esos muchachos les faltó entrenamiento porque se necesitaba de 2 años para ser realmente una milicia Bolivariana. Varios de estos muchachos de la milicia urbana terminaron aliados con los narcotraficantes o con los paramilitares del Bloque Calima desafortunadamente”. (Excomandante Frente 60 de las FARC-EP, comunicación personal, entrevistado N° 5, 05 de octubre de 2020).

Otro de los factores que incidieron en la no consolidación de las FARC-EP en el área urbana fue la división interna por intereses individuales, económicos, de poder y la influencia de otros actores armados, en particular el Bloque Calima de las AUC para formar parte de sus filas. Lo anterior se debió a que los comandantes de las FARC-EP no lograron tener un control permanente sobre las milicias urbanas.

El excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC-EP declaró: “Con la milicia urbana no se hacían planes a largo plazo, las actividades, los objetivos, metas o propósitos eran a 3 o 6 meses, y la gente salía con esos propósitos, lo dificultoso era que cuando no se daban las condiciones los llamábamos cada diez días, cada quince días, entonces teníamos un control más exacto del día

a día de lo que estaban haciendo; pero hubo un momento en que ya estábamos muy cerca de las bocas de los ríos o muy cerca de los ríos, entonces ya nos tocó meternos monte adentro, y se dificultaba mucho tener contacto entre ellos y nosotros que teníamos el control, o digamos los mandábamos a ellos, eso fue muy dificultoso, eso hizo que se cometieron unos errores grandísimos, porque nos daban información, que nosotros creíamos, bajo el principio de la buena fe y resultaban no ser tan ciertas, de fuentes que se presentaban y nos decían que eran paramilitares, que era gente enemiga, infiltrados y después nos dábamos cuenta que eran temas de rencillas individuales u otras cosas. Hizo que se cometieron allá una serie de errores y equivocaciones que no tuvieron que haber pasado, pero vuelvo y repito, por la misma dinámica de la guerra, digamos sucedió esa vaina, que no pudimos ejercer un control, esa gente que no tenía esa formación política suficiente, pues cometiera una cantidad de errores y equivocaciones que causaron mucho daño a muchísimas familias en el puerto”. (Excomandante Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC EP, comunicación personal, entrevistado N° 4, 09 de septiembre de 2020).

Adicional a los retos que ya enfrentaba las FARC-EP en el área urbana con sus milicias, se agrega un problema aún mayor, la presencia de la AUC con el Bloque Calima, pues se da una confrontación armada violenta, dado que uno de los objetivos del Bloque Calima era sacar a las FARC-EP del municipio de Buenaventura tanto de la zona rural como de la urbana.

El Bloque Calima, según el informe de la CNMH (2015), hace su arribo en Buenaventura oficialmente el 11 de mayo del 2000, perpetrando la masacre de Zabaletas, operación que dejó 13 muertos de la comunidad, bajo el argumento que se trataba de colaboradores de las FARC-EP, “uno de los factores que incidió en la masacre fue la complicidad por omisión de las fuerzas militares” (p.168), a partir de ahí se presentaron nuevas masacres como la de Campo Hermoso en lo rural. en el área urbana entraron en el mismo mes de mayo en el barrio Cascajal, donde asesinaron a cinco personas tildadas de ser integrantes del Frente 30 de las FARC-EP.

Continuando con el informe de la CNMH (2015, p. 171) en el mismo año 2000, se presentaron nuevas masacres en el área urbana esta vez en la comuna 4, en los barrios La Playita y Muro Yusti y en el barrio Lleras de la comuna 3, todas apuntaban a debilitar a las FARC-EP, pues la mayoría de las víctimas eran personas que provenían de lo rural o que tenían familiares en esta zona, que supuestamente simpatizaban con las FARC-EP.

En retaliación a las acciones del Bloque Calima, el Frente 30, La Manuel Cepeda Vargas y la columna Arturo Ruiz, incrementaron su accionar militar, en particular en contra de la fuerza pública. El 06 de diciembre del 2000 perpetraron un ataque en Cisneros donde destruyeron la estación de policía y otros bienes civiles.

Al respecto el líder comunitario de la Comuna 11 recuerda:

“Las FARC-EP al verse acosados por el Bloque Calima empezó a defenderse, entonces entró a Cisneros y destruyó la estación de policía, solo dos policías se salvaron, uno lo logró tirándose al río, y quedándose ahí escondido toda la noche, el otro quedó aprisionado entre las paredes de la estación y no lo encontraron. Las FARC-EP cogieron todo lo que la policía tenía armas, uniformes, municiones”. (Líder comunitario comuna 11, comunicación personal, entrevistado N° 1, 11 de diciembre de 2019).

También dos de los entrevistados mencionan que las FARC-EP, realizaron ataques en contra del Bloque Calima, al punto de casi exterminarlos.

El líder del barrio El Progreso de la comuna 10, declaró que: “Los manes no pudieron con el Frente 30 en lo rural, el Frente 30 los cogió de verdad, en la antigua vía al mar, por Anchicayá, y les dio, pero feo, les dio durísimo, los mató a casi todos, pero el problema es que los manes ya tenían sembrada la semilla en Buenaventura, si me entiende mataron como a unos 50. Después del enfrentamiento

en Anchicayá intentaron retomar el control de los ríos, pero no fue posible, incluso se puede decir que en este último enfrentamiento las FARC-EP casi logra sacar el Bloque Calima del municipio, pero justo cuando arranca la avanzada de las FARC-EP, se dio el acuerdo del pacto de Ralito⁷”. (Líder barrio El Progreso comuna 10, comunicación personal, entrevista N° 3, 03 de octubre 2019).

A pesar de las fuertes confrontaciones entre las FARC-EP y el Bloque Calima, de las masacres a la población supuesta colaboradora de las FARC-EP, el Bloque Calima no logró el cometido de posicionarse en la zona rural. Sus actividades tuvieron mayor impacto en el área urbana.

El excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas plantea al respecto:

“Reconocemos que hubo una fuerte lucha con el Bloque Calima; sin embargo, podemos decir que este no pudo asentarse, ni posicionarse en la zona rural, recuerdo que su jefe fue HH, también esto se debió al trabajo desarrollado en las comunidades, cuando nosotros estábamos allí, no permitimos que nadie estuviera armado fuera de nosotros en el territorio, entonces nos daba más posibilidad de tener como un control, esta lucha la ganamos gracias al poderío militar que las FARC -EP adquirió en su momento”. (Excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC EP, comunicación personal, entrevista N ° 4, 09 de septiembre de 2020).

en el área urbana, según el informe de la CNMH (2018), los paramilitares en mayo del año 2001 en cabeza de “Yesid Enrique Pacheco Sarmiento, alias el Cabo, ingresó al puerto como comandante urbano e implementó una estrategia de consolidación

⁷ Es un acuerdo de paz que se firmó en el año 2002, en Santa fe de Ralito entre el gobierno nacional y las Autodefensas unidas de Colombia AUC para ponerle fin a este conflicto armado.

territorial” (p.221), por un lado, se da un incremento de la cooptación de colaboradores, milicianos y guerrilleros del Frente 30 de las FARC, lograron reclutar 57 integrantes y es ahí cuando las FARC-EP se repliega al perder a casi todos sus integrantes. El señalamiento, amenazas y asesinatos de personas de tener algún vínculo con las FARC-EP, señalados por los exintegrantes de la guerrilla cooptados por el Bloque Calima.

Con todo lo anterior, las FARC-EP termina replegándose de lo urbano y fortaleciendo lo rural, según los entrevistados, el Bloque Calima no logró su cometido de sacar a las FARC-EP. Sin embargo, las FARC-EP mantuvo una mínima presencia en el área urbana más relacionada con aspectos logísticos que con el control del territorio y de los barrios.

Hacia finales del año 2004 se da la desmovilización del Bloque Calima, pero según el informe del CNMH (2018), la cantidad de paramilitares que no se unieron a este proceso ha sido producto del debate, en particular el grupo que operaba en el Pacífico, específicamente en Buenaventura.

“Mientras hay quienes afirman que los integrantes del Bloque Calima que operaban en el puerto no se desmovilizaron y siguieron delinquiendo como si no hubiera existido una desmovilización colectiva (PCN, 2011), hay posturas intermedias que afirman que hubo un sector de paramilitares que participó en el proceso de desmovilización, mientras que otro se mantuvo en las armas y comenzó a atacar a quienes se habían desmovilizado” (p. 454).

Lo que sí es claro, es que posterior a este proceso entran en escena nuevos actores asociados al narcotráfico, estos logran consolidar y mantener su presencia en el área urbana y si bien sacan a las FARC-EP, posteriormente cambia la relación y buscan alianzas que les permita usar las rutas del narcotráfico.

Un funcionario de la Defensoría del Pueblo entrevistado declara al respecto:

“Entonces entran otros actores que se asociaron a la disidencia del Bloque Calima, la gente de “Los Rastrojos” y parte de los Machos del cartel del Valle, ellos toman las zonas de bajamar, asociados a los empresarios, y asociados al aparato político logrando sacar a las FARC-EP y consolidarse en la parte urbana. Hasta el 2010 podemos decir, que la FARC-EP tuvo presencia en casco urbano”. (Funcionario de la Defensoría del Pueblo, comunicación personal, entrevista N° 2, 05 de marzo de 2020).

Por su parte las FARC-EP durante los años siguientes, hasta la firma del proceso de paz, con el Estado colombiano fortalecen su presencia en lo rural a través del Frente 30, incrementan el control territorial, fortaleciendo las rutas del narcotráfico y realizando trabajo con la base social de acompañamiento en la defensa de sus derechos. Según uno de los entrevistados, durante este tiempo el papel de las FARC-EP en el negocio del narcotráfico se limitó a cobrar impuestos de las rutas por donde los narcotraficantes pasaban la droga, pero no eran los responsables de pasarla hacia otros países.

Un excomandante del Frente 60 de las FARC-EP entrevistado, responde:

“Nuestro trabajo estaba enfocado en seguir luchando por la defensa de los derechos de los campesinos, los afros y los indígenas, al final éramos los únicos que hacíamos presencia en la zona, donde el Estado nunca se asomaba, seguimos con nuestros objetivos revolucionarios, a pesar de que el Estado nos tildaban solo de narcotraficantes. En ese negocio nosotros solo teníamos el control de las rutas por donde los verdaderos narcotraficantes pasaban la droga, y a pesar de nuestra fuerte presencia esos bribones lograban escabullirse y pasar sin pagarnos. Si nosotros hubiéramos estado interesados en ese negocio o ese hubiera sido el objetivo, no hubiéramos firmado el acuerdo de paz, porque eso sí da plata, nosotros solo buscamos financiar la lucha revolucionaria, era una fuente de financiación. También reconocemos que algunos de los guerrilleros se metieron al negocio, pero inmediatamente se tomaron las

medidas necesarias para sacarlos del negocio o de la organización”. (Excomandante frente 60 de las FARC-EP, comunicación personal, entrevista N°5, 05 de octubre de 2020).

5.2. Proceso de desmovilización, dejación de armas y reincorporación a la vida civil del Frente 30 de las FARC-EP, Manuel Cepeda y la Arturo Ruiz.

El 04 de septiembre del año 2012, las FARC-EP y el Estado Colombiano bajo el mandato de Juan Manuel Santos, dieron inicio al proceso de negociación para paz, tras cuatro (4) años de diálogos, el 24 de agosto del año 2016, se logra un documento final “*Acuerdo para la terminación definitiva del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*”. Según lo trazado, este documento debería ser refrendado por los ciudadanos mediante un plebiscito, que se llevó a cabo el 02 de octubre del año 2016 ganando el NO, decisión que hizo que el Gobierno entrara en otro proceso de negociación con los detractores del acuerdo; finalmente el 24 de noviembre del 2106, las FARC-EP y el Gobierno colombiano lograron la modificación del acuerdo, posteriormente fue firmado y aprobado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Según Santos (2018) se trata de un acuerdo de paz ejemplo para el mundo y aunque presenta algunos inconvenientes “*es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta*”.

Es de mencionar que dentro del acuerdo se negociaron y firmaron 6 puntos elementales que dieron inicio a la Desmovilización, Desarme y Reincorporación de las FARC-EP: La Reforma Rural Integral, participación política (de las FARC-EP), fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas con garantías de verdad, justicia, garantías de no repetición, e implementación, verificación y refrendación del acuerdo para la Paz.

Desmovilización

La presencia armada de las FARC-EP en la región pacífica fue cubierta por el Bloque Occidental, también conocido como “Comando Conjunto de Occidente” liderado por Jorge Torres Victoria alias Pablo Catatumbo. Tenía cinco (5) columnas móviles (Míller Perdomo, Gabriel Galvis, Jacobo Arenas, Daniel, Aldana y Mariscal Sucre) y cinco (5) compañías móviles, además poseía cinco (5) frentes (6, 8, 29, 30, 60). Para el caso de Buenaventura centraron sus operaciones los Frentes 29, 30 y el 60 y algunas acciones militares, más en zonas terrestre el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas.

Los frentes que operaban en la región de Pacífico y en Buenaventura (29, 30 y el 60), la columna móvil Daniel Aldana⁸ y la Arturo Ruiz se acogieron al proceso de paz, y al momento de la desmovilización se concentraron en una de las 19 zonas veredales transitorias de normalización (en adelante ZVTN) y siete puntos transitorios de normalización (en adelante PTN). A ellos les correspondió la ZVTN la Elvira en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, allí llegaron aproximadamente 500 hombres de los 13.193 miembros de las FARC-EP, a nivel nacional se comprometieron con el acuerdo final para la terminación del conflicto según información de la ARN.

⁸ La Columna móvil Daniel Aldana, si bien en los últimos años no hacía presencia directa, porque según lo cuenta el excomandante de la Manuel cepeda Vargas “Por la misma situación de la guerra la Manuel Cepeda la desmantelan, matan a JJ, que era el primero al mando, yo que era el reemplazante también soy capturado, y luego el tercero al mando cae asesinado en otro bombardeo, entonces los tres de dirección, digamos que teníamos como la historia de las FARC. Eso pasó entonces con la Cepeda los tres mandos históricos salimos del escenario, entonces los que quedaron atrás no tuvieron el talento suficiente y nuestras unidades se diluyen, pero pues como tal aparecemos como firmantes del acuerdo.

Un excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC EP declaró:

“Esa actividad de concentración de la gente se da en la zona rural de Buenos Aires, en una vereda que se llama la Elvira, donde digamos hacemos todo ese proceso de dejación de armas, además del Frente 30, de la Manuel Cepeda, unidades del bloque móvil Arturo Ruiz, en ese sitio hicieron el proceso más de 500 personas, entre milicianos y unidades del bloque móvil Arturo Ruiz, esta era una unidad de varias columnas guerrilleras, en las FARC-EP una columna guerrillera tenía 90 hombres, el bloque móvil Arturo Ruiz era conformado por 4 columnas guerrilleras, casi 400 hombres a nivel nacional, dos de esas columnas están concentradas en la cordillera central al mando de Catatumbo y otras dos estaban en la cordillera occidental, entonces cuando se da el proceso de dejación de armas se ubican ahí en la Elvira”. (Excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas de las FARC-EP, comunicación personal, entrevistado N° 4, 09 de septiembre de 2020).

Respecto a la desmovilización de los diferentes frentes de las FARC-EP que operaban en Buenaventura, según información dada por los medios de comunicación, uno de ellos, el periódico El País (04 de febrero 2017), reportó como los bonaverenses veían con buenos ojos la implementación del proceso de paz con las FARC-EP. Si bien es cierto en los últimos años en la zona urbana no sintieron la presión de este grupo armado, confiaban en que la situación para las comunidades rurales en términos de su seguridad y disminución de las consecuencias humanitarias mejorarían; así lo confirma la llegada de los combatientes del Frente 30 "Rafael Aguilera", recibido por la comunidad agitando banderas blancas.

Por su parte, los guerrilleros de los frentes, aunque hicieron varias menciones y expresiones de desconfianza hacia el proceso de paz, siguieron demostrando interés por dar cumplimiento a lo acordado.

Al respecto, un excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC EP entrevistado declaró.

“Yo si me siento revolucionario, mis sueños de construir un país mejor todavía existen, la diferencia es que en estos momentos de construir ese sueño de país ya no es por la vía armada, ya tiene otra dimensión y es digamos como lo hemos planteado en los acuerdos esa paz. Ahora estoy comprometido con este proceso, pero mis sueños de construir un país diferente continúan vigentes, esos para nada se han perdido, el inconveniente es la forma de llegar a ese objetivo que ya no es por la vía armada, aspiro a que dejen de tentarnos a volver a eso, porque es lo que está pasando, si no nos mataban en la guerra, nos matan ahora de una forma tan miserable como lo están haciendo digamos a nivel nacional y claro eso talla, eso duele.

(Excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC EP, comunicación personal, entrevistado N° 4, 09 de septiembre de 2020).

Sin embargo, una vez los excombatientes llegan a la ZVTN de la Elvira, se enfrentan a una realidad que no va con lo acordado, esto lo expresan los ex comandantes entrevistados, cuando mencionan que no encontraron las condiciones óptimas para su permanencia, toda vez que había deficiencia en la infraestructura y el acceso a los servicios básicos como energía y acueducto. Esta es una de las primeras razones para que varios de los hombres quisieran regresar a sus zonas de origen. A lo anterior se suma que varios de sus integrantes fueron asesinados, 17 en total, de estos hechos se desconoce los responsables.

El excomandante del frente 60 de las FARC-EP declaró: “500 hombres aproximadamente salimos de la zona rural del Pacífico donde estábamos integrantes de los Frentes 30, 60, 29 y de la Columna Arturo Ruiz, todos salimos a la zona veredal de Buenos Aires Cauca. El problema allí es que no encontramos las cosas como lo previsto, el lugar no cumplía las condiciones necesarias para alojarnos, nos tocó improvisar espacios para dormir. Además, en este lugar nos enfrentamos a otro problema y es que no estaban las

condiciones de seguridad, pues asesinaron a varios de nuestros compañeros, 17 en total. Esto hace que algunos decidieron regresar a sus regiones porque querían estar con sus familias, empezando una nueva vida, pero estando allá se encontraron con los nuevos grupos que los amenazaron a ellos y a sus familias”. (Excomandante del Frente 60 de las FARC-EP, comunicación personal, entrevistado N° 5, 05 de octubre de 2020).

La ONU en su cuarto informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V) febrero 2017, confirma lo anteriormente cuando hace referencia a las necesidades o incumplimientos en las ZVTN, en el tema de aprovisionamientos y kit de higiene, agua potable entre otros, haciendo mención a que:

“Se presenció una intensificación de los esfuerzos del Gobierno para la adecuación de las ZVTN y PTN y hubo avances importantes. Sin embargo, en algunos casos debido a dificultades de acceso no se pudo cumplir con la provisión de servicios básicos de agua potable y sanidad lo que impidió el ingreso de los integrantes de las FARC-EP a la Zona. La adecuación completa de las ZVTN y PTN, así como de los campamentos de las FARC-EP es crítica para que se puedan continuar con las actividades operativas previstas en el protocolo de cese al fuego y de las hostilidades y la dejación de armas” (p.12).

Según el informe de INDEPAZ (2020), tan solo en el departamento del Cauca, en el periodo de 2016 a 2020, fueron asesinados 37 excombatientes y 226 líderes sociales. Y en particular en la zona veredal La Elvira, 17 excombatientes al primer semestre del año 2020 habrían sido asesinados, según uno de los entrevistados.

Otra tensión presentada entre la comunidad de acogida de Buenos Aires y las estructuras de las FARC presentes, para Bermúdez, et al (2018) está relacionada con la posible incidencia de las FARC en las decisiones políticas y organizativas, afectando

así la autonomía, dado que las FARC-EP tendrían sus curules y empezarían a hacer campaña en su territorio, mientras que las comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes de esta zona del Cauca no cuentan con las garantías para el ejercicio político.

El punto cuarto (4) del acuerdo de paz, relacionado con la solución de las drogas ilícitas, generó una nueva tensión entre la comunidad de Buenos Aires y las FARC-EP, toda vez que los nuevos grupos armados se oponen, amenazando y asesinando a líderes que trabajan activamente en el tema. Además, para Bermúdez, et al (2018) “el tratamiento diferenciado y selectivo que el gobierno ha establecido para los cultivadores de coca y sus formas organizativas, generó tensiones entre aquellos que se clasifican como pequeños productores y otras extensiones establecidos por la institucionalidad” (p. 42), trayendo como efecto el aumento de los cultivos ilícitos, es de precisar que esta actividad sigue siendo una fuente importante de los ingresos de la región.

También decisiones de carácter individual de algunos excombatientes que optaron por abandonar el proceso de paz, y retomar la ruta individual con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), dejando definitivamente a las FARC-EP, empezando una nueva vida de manera independiente, sin que obligatoriamente se hayan unido a las disidencias u otras estructuras criminales, han influido para que integrantes de las FARC-EP hayan tomado la decisión de retornar a sus territorios antes de terminar el proceso, enfrentándose en estos lugares a otro tipo de riesgos para ellos y sus familias.

Al respecto un excomandante del frente 60 de las FARC-EP entrevistado declaró:

“Una buena parte de los excombatientes eran de la misma región y regresaron allá porque querían estar con sus familias, empezando una nueva vida, pero estando allá se encontraron con los nuevos grupos que los amenazaron a ellos y a sus familias, Así

que les quedaban dos opciones o salir desplazados de la zona, o hacer parte de los grupos armados y así es muy jodido”. (Excomandante del frente 60, comunicación personal, entrevistado N° 5, 05 de octubre de 2020).

Algunos de los miembros de las FARC-EP, o simpatizantes que cumplían la función de milicianos dentro de las comunidades de Buenaventura tomaron la decisión de no acogerse al proceso de paz, se desconoce el número exacto y bajo qué condiciones, lo que se sabe es que comenzaron a ser parte de los nuevos grupos o integrarse a los ya existentes, tanto en lo rural y en el área urbana.

En este sentido, un Funcionario de la Defensoría del Pueblo entrevistado declaró:

“En la región del Naya, desde la desmovilización de las FARC, se han presentado varios grupos que se dicen son disidencias de las FARC, conformados por milicianos que no se acogieron al proceso de paz, que se quedaron en sus comunidades a la espera de ver qué pasaba con el proceso, también conformada por guerrilleros que no creyeron y prefirieron mantenerse ocultos y por último los excombatientes que poco a poco han regresado, al no encontrar lo que esperaban, inicialmente volvieron parecer con el nombre del Frente 30, posteriormente se conformó un nuevo grupo denominado Fuerzas Unidas del Pacífico y ahora la Jaime Martínez, que después de varias confrontaciones y diálogos logró unirlos a todos bajo su mando.

De acuerdo con las versiones de la comunidad siguen haciendo presencias combatientes que hacían parte de las antiguas FARC-EP, pero también hay una incursión de personas totalmente desconocidos para ellos, lo que les genera zozobra”. (funcionario de la Defensoría del Pueblo, comunicación personal, entrevistado N° 2, 05 de marzo de 2020).

Dejación armas:

Según Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia (18.08.2016) “para el día 180 de entrada en vigor el proceso del acuerdo final para la paz, el proceso de desarme se realizó en cinco (5) etapas, consistió en recibir armas individuales y colectivas, granadas y municiones de las FARC-EP y almacenarlas en contenedores bajo observación permanente de las Naciones Unidas.

Esta tarea fue llevada a cabo por los observadores de las Naciones Unidas en la ZVTN La Elvira el 17 de junio del 2020. Finalmente, la quinta tarea consistió en el transporte de las armas fuera de las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización tras la destrucción de las municiones y la disposición final del armamento (p.4).

Al final del proceso las armas y las municiones fueron fundidas para ser convertidas en tres monumentos, que se colocarán en Colombia, Cuba y Nueva York, como símbolo del adiós a la guerra en Colombia.

Para las FARC-EP el momento de entregar las armas, era crucial en el proceso, pues se trataba de un proceso de dejación de armas, no de desarme, pues esto último era asumir que las FARC se rindieron y fueron vencidos. En consecuencia, no permitieron los registros fotográficos del momento de la entrega de aproximadamente 7000 armas individuales en todas las zonas veredales y puntos transitorios.

El excomandante del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC EP, declaró: “lo que nosotros hicimos fue una dejación de armas y no desarme, porque el desarme en rango militar, quien se desarma es la persona que la han vencido, o entrega de las armas es cuando a uno lo han vencido, en el caso de nosotros siempre hemos dicho que no, o sea hubo un acuerdo, unos diálogos en una mesa,

porque no hubo vencedores ni vencidos, esa foto que hicieron algunos de nosotros pensar al entregarle las armas al estado Colombiano nunca se dio, por eso ubicamos un tercero, digamos de confianza al que le entregamos las armas, entonces ahí es donde juega un papel la segunda misión de Naciones Humanas, que ellos ya hacen el papel de recepción de esas armas, de clasificarlas de embalarlas meterlas en un container y llevarlas a un sitio donde hicieron lo que hicieron con ellas, posterior a la firma del acuerdo, entonces hay miramos una diferencia muy grande entre la dejación de armas y el desarme, eso es una vaina conceptual pero que en términos políticos-militares tienen mucha connotación”. (Ex comandante del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC EP, comunicación personal, entrevista N° 4, 09 de septiembre de 2020).

Según Verdad Abierta (2017), las FARC-EP mantuvieron decididamente su postura de no ser fotografiadas en el evento de la dejación de las armas, para evitar ser registrado como un acto de rendición. La Misión de la ONU durante el evento en ZVTN La Elvira, municipio de Buenos Aires Cauca, publicó un video de los diferentes momentos de la dejación de armas que terminaron en guardarlos en contenedor y la respectiva firma de las actas de entrega por parte de las FARC-EP.

Al respecto uno de los comandantes de las FARC entrevistado plantea.

“Cuando salimos le entregamos a las entidades encargadas las coordenadas dónde quedaron las caletas con armas. Pero muchas de ellas no fueron a buscarlas, entonces los muchachos que no se acogieron al proceso de paz, y otros grupos que estaban presentes en la zona fueron a buscarlas, y son las que están utilizando ahora los nuevos grupos. Los muchachos cogen su arma, ofrecen el servicio a los narcos y como ya tienen la formación militar y con el valor agregado de tener el arma, pues los contratan con facilidad”. (Ex comandante del frente 60 de las FARC, comunicación personal, entrevista N° 5, 05 de octubre de 2020).

Una situación que ejemplariza lo antes expresado para la región de Buenaventura, es la desaparición y el posterior asesinato de cuatro personas de la región del Naya, zona rural de Buenaventura, pues en un video que fue puesto en las redes sociales un grupo de disidentes de las FARC-EP, autodenominado Fuerzas Unidas del Pacífico (en adelante FUP), se atribuye el asesinato bajo el argumento que estos hombres habían tomado armas dejadas por las FARC-EP para organizar un nuevo grupo.

Reincorporación:

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en adelante (ARN), “La Reincorporación es un proceso de estabilización socioeconómica de los excombatientes que entregaron sus armas, en el marco de la firma del Acuerdo Final entre el Estado y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Durante este proceso, la ARN plantea que el objetivo del Gobierno es que las FARC- EP, alcancen todo su potencial, fortaleciendo su convivencia, la reconciliación y sus actividades productivas, esto transversalizado con reforzar y promover el tejido social en los territorios. Acciones que se desarrollan en permanente concertación con las partes implicadas, las FARC-EP, el Gobierno y las comunidades.

Según lo planteado en el documento del acuerdo final para el conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el inciso 3.2 (pp. 68-76). La garantía del proceso de reincorporación quedó acordado el tránsito de las FARC-EP hacia la conformación de un partido político, así como la reincorporación individual y colectiva, económica y social, a través de la creación de Economías Sociales del Común (ECOMÚN) y de los recursos económicos aportados por la cooperación internacional, el sector privado,

fundaciones y por organismos multilaterales para los proyectos de reincorporación económica. Adicionalmente se creó el Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR) integrado por miembros del gobierno y de las FARC-EP con el objetivo de definir actividades, establecer cronogramas y hacer seguimiento del proceso de reincorporación. Otros puntos acordados en el inciso fueron: La acreditación y Tránsito a la legalidad, la reincorporación para los menores de edad que salieron de los campamentos de las FARC-EP. (S.A, 2016).

Según los entrevistados, si bien se ha avanzado en temas como la participación política, la creación de los programas de reincorporación económica y social, la transformación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) en los Espacios de Transitorios de Capacitación y Reincorporación (ETCR), respecto de la política de paz con legalidad se han formulado los planes de estabilización y reincorporación y se ha formulado la ruta de reincorporación a largo plazo, la aplicación concreta de los mismos tiene un avance menor, toda vez que los trámites para hacerla efectiva se están convirtiendo en un obstáculo en ocasiones infranqueable.

Adicional a las demoras en la implementación de la reincorporación colectiva los exintegrantes de las FARC-EP que ya regresaron o están regresando a sus comunidades de origen (Defensoría del Pueblo 2017), se están enfrentando a nuevos problemas como lo expresa Vanegas, Pardo & Cajiao (2019, p.23), la presión y reclutamiento forzado de los nuevos grupos armados para unirse a sus familias, para el caso de Buenaventura estarían por una lado disidencias denominadas Jaime Martínez y la Segunda Marquetalia, y aunque con mínima presencia los carteles mexicanos con fines de narcotraficantes, las BAO que operan en el caso urbano (La Empresa, los Chotas y los Espartanos) y el ELN.

También se enfrentan a la estigmatización, la falta de oportunidades económicas y el incremento de economías ilegales, todo lo anterior facilitado por la ausencia estatal en regiones apartadas de lo rural como la región del Naya, Yurumanguí, Raposo, Mayorquin entre otras, en ocasiones con la sola presencia de fuerza pública, pero sin programas sociales que la acompañen.

Al respecto los entrevistados argumentan:

El excomandante del Frente 60 de las FARC declaró: “Los avances han sido mínimos, yo que soy uno de los más optimistas creo que hemos avanzado en un 20%, otros de mis compañeros creen que sólo hasta un 5%.

Respecto al punto uno de la reforma agraria no hemos aún logrado nada, para el tema de sustitución de cultivos ilícitos, antes hay más áreas sembradas e incremento de economías ilegales, y la región del Pacífico no es la excepción por lo contrario muchos más cultivos ilícitos se están dando, se había acordado una erradicación manual progresiva con apoyo a los agricultores, pero no se ha logrado.

Respecto a la seguridad jurídica, si se está avanzando con la JEP, en lo relacionado con la participación política representada en pocas curules; nosotros buscamos que los campesinos tuvieran una mejor representación en los diferentes espacios, pero esto no se ha logrado.

Con relación a lo económico si bien, nos han cumplido con los giros, no con los proyectos productivos colectivos, son tantos los requisitos para acceder a ellos que no se logran cumplir. Para el Pacífico se tenía proyectado la constitución de tres cooperativas, ninguna de ellas ha podido avanzar, y para completar las relaciones con los funcionarios de la ARN no han sido las mejores, ellos estaban acostumbrados a trabajar con los desertores, Ahora es otro proceso y por lo tanto se necesita una forma diferente de trabajo”. (Ex-comandante del Frente 60 de las FARC-EP, comunicación personal, entrevistado N° 5, 05 de octubre 2020).

Respecto a los programas de reincorporación económica y social para la zona del pacífico, según los entrevistados se tenía previsto la conformación de tres cooperativas, una ubicada en Guapi y otra en Timbiquí, y una tercera en el área rural de Buenaventura en la región de Mayorquin que está empezado a funcionar de manera muy incipiente. Razones para que los exintegrantes de las FARC-EP que ya retornaron a sus lugares de origen, deban de buscar otros medios de sostenimiento económico seguido de la poca o nula experiencia en el ámbito laboral, que los limita a incorporarse a la vida laboral, para el caso de Buenaventura las opciones laborales son las que generan las empresas portuarias.

El ex comandante del Frente 60 de las FARC, declaró: “todo lo anterior está haciendo que nuestros hombres se vean tentados a buscar otros caminos, y más con las jugosas propuestas económicas que nos hacen otros grupos armados. Tenemos conocimiento que narcotraficantes están ofreciendo empleo a excombatientes con salarios de \$2.000.000 a guerrilleros rasos y 10.000.000 de pesos a comandantes. Imagínense y el estado no da como \$700.000, eso daña la cabeza”. (Ex-comandante del Frente 60 de las FARC-EP, comunicación personal, entrevistado N° 5, 05 de octubre 2020).

También, se ven afectados por la estigmatización y amenazas al presentarse como reincorporados, empezando por la fuerza pública y seguido por la imagen proyectada por los medios de comunicación que tienen contundente incidencia en el imaginario del ciudadano, con consecuencias de amenazas, desapariciones y homicidios de excombatientes.

Al respecto, un excomandante del Frente 60 de las FARC entrevistado declaró:

“Hemos tenido hostigamientos muy fuertes, ya llevamos casi 230 asesinados a nivel nacional, en el Valle del Cauca han asesinado 14 de esa lista, algunos hemos recibido amenazas en panfletos, algunos tienen esquema de seguridad otros no, entonces es una

situación bastante preocupante, y ese tema de la estigmatización que lo siente uno hasta con fuerza pública, y a pesar de haber hecho algunas pedagogías, todavía siente uno que prenden las alarmas cuando se identifica uno como reincorporado, como firmante del acuerdo, sobre todo con algunos que tuvimos una historia de guerra en la región.

Pero también cuando hay la posibilidad de interlocutor, de charlar, pueden comprobar en caliente de que no es tan cierto lo que les vendía caracol y RCN pues algunos imaginarios cambian; sin embargo, aún hay miembros de fuerza pública que tienen ese chip pues de subversivo y de enemigo siendo bastante complejo esa situación”. (Excomandante del Frente 60 de las FARC-EP, comunicación personal, entrevistado N° 5, 05 de octubre 2020).

En conclusión, el proceso de DDR ha enfrentado retos y dificultades, en lo referente a la desmovilización se evidencian dos problemas: no todos los combatientes y milicianos quisieron acogerse al proceso de paz, y las ZVNT no estaban en condiciones adecuadas para vivir, en infraestructura y abastecimiento básico.

En cuanto a la reincorporación de los excombatientes en Buenaventura, actualmente se presentan los mayores retos, la inestabilidad territorial de los excombatientes, el que se hayan dispersado por diferentes lugares del pacífico colombiano y otras regiones del país, dificultades para la implementación de los tres proyectos productivos comunitarios definidos para esta región y para obtener un trabajo formal en las empresas portuarias. El deterioro de la seguridad, sumado a la estigmatización. También al incremento de grupos armados que buscan engrosar sus filas con los excombatientes, quienes ya cuentan con la formación militar, ofreciéndoles sumas de dinero tentadoras llamando la atención de ellos.

CAPÍTULO VI: RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

6.1. ¿Qué pasó en las zonas de Buenaventura dejadas por las FARC-EP?

Tanto las comunidades afectadas por el conflicto armado, donde por décadas hicieron presencia las FARC, como las mismas FARC-EP, esperaban que el Estado volcaría sus recursos en aras de afrontar los desafíos del posconflicto en los territorios, evitando así la continuidad de desigualdad en la ruralidad y el copamiento de nuevas estructuras delincuenciales armadas; tal como quedó negociado en el acuerdo de paz en particular: Reforma Rural Integral (PDET) y la solución al problema de las drogas ilícitas (PNIS).

Si bien, los excombatientes no desconocen algunos avances del Estado en la ruralidad, refirieron que aún falta mucho para cumplir lo acordado, y peor aún los territorios cada día son más copados por grupos armados; la Fundación Pares (2018, p.29) informó, el Pacífico Medio se encuentra en un proceso de reconfiguración de grupos armados ilegales que se disputan el importante corredor de Buenaventura para el narcotráfico. La reconfiguración de los grupos armados organizados en Buenaventura tanto en su zona urbana como rural, muestra una evolución ascendente en cuanto al número de grupos, desde que inicia el proceso de paz hasta el 2020, en la siguiente relación de las tablas N° 2 y 3 se muestra la presencia de los grupos armados en zona urbana y rural de Buenaventura.

Tabla 2 *Presencia de grupos armados en la zona rural- Buenaventura.*

Presencia GA en la zona rural			
Periodo	Grupo armado	Área específica	Observaciones
2012-2014	Frente 30, FARC EP	Yurumanguí, Raposo, Cajambre Naya, Mayorquin, Anchicayá	El Frente 30 de las FARC -EP, tenía presencia asociado al Frente, Manuel Cepeda Vargas y la Arturo Ruiz.
	ELN	San Juan, Calima	Frente Che Guevara
	AGC	San Juan, Calima	GA también denominado Clan del Golfo.
2015-2017	Renacientes	Naya, Yurumanguí	Los grupos pos- FARC, en su primer momento se hicieron llamar Renacientes Pasan posteriormente a llamarse Defensores del pacífico.
	Defensores del Pacífico/	Naya, Yurumanguí	Estos se suman en el 2018 a las denominadas Fuerzas Unidas del Pacífico - (FUP).

	Fuerzas Unidas del Pacifico (FUP)	Naya, Yurumanguí	Posteriormente se unen a la -Columna Jaime Martínez, también de los grupos disidentes.
	ELN	San Juan, Calima, Naya, Yurumanguí	Hacen sus primeros arribos a la región del Naya y Yurumanguí, parte alta.
	AGC	San Juan, Calima	
	FUP	Naya, Yurumanguí	El FUP en el 2019 es absorbido por la Jaime Martínez
	Jaime Martínez	Yurumanguí, Raposo, Cajambre Naya, Mayorquin, Anchicayá	
2018-2020	Segunda Marquetalia		La Segunda Marquetalia está intentando entrar por el Cauca hacia la parte alta de la región del Naya, Valle y Cauca. Buscan alianzas con el ELN
	ELN	Naya, Yurumanguí, Cajambre, Mayorquin, Anchicayá	Intentan copar todas las zonas dejadas por el frente 30 de las FARC.

Nota. Información tomada CNMH (2015). PARES (2019). IETI (2019). Elaboración propia 2021.

En la zona rural la presencia de grupos armados es de la siguiente manera:

El ELN se concentraba hacia el año 2012 en la región del Calima y San Juan, zona compartida sin alianzas con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo como también se conoce. En el año 2015 el ELN hace incursiones en zonas de Naya y Yurumanguí, antiguas zonas de presencia FARC- EP, pero en el año 2018 logran avanzar y consolidarse también en el Raposo, Naya y Cajambre, a pesar de las confrontaciones armadas sostenidas con los grupos post FARC como la Jaime Martínez. Demostrando su real interés de copar todas las zonas dejadas por las FARC, bajo intereses de control de las rutas del narcotráfico.

Dentro de los grupos post FARC-EP según informe de PARES (2018), en Buenaventura un primer grupo autodenominado “*Los Renacientes*”, por considerarse como una nueva etapa de las FARC, posteriormente se hicieron llamar “*Frente Unido del Pacífico*”, pero también se conocieron como “*Defensores del Pacífico*”, e hicieron presencia en la zona comprendida entre los ríos Micay, Naya y Yurumanguí. Actualmente no existen como tal, pues fueron absorbidos por un nuevo grupo de disidentes denominados Columna Jaime Martínez.

La “Columna Jaime Martínez”, de acuerdo con los entrevistados, procede del departamento del Cauca, conformada por exintegrantes de los frentes 6to, de la columna móvil Jacobo Arenas y del frente 60, y según el informe de pares (2018) “estaría subordinado a las órdenes de la disidencia del Guaviare al mando de Gentil Duarte”. Su accionar estaría circunscrito en los municipios del Cauca y del valle.

En la alerta temprana de la AT N° 033-19 de la Defensoría del Pueblo, la Columna móvil Jaime Martínez⁹ hace una alianza con otras columnas de las disidencias de las FARC-EP, como la Columna móvil Dagoberto Ramos y la Carlos Patiño, conformando el comando coordinadora de occidente de las FARC-EP, estos buscan entre otras cosas desalojar al ELN del territorio, (Cauca, Valle, Nariño) logrando debilitar al ELN, Frente José María Becerra, que además están siendo hostigados por el ejército, lo que ha incidido en que muchos de los integrantes del ELN se entreguen a la fuerza pública (zona del Tambo).

Adicionalmente, los entrevistados refirieron que la Columna Jaime Martínez está intentando establecerse en el área urbana, a través de alianzas con “La Local” de los barrios Antonio Nariño, Colón y Lleras, alianzas que han dividido internamente a “La Local”, provocando incremento en las confrontaciones armadas. Adicionalmente, la Policía en sus informes del 2020, reporta el incremento de homicidios, 111 para el 2019 y 130 para el 2020.

También para el año 2020, de acuerdo con la alerta temprana N° 019.20

“Existe el temor entre los pobladores que a la región ingresó un nuevo grupo de disidentes denominado la Segunda Marquetalia, “compuesto por personas de la extinta estructura Jacobo Arenas de las FARC-EP y otros más del EPL, grupo que podría estar ligado a alias “Walter” excombatiente de las FARC-EP, quien inició proceso de reincorporación e hizo parte del ETCR “Carlos

⁹ La Columna Móvil Jaime Martínez se hace visible como subestructura de la facción disidente en mención, iniciando el año 2017, fortaleciéndose a partir de ese año. Esta estructura hace parte de las tres columnas móviles en disidencia que tienen presencia en el departamento del Cauca: “Dagoberto Ramos”, que viene ejerciendo control sobre la cordillera central en los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Toribio, Jámbalo y ocasionalmente en Santander de Quilichao, “Jaime Martínez” con mayor presencia en Suarez, Buenos Aires y López de Micay, así como también en Santander de Quilichao, y la “Carlos Patiño” hacia el sur.

Patiño” y que actualmente se ha rearmado, y del que se presume estaría recomponiendo estructuras de las extintas “FARC-EP” junto con alias ‘Iván Márquez’, entre otros, por reincidentes del proceso de paz” (p. 10).

De acuerdo con fuentes consultadas, en el año 2020 la segunda Marquetalia se estaría enfrentando con la Jaime Martínez en el alto Naya, límite de Buenaventura y el municipio de Buenos Aires en el departamento del Cauca, por el control del territorio.

Tabla 3 *Presencia de grupos armados en la zona Urbana de Buenaventura*

Periodo	Presencia GA en la zona Urbana		Observaciones
	Urbano	Área específica	
2012-2014	La Empresa/Gente del orden	Ostentaban el control de la mayor parte de la ciudad, en particular comunas 10 y 12. La Gente del Orden comparte el territorio con La Empresa.	Su centro de operaciones la comuna 10 en particular los barrios Bello Horizonte y El Progreso a donde todos los demás tenían que rendir cuentas, su accionar.
	Gente del Orden	Se ubica en las mismas zonas de La Empresa.	La Gente del Orden proviene de la Costa pacífica nariñense y trabaja en alianza con La Empresa
	La Local	Comunas	La Local, que se constituyó a partir de una fracción del Clan del Golfo;

2015-2017	La Empresa/ Gente del Orden	La presencia se redujo a algunos barrios de la comuna 10 y 12.	Perdió territorio a manos de la BAO La Local y células urbanas del ELN.
	La Local	Comunas 1-9 10 -12 algunos barrios. 11 control total	Ostentaba el 90% del control del territorio urbano de Buenaventura
	ELN	Tiene incidencia en el contexto urbano de Buenaventura, especialmente, en la comuna 10 y y la 12, en algunos barrios.	Pequeñas células, que buscan ir ganando territorio
2018-2020	La Empresa/ Gente del Orden.	Parte comunas 10 y 12.	Su accionar cada vez más disminuido. y si bien se han mantenido al margen de las confrontaciones de La Local, Estarían más cercanos a los ahora denominados Espartanos
	Chotas Espartanos	Juan XXIII, El Jorge, San Francisco, Eucarístico, La Independencia.	Resultan de una división interna de los jefes de La Local.
	ELN	Corregimiento 8, zona periurbana	Sin mayores indicios de su presencia en el área urbana.

Nota. Información tomada CNMH (2015). PARES (2019). IETI (2019). Elaboración propia 2021.

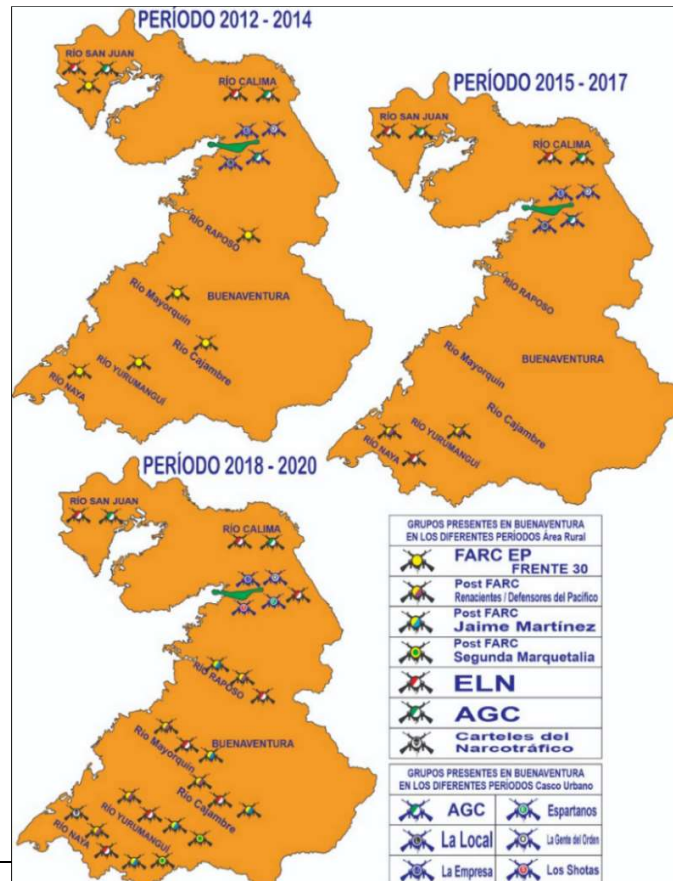
En lo que respecta a la presencia de grupos armados en la zona urbana según la fundación PARES (2019), y en línea con lo expresado por parte de los entrevistados hicieron hincapié en que continúan haciendo presencia grupos disidentes de las AUC como el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), quienes ocupan el mismo lugar a través de alianzas con “La Local”. Aquí es de precisar que, a finales del año 2020, este grupo se dividió en dos denominados los Chotas y los Espartanos. También hace presencia la banda armada denominada “La Empresa” y de la mano con otra banda armada La Gente del Orden, provenientes de la costa pacífica nariñense.

Si bien, aunque estos grupos, según los entrevistados no han logrado tener mayor presencia en lo rural, han intentado tener el control de las rutas del narcotráfico, dejadas por las FARC-EP, enfrentándose en el proceso a otros grupos de narcotraficantes y la disidencia de las FARC. Esto, sumado a no tener la capacidad operativa y militar suficiente, ha traído como consecuencia la pérdida de cargamentos de droga, asesinatos selectivos y desaparición forzada y hacia la población civil amenazas, múltiples desplazamientos y reclutamiento, uso de menores y jóvenes. Adicionalmente, según la Defensoría del Pueblo a través del informe de riesgo del 7 de noviembre del año 2017, estarían en pugna por el control del territorio en el área urbana el ELN¹⁰ y la disidencia de las FARC “Jaime Martínez” y otro actor asociado son los carteles del narcotráfico mexicano, estos últimos estarían también intentando ingresar en lo rural, La red Comunidades Construyendo Paz en Colombia, CONPAZ (2020), en su página web, advierte sobre posible masacre en la

¹⁰ Informe de Riesgo, 7 noviembre de 2017- Defensoría del Pueblo: Los grupos armados ilegales que amenazan a la comunidad son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –hasta antes del acuerdo con el gobierno nacional y otro identificado como ‘la Gente del Orden’, que haría presencia en barrios de la zona urbana. Algunos delitos ocurridos presuntamente estarían las amenazas, los homicidios selectivos, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes, contra la integridad sexual, desplazamientos forzados individuales y masivos y las extorsiones”.

región del Naya por presuntos integrantes de los carteles mexicanos¹¹, al respecto las autoridades distritales tomaron medidas preventivas, para evitar lo sucedido en la misma región en el 2001 con la masacre del Naya.

Figura 6: Mapa de Actores Armados en Buenaventura 2012-2020



¹¹ Desde nuestros territorios hacemos el llamado al gobierno nacional para que tome medidas URGENTES que conlleven a garantizar la protección de la vida e integridad de la población de las 73 comunidades que conforman el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del río Naya, desde la red social de Twitter afirma: “¡ATENCIÓN! Según una fuente podría haber una masacre en Naya, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Llegarán sicarios mexicanos por tomarse esa ruta de la droga. ¡Por favor, medidas de prevención para esta zona del país!”. (Richard Maok @hackerFiscalia, s.f.).

Nota. Fuente propia. Morales, Calderón. (2021). Mapa de Actores Armados en Buenaventura, Valle del Cauca 2012-2020.

6.2. Implicaciones para la población por la presencia de los grupos armados

Según la base de datos de Registro Nacional de Información -RNI, durante el periodo 1959- hasta diciembre del 2020, en Buenaventura se han presentado, 297.393 víctimas directas e indirectas (familiares de las víctimas), siendo el desplazamiento forzado el que más víctimas tiene con 285.029, las amenazas con 16,012 ocupan el segundo lugar, seguidas en un tercer lugar por los homicidios con 12,688, en un cuarto lugar se ubica la pérdida de muebles e inmuebles con 3.234. Otros hechos victimizantes que impactan negativamente a los habitantes de Buenaventura son la desaparición forzada con, 2.226 víctimas, y la violencia sexual con 794. (Como se observa en la tabla N° 4).

Tabla 4 *Víctimas del conflicto armado en Buenaventura entre 1959 -2020*

Hecho victimizante	Víctimas Ocurrencia	Víctimas Declaración
Acto terrorista / Atentados / Combates / Enfrentamientos / Hostigamientos	1 245	559
Amenaza	16 012	3 774
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado	794	329
Desaparición forzada	2226	686
Desplazamiento forzado	285029	222270
Homicidio	12688	3828
Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto Explosivo improvisado	32	8
Secuestro	232	17
Tortura	78	9
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas con grupos armados	53	33

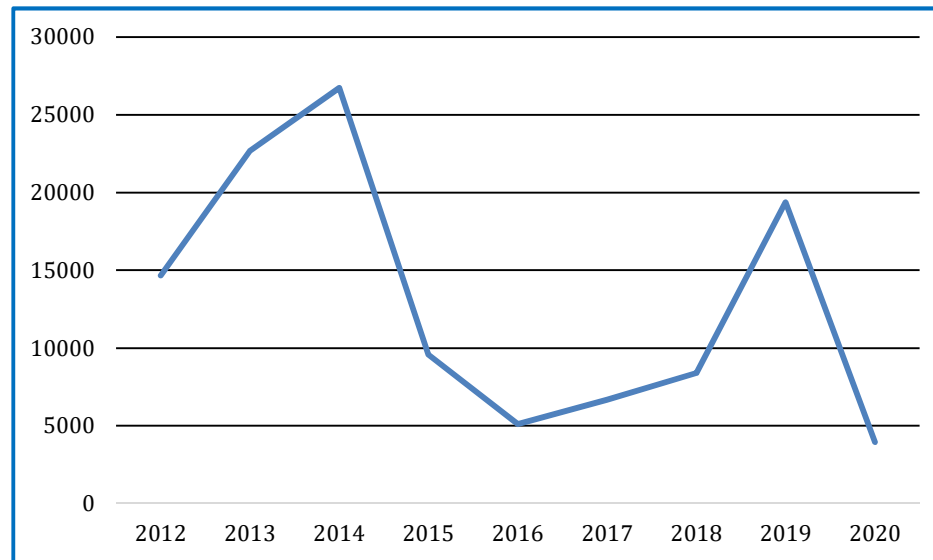
Abandono o Despojo Forzado de Tierras	0	0
Pérdida de Bienes Muebles o Inmuebles	3 234	1 598
Lesiones Personales Físicas	186	60
Lesiones Personales Psicológicas	120	1
Confinamiento	1 151	1 151
Sin información	2	0

Nota. Datos tomados de las bases cifradas de RNI (2020). Elaboración propia.

De este universo de víctimas según el RNI, en el periodo comprendido en el año 2012 con corte al 2019 en el distrito de Buenaventura se presentaron 98.324 víctimas, representando el 33% del total histórico de víctimas.

A continuación, se relaciona estadísticamente las víctimas reportadas para los años en mención.

Figura 7: *Victimas Buenaventura 2012- 2020*



Nota. La figura muestra las cifras de víctimas en los años 2012-2019. Fuente RNI (2019). Elaboración propia.

De acuerdo con la figura 8, en este periodo 2012-2020 se dan 112.403 casos de hechos victimizantes en Buenaventura. Se pueden observar tres tendencias, la primera entre el año 2012- 2014 los hechos victimizantes continúan siendo altos con 64.070, comparado con los tres años anteriores.¹² La segunda tendencia está entre los años 2015 y 2017 según el RNI se registraron 21.373 hechos victimizantes, disminuyendo en un 33 %, y la tercera tendencia se da a partir del año 2017 al 2020, con 26.960 casos.

¹² Según las cifras en el RNI entre el 2009 y 2011 hubo 31.238 víctimas del conflicto armado en Buenaventura.

En la primera tendencia (2012-2014), el repunte de víctimas en Buenaventura estaría más asociado a disputas entre los grupos armados en el área urbana, que con el proceso de paz propiamente dicho, según el informe del Instituto de Estudios Interculturales (IEI- 2019), dicho incremento se relaciona con el fortalecimiento del Clan del Golfo, que aumentó con fuerza en la ciudad, durante la disputa entre “La Empresa” y el Clan del Golfo “se generalizaron casos de desmembramientos y torturas, delitos sexuales, reclutamiento, restricciones de circulación, extorsiones, desapariciones forzadas y asesinatos, especialmente en las comunas estratégicas de la ciudad”. (p.109).

El IEI (2019), citando a la CNMH (2015), hace énfasis en un periodo particular (octubre 2012) donde: “Se registraron una cuarta parte de los homicidios totales del año en la ciudad, se produjeron desplazamientos intraurbanos que alcanzaron la magnitud de 5.495 personas huyendo de sus hogares y emergieron con mayor frecuencia los casos de víctimas desaparecidas que fueron encontradas posteriormente con mutilaciones y señales de tortura en los esteros” (p.109).

En la segunda tendencia (2015- 2017), se da una disminución en el registro de hechos victimizantes, dicho descenso es multifactorial, en lo rural está directamente asociado a la fase de desmovilización de las FARC-EP, cuando sus integrantes salen a la zona veredal de Buenos Aires. Por otra parte, como lo plantea la Fundación Ideas para la Paz (2019). El Gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN firman en Caracas, el Acuerdo de Diálogos para la Paz y hacen pública la agenda, también en ese año el ELN se comprometió a respetar la fase de desmovilización de las FARC-EP y las zonas a donde estas se estaban concentrando.

En el contexto urbano la disminución de la violencia se debe a otros factores, independientes al proceso de paz. Es de recordar que las FARC-EP no estaban teniendo presencia activa en el área urbana, pero sí sostenían alianzas estratégicas con las bandas armadas en relación con las economías ilegales, como lo expone la IEI (2019), “en respuesta a estas tasas de violencia difundida en la ciudad y a la manifestación de los ciudadanos, el Gobierno decidió establecer un plan de intervención especial para Buenaventura, lo que podría explicar el aparente descenso en el registro de hechos victimizantes desde 2014. Sin embargo, también podría ser debido a la victoria del Clan del Golfo en su guerra urbana contra La Empresa”. (p.109).

Adicionalmente en el año 2015, los miembros de las bandas armadas “La Empresa y La Local” con el auspicio de la alcaldía y la Defensoría del Pueblo, tomaron la decisión de quitar las fronteras invisibles, dado el alto número de víctimas civiles y miembros de las bandas armadas, reflejado tanto en homicidios como en desaparición y desplazamiento forzado. En la búsqueda de una solución pusieron un miembro de la comunidad apodado alias chivas para que hiciera las veces de mediador y conciliador, lo que resultó positivo en la disminución de hechos victimizantes.

El líder comunitario de la comuna 11, declaró: “En el 2015 un señor de la comuna 12, que le decían Chivas apoyo en ese proceso, eso era como una tregua y al final hacen un pacto de NO volverse a matar entre ellos porque Víctor Patiño ya dejó de pagarles, y él ya se fue, entonces los Urabeños que hoy se llaman La Local, no tuvieron quien los financiara”. (Líder comunitario de la comuna 11, comunicación personal, entrevistado N° 1, 11 de diciembre de 2019).

En la tercera tendencia se da entre el año 2017- 2020, se vuelve a presentar un repunte esta vez asociado a la pugna por el control del territorio dejado por las FARC-EP, y a una nueva reconfiguración de los grupos armados, con intereses asociados al control de las rutas del tráfico de armas, droga y al manejo de la minería ilegal¹³ entre otras.

La Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas-SAT, menciona a la opinión pública lo que estaba pasando en Buenaventura. Muestra de ello emitió varios informes de riesgo, uno de ellos fue en noviembre del 2017 en donde alertó sobre el riesgo de por lo menos 778 familias de los consejos comunitarios de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, además del aumento del riesgo en las comunas 12, 4 y 3 de la cabecera municipal de Buenaventura.

Los grupos armados ilegales que amenazan a la comunidad son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); el Ejército de Liberación Nacional (ELN) - hasta antes del acuerdo con el gobierno nacional- y otro identificado como “La Gente del Orden”, que haría presencia en barrios de la zona urbana. En algunos de los delitos ocurridos presuntamente estarían involucradas estas estructuras, como son las amenazas, los homicidios selectivos, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes, contra la integridad sexual, desplazamientos forzados individuales y masivos y las extorsiones.

Por su parte, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento- CODHES (2019), reportó la existencia actual de una disputa territorial en la zona urbana de Buenaventura.

¹³ De acuerdo con la fundación PARES en su informe (2018), “*Cómo va la Paz en el Pacífico*” menciona que: aquí se presenta una amalgama entre economía ilegal, tradiciones económicas artesanales de los pobladores y monopolio de grupos armados ilegales. Por otro lado, los grupos armados ilegales presentes en el territorio, especialmente el Clan del Golfo, han generado un monopolio soportado en la violencia de proporciones industriales que ha permitido el ingreso de maquinaria pesada para la explotación minera, causando enormes problemáticas para los mineros artesanales, para el medio ambiente y para quienes se atreven a realizar denuncias acerca de la situación actual.

“En los últimos meses de 2018 y en 2019 han ocurrido varios enfrentamientos en los barrios de la ciudad, en particular en las Comunas 3,4,5,6,7,10,11 y 12. Las afectaciones de esta disputa territorial incluyen las intimidaciones, la violencia sexual, las extorsiones, el control social y comunitario, las amenazas a líderes sociales, el despojo territorial, las desapariciones forzadas, las balaceras, los confinamientos y desplazamientos, los asesinatos y las fronteras invisibles”. (p.9).

Muestra de las amenazas y desplazamientos en enero de 2020, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPAZ), lanza un comunicado en donde se evidencia el riesgo que están corriendo las comunidades del río Raposo y la zona rural de Buenaventura, las comunidades recibieron la información de que el ELN tomaría el control de esta zona y entraría en disputa con la Columna Jaime Martínez de las FARC-EP; ante este pronunciamiento las FARC envió refuerzos a esta zona, causando el desplazamiento de un promedio de 20 personas desde la comunidad de Guadualito hacia Cocalito, este temor es reflejado en las acciones armadas que ya se presentan en el territorio del Pacífico. Advertencias que también ha hecho la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (2020) que denunció la llegada de hombres que se presentaron como “paramilitares” en el muelle de Docordó, así como la vulneración de derechos en Buenaventura, Bajo San Juan y Bajo Calima.

La Defensoría del Pueblo (SAT N ° 007-19), da cuenta del incremento de la violencia cuando advierte sobre el riesgo latente de violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) hacia la población civil, por la presencia y hechos de violencia que se vienen presentando desde el 26 de abril a diciembre del 2018, hechos que son atribuidos a los grupos autodenominados disidencias de las FARC-EP, la banda “La Local, La Empresa” y miembros del ELN (p. 6).

Dicha presencia armada ha generado que se presenten o profundicen amenazas de muertes contra líderes y defensores de derechos humanos, homicidios selectivos, estos últimos aumentaron el 24.7% en relación con los del año 2017, así mismo los eventos de desaparición forzada presentaron un aumento de 50%. A nivel de desplazamiento se presentaron hechos en los barrios El Progreso y Unión de Vivienda por enfrentamientos a raíz de las disputas territoriales. Como resultado de esto se registraron un total de 793 familias, 2.284 personas en desplazamiento masivo intraurbano y 592 familias, 1.799 personas en confinamiento.

En la alerta, también mencionan las incursiones que estarían haciendo el ELN en el casco urbano y grupos de disidencias de las FARC-EP. Esto se ve reflejado en el barrio Unión de Vivienda, el 13 de noviembre del 2018 ingresan 20 hombres armados identificados como miembros de la guerrilla, para los siguientes días empezaron a rotar panfletos alusivos al ELN en donde anunciaban la operación “Ráfaga” y así mismo anunciando la restricción de movimiento a partir de las 8:00 pm en todo el distrito y un listado de nombres con amenazas a supuestos integrantes de las bandas “La Empresa y La Local”.

Adicionalmente la Defensoría en la Alerta Temprana N° 079-18 , refiere que en el proceso de reconfiguración de estructuras armadas ilegales, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP, en el suroccidente del país y particularmente en el puerto de Buenaventura, se originó una disputa entre el autodenominado Frente Fuerzas Unidas del Pacífico-(FUP) y la Columna Móvil Jaime Martínez, con el propósito de lograr el control de la cadena ilícita del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías subterráneas.

En el año 2020 de acuerdo a la figura 8 se observó un descenso importante en los hechos victimizantes, en gran parte obedeció a factores como la pandemia COVID-19, la no atención por parte de las autoridades responsables de la toma de declaraciones y a nivel rural las personas a pesar de los hechos de violencia armada optaron confinarse en sus comunidades que salir por temor al contagio de COVID-19.

Lo sucedido en Buenaventura en estos periodos es un reflejo de lo que acontece a nivel nacional, como bien lo plantea Ávila (2019).

“En relación al posconflicto para el año 2018 la mayoría de los indicadores de seguridad asociados al conflicto armado, venían disminuyendo desde el inicio de las negociaciones de paz con las FARC-EP. Entre el 2012-2018 los homicidios se venían reduciendo, en cerca de 10 puntos porcentuales, el desplazamiento forzado era apenas el 10% de lo que fue este hecho victimizante en las épocas más álgidas de la guerra. La desaparición forzada igualmente había caído, el secuestro estaba a punto de desaparecer”. (p. 503-504).

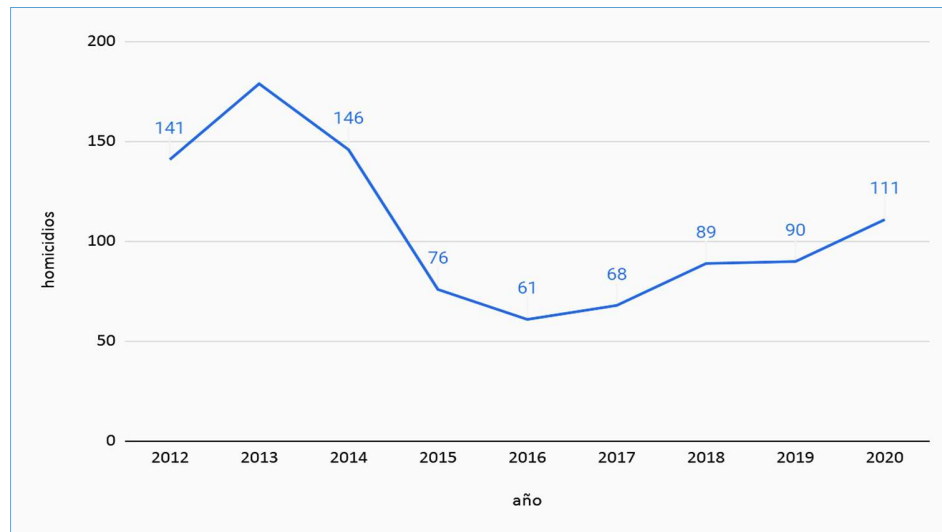
Según la dinámica se observa que, en el año 2018 comparado con el año 2017, se presentó un deterioro de la seguridad en algunas partes del país principalmente en las zonas dejadas por las FARC-EP.

Ávila (2019, p, 510) explica que las 21 estructuras de las FARC-EP compuestas por cerca de 1600 personas, de las cuales al menos 1400 fueron guerrilleros, estarían buscando agruparse en una nueva guerrilla o una nueva alternativa. Es un proceso de bandolerización similar al que se produjo en las décadas del cincuenta y sesenta del siglo XX. De la misma manera, explica la expansión del ELN en los territorios dejados por las FARC-EP, siendo el Pacífico uno de los principales. (p.510-511).

En lo que respecta a Buenaventura los hechos victimizantes según el RNI lo que más víctimas e impacto negativo ha causado a sus habitantes son el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, la desaparición forzada y la violencia sexual, como se explicará a continuación.

Homicidios

Figura 8: Homicidios



Nota. La figura muestra las cifras de homicidios en los años 2012 al 2020 en Buenaventura.

Fuente: Del INML-CF (2021).

Elaboración propia.

Los homicidios en Buenaventura son el tercer hecho victimizante que presenta más alto número de personas afectadas, precedido por el desplazamiento forzado y las amenazas. Según el INML-FC, entre el 2012 y el 2019 se han presentado 847 homicidios.

El incremento fue significativo entre los años 2012 y 2014, con 466 casos, representando un 55% del total de casos de los tres periodos mencionados, varios de los cuales se llevaron a cabo en las denominadas “casas de pique”, inmuebles en donde las personas son desmembradas y descuartizadas para luego arrojar las partes de su cuerpo al mar. Esto se debió entre otras razones a la guerra abierta entre el Clan del Golfo/ “La Local y La Empresa”, donde sus acciones estuvieron marcadas por la imposición de barreras invisibles, afectando a civiles inocentes, razón para que el gobierno decidiera intervenir con mayor presencia de la fuerza pública, obligando también a las partes en conflicto a definir una tregua.

Al respecto uno de los entrevistados hizo mención a lo sucedido a este periodo:

El líder comunitario de la comuna 11 declaró: “En el 2012 sale de una cárcel de Estados Unidos, Víctor Patiño, él era jefe del cartel del Norte del Valle del Cauca, para el tiempo en que fue detenido, sus escoltas eran los hermanos de apellido Comba, estos se apropiaron del negocio y de sus bienes, incluso mataron a parte de su familia.

Víctor Patiño en retaliación a los hermanos Comba y para retomar el control llegó a organizar a todos los muchachos de Buenaventura, para eso utilizó mucho al famoso “Care Palo”, que aparece como dueño de todos los negocios de acá de Buenaventura. Luego le hizo la guerra a “La Empresa” muchos de los jefes de los barrios huyeron a otros países o al interior del país para no quedar en controversia entre el jefe de “La Empresa” alias El Mono, los hermanos Comba y Víctor Patiño. Los que se quedaron en su mayoría se unieron al grupo de Víctor Patiño “La Local”, porque este pago hasta tres veces más pasando de \$700.000 a \$2'100.000 y pagó tres (3) meses adelantado, con el fin de quitarle fuerza a “La Empresa” y después, se fue directamente a cazar a “los hermanos Comba”, de los cuales mató a uno y los otros dos se entregaron”. (Líder Comunitario comuna 11, comunicación personal, entrevistado N° 1, 11 de diciembre de 2019).

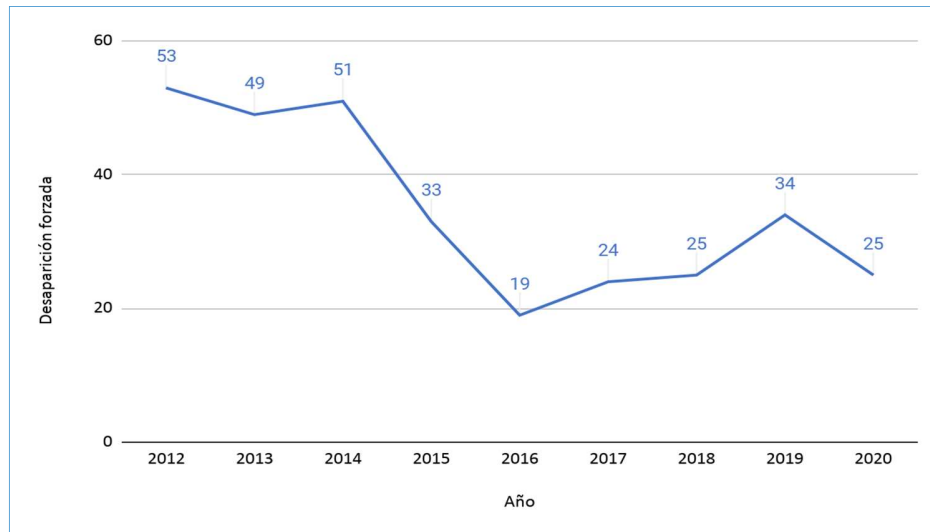
Entre los años 2015 y 2017, las cifras de homicidios descendieron en un 44% (205 casos), en relación con el periodo anterior. Este hecho está relacionado con el fin de la disputa territorial entre las BAO que operan en los barrios a través de un pacto hecho por grupos ilegales y no porque el Estado lograra contener la violencia y brindar la seguridad en el territorio urbano. Esto representado en un incremento de la fuerza pública y en lo rural la disminución de homicidios estaría asociada al proceso de desmovilización de las FARC-EP.

Sin embargo, esta dinámica en los homicidios sufre alteraciones, entre los años 2018-2020 se evidenció un aumento en un 69% (291 casos) en comparación al periodo anterior (2015-2017). Como se ha mencionado durante la investigación, la tendencia al alza obedeció a los nuevos procesos de rearme de grupos disidentes de las FARC-EP, trayendo consigo disputas entre los frentes, la llegada del ELN en los territorios y el posicionamiento de las BAO en el casco urbano de Buenaventura. Al respecto la Fundación Pares, en un informe del 4 julio (2019) hizo referencia a que: “Desde el 2018 la situación de seguridad en el Distrito de Buenaventura tiende a empeorar. Las cifras del último informe de Instituto de medicina Legal -INML y de la Policía Nacional al respecto de la violencia letal respaldan esta tesis, pues si bien para 2018 el número y tasa de homicidios no se equipara a las registradas entre 2008 y 2013, lo cierto es que a partir de 2017 se rompe la tendencia a la disminución”.

Asimismo, en el informe indica que adicional a la disputa de las AGC, la banda ‘La Local’, ‘La Empresa’ y el ELN, se suman las acciones violentas y la disputa por las rentas ilegales, los grupos disidentes de las FARC-EP conformado por exintegrantes del Frente 30 y del antiguo frente urbano Manuel Cepeda Vargas.

6.3.Desaparición forzada

Figura 9: Desaparición Forzada



Nota. La figura muestra las cifras de desaparición forzada en los años 2012 al 2020 en Buenaventura. Fuente: Del INML-CF (2021). Elaboración propia.

Las cifras de desaparición forzada durante los años 2012-2020 asciende a 313 víctimas directas, según el INMLCF los periodos más críticos, como los muestra la gráfica, están entre los años 2012- 2014 (153 casos), y entre año 2017- 2020, cuando presentaron (108) casos.

De acuerdo con el CNMH (2018), el 40.82% de los actores que han ocasionado la desaparición son desconocidos, el 28.5% son grupos post desmovilización, el 26.53% corresponde a la guerrilla y el 4.08% grupo no identificado. La razón para que en la mayoría

de los casos el autor sea desconocidos está relacionada con el hecho que las familias o bien no tienen indicios del posible autor, o bien el temor por las represalias por que siguen viviendo cerca a los victimarios, acudan a la entidad responsable para iniciar la búsqueda, pero sin mencionar al responsable de los hechos.

Según los entrevistados, para el periodo 2017 en adelante, los incrementos de las desapariciones estarían enmarcadas en las confrontaciones armadas y divisiones internas entre “La Local”, tanto en el barrio Lleras de la comuna 3 como en los barrios Antonio Nariño y Colón. Por otro lado, con la ruptura del acuerdo de no agresión existente entre “La Local y la Empresa”, y la reactivación de las llamadas “fronteras invisibles”, en lo rural los nuevos grupos de disidencia también están haciendo uso de esta para tomar venganza y generar temor.

El Excombatiente del Bloque Calima declaró: “La desaparición ha sido una de las modalidades más usadas por los grupos armados en Buenaventura, por ejemplo, en la época en la que La Empresa tenía el control de la ciudad, desaparecieron a muchos muchachos, que al final fueron asesinados y enterrados en cementerios clandestinos especialmente en la comuna 10 y 12, en los barrios Bello Horizonte, Carlos Holmes, Nuevo Amanecer entre otros. Esto lo hacían y lo continúan haciendo para no dejar rastros a los sabuesos de la fiscalía, pero también para evitar los trabajos de amarre y brujería acostumbrados en el Pacífico. Actualmente muchos de los mototaxistas que pasan las fronteras invisibles los desaparecen, ejemplo de ellos, cualquiera que ose entrar al Colón y Antonio Nariño, que sea de barrios de sus contrincantes es seguro que desaparecen, y aunque se los llevan a plena luz del día y en presencia de la comunidad no hay nada que hacer, los matan y los familiares nunca, pero nunca los van a volver a ver y pobre del familiar que se atreva a ir a reclamar, corre la misma suerte. (Excombatiente del Bloque Calima, entrevistado N°7, 10 de octubre de 2020).

Según lo planteado en las entrevistas, los nuevos grupos armados amenazan a los familiares de las personas desaparecidas y a las comunidades para que no hagan denuncias, evitando así ser visibilizados y seguidos por la fuerza pública, en consecuencia, se presume que el subregistro de este hecho es alto tanto a nivel rural como urbano.

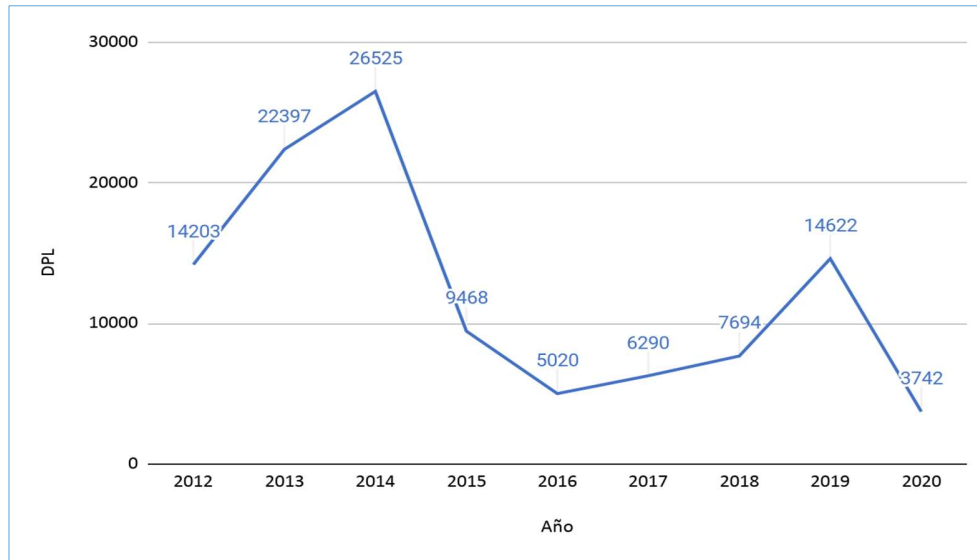
Al respecto, la líder de la organización de mujeres en entrevistada cuenta:

“De la zona rural entre los ríos Mayorquin, Raposo y Naya desaparecieron 10 jóvenes y si bien en todas las comunidades se habla de la situación, hasta llegar al oído de las autoridades, los familiares de los desaparecidos no se atreven a realizar ningún trámite ante las autoridades bajo la premisa, que ya tienen el dolor de una pérdida, pero no pueden arriesgarse a perder más miembros de la familia porque eso sería devastado”. (Líder organización de mujeres, comunicación personal, entrevistado N° 6, 08 de octubre de 2020).

En lo que respecta al área urbana, se da un subregistro, pues dadas las divisiones internas y rencillas entre los grupos, han desaparecido a varios de sus integrantes, y bajo amenazas a los familiares hacen imperar la ley del silencio.

6.4.Desplazamiento forzado

Figura 10: Desplazamiento forzado



Nota. La figura muestra las cifras de desplazamiento forzado en los años 2012 al 2020 en Buenaventura. Fuente. RNI- (2021). Elaboración propia.

El desplazamiento forzado y las amenazas siguen siendo un fenómeno de victimización masiva en la población civil; diversos estudios e informes, sin ir tan lejos el Ministerio Público mencionan que cuando toma las declaraciones de las familias afectadas, generalmente estas también han sido victimizadas por otras acciones violentas tales como amenazas, masacres, asesinatos selectivos, violencia sexual, sevicia y destrucción de bienes muebles e inmuebles.

El desplazamiento forzado es el hecho victimizante con mayor impacto en la población de Buenaventura, con un total de 285.510 víctimas según los datos de la RNI-2020, esto representa aproximadamente el 70% de sus habitantes; de estas entre el 2012 y el 2014 según la misma fuente se reportaron 63.125 reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado, posteriormente ante el evidente proceso de paz y la militarización de Buenaventura en 2015-2017 hay un importante descenso, las cifras fueron de 20.778 personas.

Para el siguiente periodo contemplado entre los años 2018 y 2020, se presentaron 26.058 personas desplazadas, lo que indica que este hecho victimizante va en aumento, en particular el desplazamiento intraurbano. En lo rural disminuyó atribuible a razones como un nuevo mecanismo de autoprotección de las comunidades rurales afrodescendientes e indígenas, quienes prefieren confinarse a desplazarse, dadas las experiencias del pasado en donde las víctimas no recibieron respuestas estatales adecuadas, también debido a la presión e intimidación por las nuevas dinámicas armadas.

6.5. Violencia sexual

La violencia sexual es una modalidad usada con un amplio espectro por diversos actores armados quienes han utilizado el cuerpo en particular de la mujer, como botín de guerra, para causar terror en la población o como estrategia para acallar, “*calladita se ve más bonita*” frase usada por una líder entrevistada.

El RNI reportó 32.635 víctimas de violencia sexual a nivel nacional, de las cuales 780 pertenecen a Buenaventura, representando un 2.4%; sin embargo, a través de la presente investigación se ha notado de manera exponencial el subregistro en todos los hechos victimizantes y de manera marcada en las denuncias y declaraciones en donde hubo violencia sexual.

En referencia al tema, el CNMH (2017). La Guerra Inscrita en el Cuerpo. El informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, da a conocer dos periodos en donde la violencia sexual es instrumentalizada por los actores armados:

“Entre los años 2000 y 2005, y en concordancia con la arremetida paramilitar, el despliegue de su proyecto armado y el fortalecimiento y recrudescimiento de las acciones de las guerrillas, se registra el 45,7 por ciento de los casos. El segundo pico corresponde al intervalo entre 2011 y 2014, periodo en el cual se registra el 11,8 por ciento de los casos. Esto en concordancia con el repunte del accionar de los Grupos Armados Post Desmovilización -GAPD y el reacomodo de las guerrillas, en particular de las FARC-EP”. (p.17).

En relación con los perpetradores, el Observatorio de Memoria y Conflicto (en adelante OMC)¹⁴

“Registra que los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos, es decir el 32,2 por ciento y las guerrillas han sido responsables de 4.722 casos, es decir el 31,5 por ciento. Agentes del Estado han sido responsables de por lo menos 206¹⁵ casos registrados y los GAPD son responsables de 950 casos. Hay un importante número de casos en los que no se ha establecido el responsable: 3.973”. (p.8).

¹⁴ Con corte del 20 de septiembre de 2017 el Observatorio de Memoria y Conflicto (en adelante OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (en adelante CNMH) contabilizó 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado.

¹⁵ Varias defensoras de derechos humanos y de organizaciones de mujeres en Buenaventura, Valle del Cauca, señalan que desde el año 2008 la fuerza pública se asentó en lugares estratégicos de la ciudad como en las comunas 3, 5 y 12, en el marco de la estrategia de militarización denominada “Operación Orión de Buenaventura”, impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (CNMH, 2015b, página 200). En la memoria de los bonaverenses, como constató el CNMH (2015b), la militarización produjo un gran terror entre la población, puesto que aumentó el involucramiento forzado de niños, niñas, mujeres y jóvenes a la confrontación, ya no solo por parte de los grupos armados ilegales sino ahora por parte de la fuerza pública (CNMH, 2015.P. 87, p. 201).

Para el distrito de Buenaventura la violencia sexual ha estado y sigue latente, inmersa en las memorias y en el cuerpo de las víctimas de violencia sexual. Al respecto una líder de la organización de mujeres en entrevista declaró:

“Lo recuerdo como si fuera ayer, en 1998-1999 se formó en Buenaventura un grupo armado llamado “Los Tumba Puertas” este no solo estaba concentrado en delinquir, también empezó a violar mujeres y niñas delante de sus esposos e hijos y se burlaban de ellos.

Días después en el año 2000, un día amaneció todo Buenaventura lleno de letreros en donde anunciaban la llegada del Bloque Pacífico o Bloque Calima y estos siguieron violando también a las mujeres y las niñas, recuerdo que un día había una fila como 30 hombres armados y pregunté para qué era esa fila, me dijeron que me fuera que no podía decir nada: “Calladita se ve más bonita”. Después me di cuenta que esa fila era porque el jefe de la banda ya se había cansado de la mujer que tenía y la había dejado para los demás”. (Líder organización de mujeres, comunicación personal, entrevistado N° 6, 08 de octubre de 2020).

En octubre de 2020, la secretaria de la mujer a través de la alcaldía municipal convocó a un consejo extraordinario de seguridad por el incremento en los casos de violencia sexual, según esta secretaria van 90 casos denunciados en lo que va del año (2020) esta cifra al parecer es solo en menores de edad.

Según los entrevistados dan cuenta que las familias y las víctimas están recibiendo fuertes amenazas para que no denuncien, se han presentado casos hasta de despojo de sus viviendas y desapariciones.

La líder de la organización de mujeres declaró: “La semana pasada vimos que llegó una camioneta a una casa del barrio en la comuna 12, con varios hombres, llevaban armas largas, se llevaron una muchacha de la casa y amenazaron a la mamá de no denunciar, esta es la fecha que no se sabe que paso con la niña y la mamá está muy angustiada. Y pues, al no denunciar no hay legitimidad de lo

que está pasando, hay mucha impunidad. Además de la desconfianza que hay ante los actores públicos, es sabido que -los legales- también trabajan con los grupos armados. por eso nadie se atreve a denunciar. (Líder organización de mujeres, comunicación personal, entrevistado N° 6, 08 de octubre de 2020).

La parte rural del municipio tampoco se escapa de este fenómeno, según algunas expresiones de las mujeres del Naya sienten que el Frente 30 de las FARC-EP ha dejado un gran vacío frente a la seguridad tanto física como alimentaria.

Al respecto una líder de la organización de mujeres en entrevista declaró:

“Después del 2016 cuando las FARC-EP negoció la Paz, los grupos de las AUC que estaban en casco urbano de Buenaventura empezaron a hacer presencia sobre las comunidades de los ríos, se ha incrementado las extorciones y la violencia sexual cosa que antes era escasa o nula - ellas están viviendo lo que nosotras vivimos en la época de los paramilitares”. (Líder organización de mujeres, comunicación personal, entrevistado N° 6, 08 de octubre de 2020).

Se podría concluir que la violencia sexual contra las mujeres en Buenaventura, es una de las consecuencias humanitarias con el mayor número de casos de subregistro, y que las circunstancias en las que se ocasionan están relacionadas con su papel de liderazgo, el riesgo de estar en una relación real o presunta con miembros de diferentes actores armados; las condiciones de vulnerabilidad y la necesidad de sobrevivencia económica de las familias, llevan a que las menores se vea expuestas a ser usadas como objeto sexual por los actores armados.

Conclusión del capítulo:

En el presente capítulo se analizaron las implicaciones de la violencia armada en los habitantes de Buenaventura a través de la revisión de los datos estadísticos, las percepciones dadas por los entrevistados y otras fuentes de información como los informes y alertas tempranas de hechos victimizantes como el Desplazamiento forzado, los Homicidios, Desapariciones y Violencia Sexual.

Dentro del análisis de las consecuencias humanitarias se evidenciaron dos situaciones que afectan la medición de impacto, por un lado, las cifras que ofrecen las diferentes bases de datos oficiales como: INMLCF, RNI, Policía y CNMH, están no están unificadas, lo que limita las posibilidades de medir a plenitud las consecuencias humanitarias ante la magnitud del fenómeno de la violencia.

Por otro lado, se evidenció un alto subregistro asociado a diferentes factores como lo menciona la CNMH (2015 p. 217-218), esto se debe a factores que afectan la medición de impacto en consecuencias humanitarias, donde se relacionan los siguientes:

Tabla 5 *Factores que inciden en el subregistro de los hechos victimizantes en Buenaventura*

1	Temor a represalias de los victimarios.
2	La corrupción de las instituciones del Estado, en particular las Fuerzas Militares y la Policía.
3	Los cambios en la nueva Ley 1448/2011, limitando el reconocimiento a víctimas de actores armados, no categorizados como partes en el conflicto armado, además de que la Unidad para las Víctimas en su proceso de valoración centra sus análisis en una mirada limitada del contexto.

-
- 4 Temor por la estigmatización y revictimización de ciertas modalidades de violencia, por ejemplo, la violencia sexual.
 - 5 Los actores armados obligan a las comunidades a guardar silencio para evitar ser visibles, perseguidos y atacados.
 - 6 La renuencia de las autoridades a aceptar que la violencia existe, como un mecanismo de invisibilización del problema.
-

Nota. Información tomada del CNMH (2015). Elaboración propia.

Adicional a los factores ya mencionados, se denota que la guerra ha permeado todas las esferas de la población, al punto de darse un tipo de camuflaje donde es difícil identificar si la víctima era una persona civil o hacía parte del grupo armado; en ese sentido buena parte de la población, en particular los jóvenes, son vistos por las autoridades y BAO como potenciales enemigos y/o integrantes de dichas bandas.

Lo anterior se ve de manera especial en los barrios de las comunas 3, 9, 10, 11 y 12, en donde el conflicto es más álgido. En estos lugares la estigmatización hace que se limite el acceso de los pobladores a los servicios domiciliarios, oferta institucional y programas de índole cultural, deportivo, formación y de generación de ingresos.

También el cumplimiento parcial del Estado en el proceso del DDR con las FARC-EP ha sido un factor determinante en el incremento de las acciones violentas que desencadenaron nuevamente consecuencias humanitarias en la población civil, perpetuando la violencia armada en Buenaventura

7. Conclusiones

De acuerdo con los resultados expuestos en el proyecto de investigación, se relacionan los principales hallazgos de la investigación como conclusiones finales del trabajo.

Preámbulo a los hallazgos

Para comprender los hallazgos de esta investigación primero es importante retomar el contexto y la problemática general que se vive en el Puerto de Buenaventura. Como lo mencionamos en los anteriores capítulos, se referencian varios informes que dan cuenta de la violencia; uno de los más representativos es el informe de la (CNMH, 2015), Buenaventura: “*Un Puerto sin comunidad*”, en él se encuentra una síntesis del contexto y el trasfondo de todas las violencias especialmente las de carácter cultural y estructural que van a revertir en las dimensiones de las violencias directas y de las organizaciones armadas ilegales en relación con el DDR, que han sido el objetivo principal de esta investigación.

Violencias directas que han convertido a Buenaventura en un paisaje de muerte y de enfrentamiento entre grupos armados ilegales y narcotraficantes que se disputan el control territorial y las rutas del tráfico de armas y de estupefacientes, y en uno de los municipios de Colombia con el mayor número de desplazados. Hoy la situación de Buenaventura es dramática. El territorio está dividido y controlado por actores armados que amenazan, desaparecen, violentan sexualmente a las mujeres, reclutan forzosamente a menores en sus filas.

Hallazgo 1: Reconfiguración de los grupos en el territorio

Durante el proceso de DDR la situación de la violencia en el municipio de Buenaventura en su área rural y urbana ha sido fluctuante, si bien las cifras de los hechos victimizantes tendieron a la baja durante los diálogos de paz (2014- 2016), el panorama empezó a cambiar a partir del 2017, coincidiendo con la reincorporación a la vida civil de las FARC-EP; al mismo tiempo se evidenció la reacomodación o ingreso de nuevas estructuras armadas, en particular las asociadas a la disidencia de las FARC. Además, el ELN intensifica sus confrontaciones armadas y copa los territorios dejados por las FARC-EP, también busca el ingreso al área urbana, a través de pequeñas células. En lo concerniente a las BAO, estas siguen intentando apoderarse de las rutas del narcotráfico, pero sin la experiencia, ni el poder militar que les permita lograr sus objetivos a plenitud.

Hallazgo 2: Cumplimiento parcial del Estado en el proceso de DDR y las consecuencias para los excombatientes

El cumplimiento parcial del Estado en el proceso de DDR ha sido un factor influyente para el rearme de excombatientes en Buenaventura, que obedece a tres elementos principales:

1. El incumplimiento en los programas de desarrollo socioeconómico, dada la baja implementación en los proyectos productivos comunitarios. Para el Pacífico se tenía prevista la conformación de tres cooperativas, dos de ellas en Guapi y Timbiquí, que no han iniciado a implementarse hasta el momento de la investigación. Una tercera en Mayorquin, área rural de Buenaventura que se encuentra en su etapa inicial de implementación (formación y generación de habilidades y competencias); esto indica que aún no está siendo rentable económicamente para sus beneficiarios.

2. La situación de riesgo para los excombatientes y sus familias, ante la incursión de otros grupos armados ilegales, las divisiones internas y la falta de una estrategia oportuna de seguridad estatal, acompañada de pérdida de confianza en el gobierno por las muertes, amenazas y desapariciones de líderes y excombatientes. Según el informe de INDEPAZ (2020), tan solo en el departamento del Cauca, en el periodo de 2016 a 2020, fueron asesinados 37 excombatientes y 226 líderes sociales.

En particular en el ETCR de la Elvira en Buenos Aires, Cauca lugar donde se trasladaron los excombatientes que actuaban en Buenaventura, diecisiete (17) de ellos al primer semestre del 2020 habrían sido asesinados.

3. La estigmatización, en lo cotidiano ha generado un punto de quiebre en el acceso a las oportunidades de reinserción en el ámbito social y laboral; adicionalmente la presión para retomar las armas dada su previa y vasta experiencia militar los convierte en objetivo fácil para engrosar las filas de los grupos armados que operan en la zona.

Hallazgo 3: Incremento de grupos armados en área urbana y rural de Buenaventura

El municipio de Buenaventura ha aportado al desarrollo económico del país por su conexión con el comercio exterior, sin embargo, su historia de violencia armada no cesa, pese a los intentos del Estado por detener las olas de violencia; muestra de ello es que antes del Proceso de DDR había presencia de cinco (5) grupos armados a saber: las FARC-EP, ELN y AGC en lo rural, y en el área urbana las bandas armadas disidentes de la antigua Autodefensa Unida de Colombia (AUC), “La Empresa y La Local”.

Al 2020 los grupos armados en Buenaventura ascendieron a siete (7), en lo rural el ELN, los grupos disidentes de las FARC, Columna Jaime Martínez y Segunda Marquetalia, esta última con presencia reciente en el Naya y Yurumanguí y con aparente alianza con el ELN.

En las zonas urbanas pasaron de ser dos (2) a cinco (5) La Empresa, Los Espartanos, Los Chotas; estos dos últimos surgieron por una división interna de “La Local”, no ligada intrínsecamente al DDR de las FARC. También el ELN con presencia en la zona peri urbana (corregimiento Ocho) y con pequeñas células al interior de la ciudad.

Finalmente entran al escenario los carteles del narcotráfico mexicano, según los entrevistados no han logrado identificar el cartel al que pertenecen, sin embargo, relacionan confrontaciones puntuales en el área urbana, y presencia más activa en el área rural del Naya por ser este un corredor estratégico para el narcotráfico y les permite la contratación de grupos armados locales como mercenarios para sus servicios.

Hallazgo 4: Movilidad de los combatientes al interior de los diferentes GAO y deslealtades

Los nuevos GAO, ya sean disidentes de las FARC o Bandas armadas organizadas urbanas en la ciudad, no cuentan con un adoctrinamiento político/ideológico claro, en consecuencia, se da una movilidad o cambio de bando en los integrantes de las estructuras armadas; resultado de ello, falta de lealtad, crueldad en sus acciones, siendo esta una relación solo mediada por intereses económicos. Razón para que haya una degradación del conflicto armado con total irrespeto por la vida y derechos inmersos de la

población civil; limitando la posibilidad de humanizar la guerra y dejando sin herramientas a las autoridades mediadoras en las negociaciones de paz.

Hallazgo 5: Alianzas estratégicas entre disidentes de las FARC y las BAO en el área Urbana

Aunque no hay indicios específicos de que las disidencias de las FARC existan directamente en la zona urbana de Buenaventura, la investigación arrojó que hay alianzas entre disidencia FARC y las BAO urbanas mediadas por el negocio del narcotráfico, el control de rutas en la zona rural y al interior del puerto. Alianzas cargadas de deslealtades, vendettas, dominación y codicia; además del auge de las relaciones mercenarias que profundizan la crisis humanitaria.

Hallazgo 6: Factores que favorecen el incremento de la violencia en Buenaventura

La violencia urbana en Buenaventura responde a factores multicausales como la pobreza estructural, la hiperconcentración de la riqueza que favorece al sector portuario y a los empresarios extranjeros, la discriminación racial, la segregación residencial, la asignación insuficiente de recursos económicos para las necesidades básicas de la población, la falta de intervención en planes y políticas sociales y de seguridad, aunado a la corrupción y el fortalecimiento de las economías ilegales.

Sumado a estas causas, las inconsistencias en la implementación del DDR se convirtieron en un factor más que ha profundizado el nivel de violencia urbana en Buenaventura, que se refleja en el incremento de víctimas: 112.403 entre 2012 y 2020 equivalente al 33%

del total histórico de víctimas. Este incremento es más evidente a partir del 2017 cuando los grupos armados presentes empiezan a reconfigurarse y aparecen en el escenario los nuevos grupos denominados disidentes de las FARC.

Hallazgo 7: Incremento de las consecuencias humanitarias periodo 2012-2020

La reconfiguración de los actores armados en el área rural y urbana, en el periodo comprendido entre el 2012 y 2020, ha complejizado el escenario de guerra, exacerbando los hechos de violencia e incrementando las consecuencias humanitarias como se mostró en las estadísticas de la desaparición forzada (313 casos), los homicidios (961 casos) y desplazamiento forzado (109.961), hasta el 2019 violencia sexual (197 casos).

A partir de las cifras mencionadas en los diferentes hechos victimizantes se halló un subregistro, impidiendo una consolidación precisa de ellos, en los cuales inciden factores como: temor a las represalias, a la estigmatización y revictimización de ciertas modalidades de violencia; por ejemplo, la violencia sexual, los esquemas de valoración por parte de la Unidad para las Víctimas la presión de actores armados hacia las comunidades para guardar silencio, entre otros.

Hallazgo 8: Visibilización y exigibilidad de derechos de la población civil.

La situación que viven los bonaverenses por el incremento de la violencia se ha logrado visibilizar y hacer exigibilidad de garantía de derechos, a través de la Sociedad Civil, como los líderes del paro cívico y líderes sociales, la Iglesia católica que ha jugado un papel fundamental como mediadora de conflictos y vocera de las comunidades vulnerables, la Defensoría del Pueblo a través de las alertas tempranas, y las denuncias públicas hechas por la ciudadanía a través de las redes sociales. Obteniendo que el Gobierno

Nacional y regional proponga estrategias para intervenir en Buenaventura, enmarcadas tanto en la seguridad como en programas sociales. Solo se espera que estas se hagan efectivas.

Hallazgo 9: Militarización de la ciudad como respuesta privilegiada al incremento de la violencia

Ante la situación de violencia e inseguridad en la ciudad, la respuesta privilegiada del Gobierno Nacional y regional para garantizar el orden público, ha sido a través del aumento de integrantes de la Fuerza Pública, trayendo resultados en doble vía. Por un lado, se han realizado capturas de integrantes de las BAO, la incautación de material de guerra, elementos de comunicación e incautaciones de altas cantidades de drogas ilícitas, las cuales serían transportadas hacia el exterior del país.

Por otro lado, dicho aumento de militares genera en la población zozobra y temor por los enfrentamientos armados al interior de los barrios, y desconfianza por supuestas alianzas que establecen algunos miembros de la Fuerza Pública con las BAO.

Si bien, no se desconocen los esfuerzos y logros en materia de la seguridad en Buenaventura, la influencia de los actores armados sigue siendo un factor desencadenante de violencias, ante esto persiste la negación de las autoridades de aceptar la nueva consolidación de los GAO. Ejemplo de ello el ministro del interior, Daniel Palacios, aseguró que “no existe control territorial por parte de bandas criminales que delinquen en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca)”. (RCN Radio febrero 2021).

Hallazgo 10: Mecanismos de Auto protección y resiliencia

Ante el panorama de violencia que a nivel histórico ha vivido Buenaventura, sus habitantes han desarrollado mecanismos de autoprotección y resiliencia que pasan por acciones colectivas de resistencia social y política, encaminadas a preservar la vida, evitar la muerte, detener el desplazamiento, defender el territorio y enfrentar el terror.

Acciones de resistencia plasmadas en procesos de movilización social, según el CNMH (2015): La Conmemoración del 9 de abril del 2013 que busco contribuir en la dignificación de la memoria de las víctimas y a solidarizarse con su sufrimiento, La Marcha del 19 de febrero del 2014 con la participación de más de 25.000 personas, bajo la consigna “Enterrar la Violencia en Buenaventura para Vivir con Dignidad”, Espacio de la Zona Humanitaria del Puente el Nayero en el Barrio La Playita, el 13 abril del 2014, fue declarado primer espacio humanitario en Buenaventura y el denominado Paro Cívico del 2017, donde los bonaverenses extendieron sus manifestaciones por 22 días, hasta que los movimientos cívicos y el Gobierno lograron un pliego de acuerdos: mejorar la educación, reabrir el hospital público del municipio, brindar más oportunidades de empleo, entre otros asuntos; y aunque se lograron ejecutar algunos puntos, la comunidad siente que las soluciones dadas hasta ahora son paños de agua tibia ante los grandes problemas que tienen.

Otros procesos de resistencia pacífica de la sociedad civil están del lado de la desobediencia civil, conmemoraciones que son llevadas a cabo por diferentes actores sociales como: miembros de organizaciones comunitarias de corte étnico, mujeres, iglesia, familiares de víctimas, y los jóvenes que emergen como actores fundamentales en la construcción de lenguajes alternativos de

resistencia como el rap, el hip –hop, el grafiti y la fotografía, usados en los procesos de denuncia, la reconstrucción de memoria, la reapropiación y defensa del territorio y la recuperación y re-significación de prácticas tradicionales y ancestrales como los canticos tradicionales denominados alabados, los ritos mortuorios, el uso de la medicina tradicional entre otros.

Conclusión general

En síntesis y de acuerdo a los resultados de la investigación, se puede determinar que entre el periodo 2012-2020, Buenaventura fue un municipio lleno de contrastes a nivel socioeconómico y que reconfiguró un contexto de violencia urbana entre las BAO, los narcotraficantes y los grupos disidentes de las FARC.

Las cifras oficiales en concordancia con las percepciones dadas por los entrevistados y referentes teóricos, dan cuenta del incremento de la violencia urbana, precisando que durante los primeros años del proceso de paz entre el 2012 al 2016, disminuyeron los índices de violencia y considerando que, a partir del 2017 según las cifras oficiales, estas fueron creciendo gradualmente.

El panorama actual de Buenaventura es dramático, el territorio urbano y rural está dividido y controlado por actores armados que con sevicia y crueldad amenazan, torturan, desaparecen, asesinan, violentan sexualmente en especial a niños y mujeres, reclutan de manera forzada o seducida a menores y jóvenes, para engrosar sus filas, dejando a su paso una estela de sufrimiento e incertidumbre en las víctimas y sus familiares; además de la fragmentación social, cultural y comunitaria. Estos fenómenos se alimentan de las problemáticas estructurales como, la hiperconcentración de la riqueza, alimentada por el gobierno central al favorecer una perspectiva desarrollista basada en un modelo neoliberal, sobre otra que propende por la protección y garantía de los derechos de sus habitantes,

aumentando la desigualdad, la pobreza y las prácticas de discriminación étnica; sumado a esto, se visibiliza la corrupción de sus dirigentes, el auge de las economías ilegales y la falta de implementación de políticas sociales y culturales que complejizan la problemática.

Otro factor preponderante encontrado en el actual incremento de la violencia, es el fragmentado y debilitado proceso de DDR de las FARC-EP, en particular con los frente 30, la Columna Móvil Arturo Ruiz y el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, aunado a la limitada capacidad del gobierno para ocupar el territorio dejado por este actor armado, favoreciendo la permanencia y reconfiguración de los grupos armados ya existentes en el territorio y la aparición de nuevos grupos interesados en tener el control territorial, las rutas del narcotráfico y las economías ilegales; de igual forma se evidencia el incumplimiento que se hace a los excombatientes en los programas de desarrollo socioeconómico, las pocas garantías de seguridad y la estigmatización al intentar reintegrarse a la vida civil.

Por último y para hacer frente a dicha situación, los gobernantes a nivel nacional y regional han privilegiado una respuesta militar, la cual ha sido insuficiente para detener la oleada de violencia que no mejora las condiciones de vida, ni permite establecer otras estrategias de prevención y protección que involucren y comprometan a la comunidad; por otra parte las organizaciones de base comunitaria, los organismos internacionales defensores de Derechos Humanos y la iglesia, han generado propuestas que no son escuchadas, obligándolos a implementar acciones de resistencia y desobediencia civil, de la mano con estrategias de visibilización en el plano nacional e internacional...pero que sin embargo no ha sido suficiente para dar un giro positivo y trascendental a las problemáticas que aquí se presenta en la investigación.

Lo expuesto durante el presente trabajo, nos lleva a concluir que las inconsistencias en la implementación del proceso de desmovilización, desarme y reincorporación de las FARC-EP, se convirtió en un factor incidente y determinante en el incremento de la violencia urbana en Buenaventura durante este periodo de estudio, sin desconocer que la subyacen otros factores de carácter estructural y que es necesario revisar para dar respuesta a la idea de bienestar social y desarrollo en esta población de nuestro país.

8. Referencias

Álvaro, C. Á. (1990). La Violencia Urbana en Colombia. "Sistensis de un estudio exploratorio en una ciudad Colombiana". *Boletín Socioeconómico*, 64.

Arias, J. y Restrepo, E. (2010). Historizando raza: propuestas conceptuales y metodológicas. *Crítica y Emancipación*. (pp.45-64).
Disponibile en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ojs/index.php/critica/article/view/167>

Ariza, I. B. (2017). *Ánalysis N°01/13 Desarme, Desmovilización y Reintegración: Una Introducción Para Colombia*. Universidad Militar Nueva Granada.

Ariza, R. (2017). Objetivos del DDR con base en el Anuario de Procesos de Paz de la Escuela de Cultura de Paz .

Ávila, A., Botero, M., Castro, M., Córdoba, M., Hernández, Z., Santa C., D., . . . Valencia V., H. (2018). *Informe “Cómo va la Paz en el pacífico”*: Los desafíos del posconflicto en el Pacífico colombiano. Fundación Paz y Reconciliación [PARES].

Ávila A.(2019), *Detrás de la Guerra en Colombia*.Editorial Planeta.

Briceño R. (2002) La nueva violencia urbana de América Latina. *Sociologías*, Porto Alegre, Numero 4, Volumen 8, Julio,2002 p. (34-51)

Briceño, R (2007) *Violencia Urbana en América Latina: Un modelo sociológico de explicación*. Espacio Abierto, vol. 16, núm. 3, julio-septiembre, 2007, pp. 541-574

Camacho, A. y Guzmán, A. (1990) *Colombia, ciudad y violencia*. Bogotá: Ediciones Foro Nacional Caramés, A. (2006).

Análisis de los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) existentes en el mundo durante 2005. . En Caramés, *Escuela de paz (UAB) con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)*. (pág. 3).

Carrión M, F. (2008). *Violencia urbana: Un asunto de ciudad*. . *EURE (Santiago) vol.34 no.103 Santiago*, 111-130.

Calderón, P. (2009). *Teoría de conflictos de Johan Galtung*. Revista de paz y conflictos, N° 2, (p.60-81). CEPAL (2000) Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina (serie 41).

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5974/1/S0000001_es.pdf

CNMH, C. N. (2015). *Buenaventura: Un Puerto sin Comunidad*, Bogotá.

CNMH (2017), *La guerra inscrita en el cuerpo*. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, Bogotá.

CNMH. (2018). *Bloque Calima de las AUC Depredación Militar y Narcotráfico en el Sur Occidente Colombiano*. Bogotá D.C.: Informes N°2.

CODHES, C. p. (mayo de 2019). *www.codhes.org*. Obtenido de Informe sobre el Pacífico 2019 denominado “Continuidad de la Crisis Humanitaria”. : <https://codhes.files.wordpress.com/2019/06/informe-pacc38dfico-1er-trimestre-2019.pdf>

CONPAZ. (23 de agosto de 2020). *https://comunidadesconpaz.wordpress.com*. Obtenido de Se advierte sobre posible masacre en el Territorio Colectivo del río Naya: <https://comunidadesconpaz.wordpress.com/2020/08/23/se-advierte-posible-masacre-en-el-territorio-colectivo-del-rio-naya/>

CONPAZ, C. N. (08 de enero de 2020). *https://buenaventuraenlinea.com*. Obtenido de Las comunidades del río Raposo zona rural de Buenaventura se encuentran en riesgo, por posibles enfrentamientos entre el ELN y la Columna Jaime Martínez,: <https://buenaventuraenlinea.com/desplazamiento-y-amenazas-de-grupos-armados-en-zona-rural-de-buenaventura/>

Comisión de la Verdad y Reconciliación Colombia (2019) Buenaventura, un territorio lleno de contrastes <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/buenaventura-los-contrastes-del-puerto-pobreza>

Insight Crime (Abril 2014). La Evolución de los Urabeños. <https://es.insightcrime.org/investigaciones/la-evolucion-de-los-urabenos/>

Insight Crime (Abril 2019).). Buzos policiales de Perú y Ecuador buscan drogas en cascos de barcos es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/buzos-policiales-de-peru-y-ecuador-buscan-drogas-en-cascos-de-barcos/

DANE. (2018). <https://www.dane.gov.co>. Obtenido de Censo Nacional de Población y Vivienda-Colombia :

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-somos>

Espinosa, M. (16 de 04 de 2018). Los últimos 4 alcaldes de Buenaventura, investigados por corrupción. *El Tiempo*.

Espinosa, A. (2014). Frames y prácticas discursivas entre estado y poblaciones negras en Colombia: racismo estructural y derechos humanos. *Universitas Humanística*, núm. 78, julio-diciembre, 2014, pp. 307-330 <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UH78.fpde>

FARC-EP. (20 de marzo de 2020). <http://farc-ep.net>. Obtenido de “Manifiesto inicios de la segunda Marquetalia, continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del estado a los acuerdos de paz de la Habana”.: <http://farc-ep.net/?cat=27>

Flórez, J. y Ruiz, A. (2018). *Ciudad, Violencia, Memoria y Políticas de Seguridad: Buenaventura (1980-2013)*. En Guzman, A. (Ed.). *Violencia en cinco ciudades Colombianas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI* (pp.7-809). Universidad Autónoma de Occidente

Giraldo,N. (2013) Plan de mercadeo para la sociedad portuaria regional de Buenaventura S.A. (sprbun) julio 2012 – junio 2013)Tesis Pregrado, Universidad Autónoma De Occidente

- Comité del Paro Civico (13 de agosto de 2019).logros que trascienden los terminos de los acuerdos. <https://www.comite-civico.org/documentos/logros-que-trascienden-los-terminos-de-los-acuerdos/>
- Gisbert, T., Pinto, M. y Sulé, J. (2015). Asedio a Las Comunidades Los Impactos De una empresa catalana, Grup TCB, en Buenaventura, Colombia. Retrieved from http://www.taulacolombia.org/sites/default/files/informe Buenaventura_int_act_0.pdf
- Guillen Fuster, & Élide Doris. (2019). Método Fenomenológico Hermanéutico, Propósitos y Representaciones. *Psicología Educativa* , 201-229. Obtenido de Método fenomenológico hermenéutico. Propósitos y Representaciones.
- Gutiérrez Loaiza, Alderid (2012). Negociaciones de paz en Colombia, 1982-2009. Un estado del arte. *Estudios Políticos*, 40, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp. 175-200).
- Guzmán, A. (Ed). (2018) *Violencia en cinco ciudades colombianas, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI*. Programa editorial Universidad Autónoma de Occidente.
- Hernández, J. (24- 26 Junio 2008) *El Crimen Organizado en América Latina y El Caribe: mapeo del caso Centro Americano*, [Seminario Internacional]) *El Crimen Organizado en América Latina y El Caribe Amenazas y Perspectivas*. Ciudad de México, México

Husserl E. (1998), Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, Revista de Filosofía, N° 22, Pontificia Universidad Católica del Perú

Indepaz. (15 de julio de 2020). *indepaz.org.co*. Obtenido de Informe Especial: Registro de líderes y personas defensoras de DDHH, asesinadas desde, desde la forma del acuerdo de paz.: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Especial-Asesinato-lideres-sociales-Nov2016-Jul2020-Indepaz.pdf>

Indepaz (2020). *Informe Especial: Registro de líderes y personas defensoras de DDHH, asesinadas desde, desde la forma del acuerdo de paz*. Bogotá: Indepaz.

Instituto de Estudios, Geoestratégicos , & Asuntos Políticos. (junio de 2013). Obtenido de Cuaderno de Análisis N° 01/13 Desarme, Desmovilización Y Reintegración, DDR: Una Introducción Para Colombia: <https://iugm.es/wp-content/uploads/2017/02/Cuaderno-Análisis-DDR.pdf>

Instituto de Estudios Interculturales Pontificia Universidad Javeriana -IEI (2019) Buenaventura: el orden del caos Dinámicas históricas y territoriales del conflicto político, social y armado 1958-2016.

Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias Forenses (INML_CF), (2019), Informe Forenses Cifras de Lesiones de Causa Externa en Colombia 2019: <https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis>

Moreno. (2017). “Experiencias internacionales de paz”. Bogotá D.C.: Observatorio de Paz, Facultad de Ciencias Sociales - Universidad

Tadeo Lozano.

McDermott, J. (2014). El rostro cambiante del crimen organizado colombiano. *Perspectivas*, (9).

Nación, F. G. (20 de octubre de 2011). *Asegurado alcalde de Buenaventura*. Buenaventura.

Nación, F. G. (04 de marzo de 2019). *Fiscalia*. Obtenido de Cárcel para exalcalde de Buenaventura, su hijo y un exfuncionario por supuestas irregularidades en renuncia del exgerente del hospital local: <https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/carcel-para-exalcalde-de-buenaventura-su-hijo-y-un-exfuncionario-por-supuestas-irregularidades-en-renuncia-del-exgerente-del-hospital-local/>

Nación, F. G. (7 de septiembre de 2015). *A la cárcel Alcalde Buenaventura por supuestas irregularidades en contratación para cobertura educativa*. Buenaventura, Valle del Cauca: Boletín 11657.

Núñez Jairo, & Carvajal Panesso. (2015). <https://www.acnur.org>. Obtenido de ¿Cómo romper las trampas de pobreza en Buenaventura?: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2007/5270.pdf>

[ONU], N. U. (18 de agosto de 2016). <https://unmc.unmissions.org>. Obtenido de Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia:

https://unmc.unmissions.org/sites/default/files/n1626282_informe_sg_20160818.pdf

ONU. (13 de marzo de 2017). *Informe de mecanismo de monitoreo y verificación del acuerdo de paz y entre el Estado y las FARC -EP*. Bogotá D.C.: Mecanismo de Monitoreo y verificación.

ONU. (2006). “Introduction to the IDDRS”. En *Unitec Nations Development Programme* (pág. 19). Nueva York: Practice Note.

OXFAM (enero 2019) Informe, ¿Bienestar público o beneficio privado?

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración- ODDR (2012), Los procesos de desmovilización y reintegración y la política pública en Bogotá D.C. de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Pais, E. (12 de octubre de 2015). <https://www.elpais.com.co>. Obtenido de En dos años hubo más de doce mil desplazados en Buenaventura.: <https://www.elpais.com.co/valle/en-dos-anos-hubo-mas-de-doce-mil-desplazados-en-buenaventura.html>.

PARES,F.P.(Junio 2018). <https://pares.com.co>. Obtenido del informe como va la paz en el Pacífico.
<https://pares.com.co/2018/06/10/como-va-la-paz-pacifico/>

PARES, F.P. (4, enero 2019). <https://pares.com.co>. Procesos de Paz en Colombia, Obtenido de Fundación Paz y Reconciliación:

<https://pares.com.co/2019/01/04/procesos-de-paz-en-colombia/>

PARES, F. P. (04 de julio de 2019). <https://pares.com.co>. Obtenido de Informe Buenaventura: Una comunidad Gobernada por el miedo:

<https://pares.com.co/2019/07/04/buenaventura-una-comunidad-gobernada-por-el-miedo/>

PARES, F.P. (28 Agosto 2019) <https://pares.com.co> Obtenido de informe Más sombras que luces, un análisis de la seguridad en

Colombi: <https://pares.com.co/2019/08/28/mas-sombras-que-luces-un-analisis-de-seguridad-en-colombia/>

PARES, F.P (2 de agosto de 2020) <https://pares.com.co>. Obtenido de por ola de violencia, Buenaventura pide ayuda al Gobierno:

<https://pares.com.co/2020/08/02/por-ola-de-violencia-buenaventura-pide-ayuda-al-gobierno/>

PARES, F.P (2020) <https://pares.com.co> obtenida de informe Radiografía de la ominosa presencia de los carteles mexicanos.

Paz, C. I. (04 de enero de 2020). <https://www.justiciaypazcolombia.com>. Obtenido de Las comunidades del río Raposo zona rural de

Buenaventura se encuentran en riesgo, por posibles enfrentamientos entre el ELN y la Columna Jaime Martínez:

<https://www.justiciaypazcolombia.com/las-comunidades-del-rio-raposo-zona-rural-de-buenaventura-se-encuentran-en-riesgo-por->

[posibles-enfrentamientos-entre-el-eln-y-la-columna-jaime-martinez/](https://www.justiciaypazcolombia.com/las-comunidades-del-rio-raposo-zona-rural-de-buenaventura-se-encuentran-en-riesgo-por-posibles-enfrentamientos-entre-el-eln-y-la-columna-jaime-martinez/)

Pís, E. (04 de 02 de 2007). *Así fue la llegada de guerrilleros del Frente 30 de las Farc a Buenaventura*. Obtenido de elpais.com.co:

<https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/asi-fue-la-llegada-de-guerrilleros-del-frente-30-de-las-farc-a-buenaventura.html>

Pueblo, D. d. (07 de noviembre de 2017). <https://www.defensoria.gov.co>. *Informe de Riesgo por la situación de peligro que viven al*

menos 778 familias en Buenaventura : [https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6803/Defensoría-del-Pueblo-emite-](https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6803/Defensoría-del-Pueblo-emite-informe-de-riesgo-por-situación-de-peligro-que-viven-al-menos-778-familias-en-Buenaventura-Buenaventura-informe-riesgo-defensoría-del-pueblo.htm)

[informe-de-riesgo-por-situación-de-peligro-que-viven-al-menos-778-familias-en-Buenaventura-Buenaventura-informe-riesgo-](https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6803/Defensoría-del-Pueblo-emite-informe-de-riesgo-por-situación-de-peligro-que-viven-al-menos-778-familias-en-Buenaventura-Buenaventura-informe-riesgo-defensoría-del-pueblo.htm)

[defensoría-del-pueblo.htm](https://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6803/Defensoría-del-Pueblo-emite-informe-de-riesgo-por-situación-de-peligro-que-viven-al-menos-778-familias-en-Buenaventura-Buenaventura-informe-riesgo-defensoría-del-pueblo.htm)

Pueblo, D. d. (02 de noviembre de 2018). <http://www.indepaz.org.co>. Obtenido de Alerta Temprana de Inminencia, N° 079-18, Para los

Consejos Comunitarios de los ríos Yurumanguí, Raposo, Cajambre, Mallorquín y Anchicayá municipio de Buenaventura,

departamento de Valle del Cauca.: [http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/02/AT-N°-079-18-VAL-](http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/02/AT-N°-079-18-VAL-Buenaventura.pdf)

[Buenaventura.pdf](http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/02/AT-N°-079-18-VAL-Buenaventura.pdf)

Pueblo, D. d. (23 de enero de 2019). <https://es.scribd.com>. Obtenido de Alerta Temprana N ° 007-2019, de Inminencia, debido a la

situación de riesgo de vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derecho internacional Humanitario que enfrenta la población

civil del casco urbano del municipio de Buenaventura. : [https://es.scribd.com/document/398920989/AT-N-007-19-VAL-](https://es.scribd.com/document/398920989/AT-N-007-19-VAL-Buenaventura#from_embed)

[Buenaventura#from_embed](https://es.scribd.com/document/398920989/AT-N-007-19-VAL-Buenaventura#from_embed)

Preciado, S. (25 de Noviembre de 2015). El puerto de Buenaventura y su evolución. Obtenido de Importancia portuaria en desarrollo del Comex
Importancia portuaria en desarrollo del Comex: <https://comunidad.iebschool.com/stellapreciado/2015/12/10/el-puerto-de-buenaventura-y-suevolucion/>

República, P. d. (29 de mayo de 2017). *presidencia.gov.co*. Obtenido de Comunicado No.19. Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final- CSIVI conformada por representantes del Gobierno Nacional y las FARC-EP.: <http://es.presidencia.gov.co/noticia/170529-Comunicado-No-19-Comision-de-Seguimiento-Impulso-y-Verificacion-a-la-Implementacion-del-Acuerdo-Final-CSIVI>

Restrepo, A., Vargas , N., Montoya C., C., & Ávila, A. (11 de septiembre de 2018). *pares.com.co*. Obtenido de DEL NAYA AL MATAJE: El Repunte de la Guerra: <https://pares.com.co/2018/09/11/del-naya-al-mataje-el-repunte-de-la-guerra-i/>

Ruth, P. (14 de diciembre de 2015). <https://comunidad.iebschool.com>. Obtenido de El puerto de Buenaventura y su evolución: <https://comunidad.iebschool.com/stellapreciado/>

S.A. (12 de noviembre de 2016). *Acuerdo F. de Paz*. Obtenido de Cancilleria: https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf

Sanchez. (2011). La Comisiones de estudios sobre la violencia en Colombia, La "voz crítica". 159-

La familia Ambuila, la Dian y la corrupción en Buenaventura (2020) <https://www.semana.com/nacion/articulo/la-familia-ambuila-la-dian-y-la-corrupcion-en-buenaventura/608447/>

Silva, M. d. (2008). Violencia Urbana "Sociabilidad violenta e agenda pública". En M. L. A., *Vida sob cerso- Violencia e rotinas favelas Rio de Janeiro* (págs. 35-46). Rio de Janeiro: Nova Fronteira/FAPERJ.

Steenken, C. e. (2008-2017). *Desarme, desmovilización y reintegración (DDR): Descripción General Práctica*. Estados Unidos: Harvey J. Langholtz, Ph.D.

Urrea G (2012) Transformaciones sociodemográficas y grupos socio raciales en Cali a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En E. Vasquez Benítez, *Historia de Cali en el siglo 20: sociedad, economía, cultura y espacio* (pp.145-194), Cali, Colombia: Universidad del Valle.

Vicenc, & Fisas. (2011). Mapa mundial integrado sobre conflictos y construcción de paz 2019. En D. d. Pau.. Universidad Autónoma de Barcelona (EPS).

9. Apéndices

9.1. Consentimiento informado

Proyecto de investigación: VIOLENCIA URBANA Y EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN DESARME Y REINCORPORACIÓN (DDR) DE LAS FARC-EP EN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. 2014-2020

Yo, _____ identificado(a) con la cédula de ciudadanía _____ de _____, declaro que he sido informado(a) de los objetivos y fines del presente proyecto de investigación, adelantado por las estudiantes Ligia Morales & Maria Sol Calderón, de la Maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Además, declaro que me siento conforme con los mismos y que en forma libre y voluntaria, acepto colaborar en el desarrollo del estudio, en mi calidad de FUNCIONARIO PÚBLICO, HABITANTE Y LÍDERE COMUNITARIO, ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE, EX INTEGRANTES FARC Y MIEMBROS BANDA ARMADA DE LA CIUDAD DE BUENAVENTURA- VALLE DEL CAUCA.

He recibido información sobre mi derecho a realizar las preguntas que considere necesarias durante el proceso, así como el derecho a conocer alguna información nueva sobre la investigación, si la hubiera, y a retirarme el proceso cuando lo crea necesario. Reconozco que la presente investigación no representa riesgos para mi salud, ni beneficios económicos, que no recibiré un pago de dinero por hacerlo. Por otra parte, la información que yo suministre no será relacionada con mi nombre y en ningún caso mi nombre aparecerá en ninguna publicación, solo se registrará un código numérico (Por ejemplo: Entrevistado 1/Participante 1)

Dejo constancia que recibo una copia del presente documento y en caso de querer contactarme con las investigadoras Ligia Morales Polanco & María Sol Calderón lo haré a los teléfonos, 3114910778-3208597520 y a los siguientes correos electrónicos:

moralligiap@gmail.com- solstar309@gmail.com

Expreso mi libre aceptación para responder a las preguntas que se me hagan y para participar con mis respuestas y los datos de mi familiar o estudiante, en el estudio.

Firma del Entrevistado (a)

Firma del Investigadora

Ligia A. Morales Polanco CC N°

María Sol Calderón CC N° 40.782.122

Firmado en Buenaventura, a los _____ del mes de _____ de 2020

Se firma con dos copias y se entrega una de ellas, al participante.

9.2. Texto, entrevistas aplicadas

Es de resaltar que las preguntas rectoras diseñadas, en algunas entrevistas no se aplicaron manera directa por la diversidad de los entrevistados, sin embargo, se obtuvo valiosa información que permitió desarrollar un buen análisis de acuerdo al objetivo trazado durante la elaboración de las preguntas, en total fueron siete personas entrevistadas con diversos perfiles como fue referenciado en la metodología de la investigación.

9.3. Rejilla de preguntas entrevistas semiestructuradas

REJILLA SISTEMATIZACIÓN – ENTREVISTAS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, HABITANTES Y LÍDERES COMUNITARIOS, ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE, EX INTEGRANTES FARC Y MIEMBROS BA BUENAVENTURA- VALLE DEL CAUCA

Tabla 6: Rejilla de preguntas entrevistas semiestructuradas

Fecha	Dí	Me	Añ	Nombre Entrevistado		Sexo	Hombre	Mujer
	a	s	o					
Estudios realizados						Ocupación /oficio		
Organización a la que pertenece						Tiempo de pertenencia		

Cargo que desempeña			
----------------------------	--	--	--

VARIABLE	PREGUNTA
Presencia de las FARC antes del proceso de PAZ (DDR) y la relación con las Bandas armadas (BA) que operan en Buenaventura,	<p>Respecto a las FARC</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Desde cuándo recuerda que las FARC hicieron presencia en el casco urbano de Buenaventura? • Qué tipo de acciones realizaban las FARC dentro de la ciudad y cómo estas afectan o impactan en la comunidad. • En qué momento sale las FARC de la ciudad y cómo impacta en la violencia al interior de la ciudad. <p>Respecto a las Bandas armadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Sabe usted desde cuándo y cómo fue el proceso para que las BA llegaran a Buenaventura? • ¿Qué tipo de acciones realizaban la BA dentro de la ciudad y cómo estas afectan o impactan en la comunidad? • ¿Existió alguna relación entre la aparición las BA y la presencia de las FARC en Buenaventura?
Durante el proceso de paz en particular al proceso de Desarme Desmovilización y Reinserción (DDR)	<ul style="list-style-type: none"> • Que conoció del proceso de negociación de las FARC con el estado y cómo cree que este afectó a Buenaventura. • Cuando se da el proceso de DDR hubo cambios en la dinámica de la violencia urbana. • ¿Tuvo conocimiento si se desarrollaran acciones violentas entre los excombatientes, FP y BA?
Posterior al proceso de DDR.	<ul style="list-style-type: none"> • Considera que la violencia urbana se incrementó, disminuyó o se mantiene después del DDR. • Cree usted que las disidencias de las FARC han tenido y/o tendrán un impacto en la violencia que se vive en la ciudad. • ¿Cree usted hay una actual relación entre las BA con la disidencia y si la hay como se da?

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Cuál es el impacto (consecuencias humanitarias de las acciones de la disidencia en los habitantes del casco urbano de Buenaventura. |
|--|---|

Nota. Información del Manual Moderno. *Proceso de Investigación Cualitativa. Epistemología, metodología y aplicaciones.* Bogotá: Nelly, B. (2011).